

**La transformación del conflicto en Ituango:
De una guerra persistente al conflicto social**

Hugo Herrera Lopera

**Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Derecho y Estudios Políticos
Maestría en Estudios Políticos
Medellín
2018**

**La transformación del conflicto en Ituango:
De una guerra persistente al conflicto social**

Hugo Herrera Lopera

Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Estudios Políticos

Director

Ph.D. Carlos Alberto Builes Tobón

**Universidad Pontificia Bolivariana
Escuela de Derecho y Estudios Políticos
Maestría en Estudios Políticos**

Medellín

2018

Declaración de originalidad

Medellín, octubre 19 de 2018

Yo, Hugo Albeiro Herrera Lopera, identificado con c.c. 70976887.

“Declaro que esta tesis de grado no ha sido presentada para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad” Art. 82 Régimen Discente de Formación Avanzada.

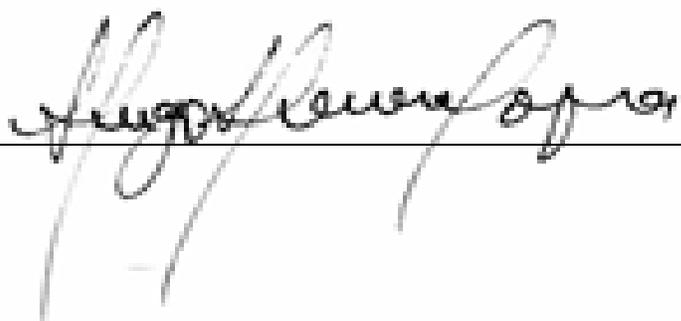


Tabla de contenido

Prólogo	7
Introducción	1
Capítulo 1	10
El conflicto que siempre ha estado: desde el conflicto armado hasta el conflicto social	10
1.1. Una historia de conflicto	13
Mapa 1	16
Ubicación de Ituango en Antioquia	16
Mapa 2	17
Ituango, cabecera municipal y distribución veredal	17
Tabla 1	19
Datos de población de Ituango a 2017	19
1.2. El conflicto armado: una historia con herida abierta	23
1.3. El conflicto social: de lo que estamos hechos	27
Tabla 2	38
Organizaciones e instituciones en el municipio de Ituango	38
1.3.1. Seguridad	40
1.3.2. Justicia	41
1.3.3. Inclusión social y oportunidades	42
1.3.4. Recursos ambientales	43
Capítulo 2	44
Entre un Estado ausente y un Estado cohesionador	44
2.1. Una institucionalidad desbordada y ausente	46
2.2. La participación ciudadana: un fundamento para construir ciudadanía	56
2.3. Los conflictos sociales latentes	58
2.3.1. La seguridad no es una percepción, es un conflicto social	60
Figura 3	66
Parques Nacionales Naturales y cultivos de coca en Colombia	66
2.3.2. Justicia en tiempos de paz: de la ilegalidad a la legalidad	70
2.3.3. Inclusión social y oportunidades: las brechas que debemos cerrar	77
Tabla 3	82
Inversiones de Hidroituango en el municipio de Ituango, marzo de 2018	82
Tabla 4	87
Inversiones de Hidroituango que dinamizan la economía regional y el empleo	87
2.3.4. Recursos naturales: un conflicto socio ambiental en potencia	90
Capítulo 3	92
La transformación del conflicto: un conflicto ambiental es un conflicto social	92
3.1. La teoría de los derechos Desca: los derechos de (nos) otros	98

3.2. La transformación del conflicto social: de la resolución a la trascendencia	102
Conclusiones	109
Anexos	114
Anexo 1: Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango	114
Anexo 2: Hilda Oquendo Olivares, líder de la Red Mujeres Unidas del Norte de Antioquia	126
Anexo 3: Anónimo, mujer discapacitada de Ituango	129
Anexo 4: Anonimo, ciudadano de Ituango	133
Anexo 5: Esteban Úsuga, líder juvenil comunitario de Ituango	137
Anexo 6: Isbelia Montoya, profesora de la Institución Educativa Municipal	140
Anexo 7: Paola Andrea Gutiérrez Marín, comisaria de familia de Ituango	141
Referencias	147

Resumen

Ituango, ubicado en la zona del norte lejano antioqueño, ha sido escenario de un conflicto armado que lo ha sumido en una guerra violenta y en una estigmatización dolorosa; las investigaciones sociales y políticas se han centrado en la conquista y la consolidación de ese territorio como fuente de conflicto armado, pero poco se ha abordado el conflicto social, ese que subyace en una región ávida de oportunidades. Esta investigación aborda el conflicto social, como posibilidad de transformación en oportunidades, desde la teoría de conflicto social del liberal Ralf Dahrendorf y la transformación y la trascendencia del conflicto de J. Galtung. Ituango es una región que ahora se merece que el conflicto se transforme en su oportunidad de surgir mediante la participación de su sociedad civil.

Palabras clave: Conflicto social, grupos sociales, participación ciudadana, teoría del conflicto, transformación de conflictos.

Prólogo

Este espacio final se lo merecen las comunidades, las fuerzas vivas de la sociedad civil y la institucionalidad de Ituango. Son ellos los que han puesto el pecho y el coraje para que su territorio perviva y para que la fuerza de la guerra no los haga decaer.

Fueron muchos los espacios y las conversaciones sostenidas, formal e informalmente, con diferentes personas que habitan, habitaron o migraron por diferentes circunstancias de Ituango; no todo fue por la guerra, también hay sueños y metas que a muchos los llevaron por otras sendas.

En todas las conversaciones sobresale la alegría y la esperanza. La ituanguina es una sociedad resiliente, viva, proactiva, que tiene ganas de surgir y dejar atrás lo malo para atender a las oportunidades. Eso sí, sin olvidar su historia que ha estado marcada por la violencia y la estigmatización, pero que la guardarán como memoria de lo que fueron y quieren ser.

Recibir la historia y la memoria viva de historiadores, líderes, profesores, deportistas, concejales, madres comunitarias, mujeres luchadoras (ideales se dicen a sí mismas), jóvenes, líderes religiosos y funcionarios de diferentes instituciones, enriquece este trabajo, que es un acercamiento, somero por qué no decirlo, a una localidad llena de historia y de oportunidades por venir. En este texto, en las entrevistas y en las conversaciones quedarán guardados esos aportes que bien vale la pena que se preserven como memoria histórica del municipio.

Introducción

El norte lejano del departamento de Antioquia es una región cuyos indicadores dan cuenta del abandono estatal. Municipios como Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño y San José de la Montaña, hacen parte de ella. Allí se han asentado históricamente diferentes organizaciones al margen de la ley, tanto de izquierda como de derecha; es pues una región signada por el conflicto armado. Pero tal vez sea el ruido del conflicto el que no permite un afloramiento de los conflictos que subyacen en la zona. En ese marco perviven más de 50 mil habitantes que conforman esa subregión. Pero destaca entre ellas una población que ha sufrido, con más ahínco, los embates de la guerra: Ituango. Y ello hace que tampoco se noten otros conflictos sociales.

En este municipio los actores de la guerra enfocaron mucho de su accionar. Pero en medio de la violencia, las comunidades, las fuerzas vivas, la sociedad civil, por la coerción que han ejercido los grupos al margen de la Ley, nunca han identificado la institucionalidad; ella, como figura primordial del Estado es una figura ausente; poco saben esos pobladores de lo que significa el Estado y los derechos que se tienen derivados de pertenecer a él y, sobre todo, pocas veces han acudido al Estado para resolver sus conflictos: ha habido una real ausencia del Estado, traducida en que nunca la institucionalidad había llegado a estos lugares.

A partir de 2012, por la influencia de diferentes actores públicos y privados, y también por el comienzo de las negociaciones entre el gobierno colombiano y el grupo armado FARC, se propició un fortalecimiento de la institucionalidad. Movido ese dinamismo, también, por las autoridades departamentales y la llegada de actores como el proyecto hidroeléctrico Ituango, se fortalecieron los mecanismos de justicia para lograr un entendimiento de ellos y que, a su vez, la ciudadanía les accediera.

Pero de la mano de la institucionalidad también llega el desbordamiento por la ausencia del Estado durante tantos años; ello es consecuencia de que el abandono estatal permitió el florecimiento de justicias paralelas, ejercidas por los agentes armados. Y con la llegada de las instituciones, la ciudadanía se vuelca a reclamar sus derechos y a generar una dinamización y nueva conflictividad que quizá desborde al Estado y florezcan nuevas dinámicas que puedan entorpecer todo lo que se logre derivado de los acuerdos de La Habana o que, por el contrario, determinen nuevas formas de abordar y gestionar el conflicto y transformarlo.

Abordar desde la teoría política los conflictos que afloran en sociedades vulnerables y vulneradas, que han estado en permanente zozobra por actores de diversa índole, es importante para la academia porque permite que ella, que a veces también es gran ausente en las comunidades, tenga cercanía con los fenómenos que se presentan al interior de ellas; y para las comunidades lo es porque puede significar un aporte para la gestión pacífica y tranquila de los conflictos en escenarios de disertación y debates que, quizá, coadyuven en la formulación de políticas públicas de convivencia y de ciudadanía y transformen el conflicto social.

La presente investigación se escribe en un momento importante de la vida nacional que impacta al municipio de Ituango, en el norte lejano de Antioquia. Primero, porque a un año de la firma del acuerdo para la terminación del conflicto, entre el Gobierno Nacional y las FARC, un grupo de desmovilizados ha reiniciado una confrontación armada con disidentes y bandas criminales que quieren aprovechar el vacío de poder dejado por la guerrilla. Segundo, a finales de 2018 comenzarán las operaciones del proyecto hidroeléctrico Ituango, que será la central de generación de energía más grande del país, con un total del 17% de la demanda energética nacional. Tercero, y no menos importante, en 2018 se elegirá un nuevo Presidente de la República, que tendrá entre sus responsabilidades llevar a buen puerto los acuerdos de La Habana.

Lo anterior conlleva una serie de nuevos escenarios de conflicto, no solo armados como desafortunadamente se están presentando, sino sociales que pueden dinamizar e impulsar el desarrollo del municipio y de la región; o, por el contrario, caer en un círculo vicioso y en una espiral de violencia como una de las manifestaciones naturales del conflicto.

Ahora bien, con respecto al escenario conflictual de esta investigación, Ituango es una zona importante del posconflicto porque allí estarán asentados en la vereda Santa Lucía, a dos horas de la cabecera municipal, los excombatientes desmovilizados del Frente 18, mientras se determina su participación política o su ingreso a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que determinará su ingreso formal a la sociedad, con todos los derechos ciudadanos. Pero a todo ello se suma la percepción de inseguridad y a la inseguridad misma reinante en el municipio, el vacío de poder, la pérdida de confianza en la justicia y las economías ilegales que con el negocio tanto de la droga como de las extorsiones generan nuevas dinámicas económicas y refuerzan la ausencia del Estado. Estas debilidades y precariedades aumentan las percepciones de que el conflicto social va a incrementar, sin que se vislumbren formas adecuadas y concertadas de resolverlo y gestionarlo como una oportunidad para cambiar e impulsar el desarrollo y las oportunidades.

El objetivo principal de esta investigación es determinar, desde la teoría de conflictos, las variaciones en las modalidades y los tipos de conflictividad social que se han presentado en Ituango, para responder a la pregunta de cómo la institucionalidad se puede ver desbordada por el conflicto social, o viceversa, y cómo éste puede ser transformado desde un escenario de violencia en oportunidades, que es en última instancia la esencia del conflicto social, analizado con los puntos de vista teóricos de Lewis Coser y Ralph Dahrendorf.

El cuerpo del texto está dividido en tres capítulos. En el primero, que se denomina *El conflicto que siempre ha estado: desde el conflicto armado hasta el conflicto social*, se hace una

caracterización de las tipologías de los conflictos sociales, sus causas y el entorno que los genera. Parte de un esbozo histórico del municipio, que siempre ha sido, además de signado por la violencia, estigmatizado por su lejanía de los centros de poder, su institucionalidad precaria y el abandono del Estado. Ituango siempre ha sido lejano, epicentro de violencias y escenario de disputas, pero rico en recursos naturales que pueden permitir una transformación del conflicto en oportunidades para su avance y progreso.

Es menester definir y conceptualizar el conflicto social, para llegar a concretizar qué fenómenos de conflictividad subyacen en la región objeto de esta investigación. Será entonces primordial en este capítulo abarcar junto con Lewis Coser y Ralph Dahrendorf, tales conceptos para elaborar un constructo que permita aportar a la gestión adecuada de los conflictos, porque es casi una constante que en todos los textos se encuentran definiciones y elaboraciones teóricas, pero no se esbozan mejores prácticas para gestionar y tramitar los conflictos, quizá eso se puede aprender de estas comunidades que vienen de la guerra para afrontar los verdaderos conflictos, los sociales, los que les deben permitir mejores condiciones de vida o por lo menos una convivencia pacífica y armónica desde sus diferencias.

De las diferencias y las diversidades, que son conflictos muy actuales, por así decirlo, se nutrirá este capítulo, basado en los autores ya mencionados y en textos de investigadores que han esclarecido al respecto como Germán Silva García, entre otros.

Finalmente, en este capítulo se abordarán dos asuntos fundamentales que se derivan de los textos estudiados y de lo que dice la teoría liberal del conflicto social: uno es corroborar que todo conflicto social forma parte de una realidad social más ampliada, es decir, un mundo en pequeño; bien se puede decir que en cada región hay una pequeña Colombia, porque en todas se replica el patrón de un Estado ausente, por lo tanto, entonces, el conflicto es como se ha dicho, una fuente

de cohesión social. Y lo segundo, será establecer las consecuencias del conflicto social, que por supuesto, conectarán con el siguiente capítulo en el que se verá la incidencia de la institucionalidad en él.

En el segundo capítulo: *Entre un Estado ausente y un Estado cohesionador*, se propone analizar la incidencia que tiene la institucionalidad, o la ausencia de ella, en la generación de conflictos y en la resolución de los mismos, en entornos de conflicto armado y de diferentes tipologías de violencia, partiendo desde una institucionalidad desbordada y ausente, como una notoria contradicción, y la participación ciudadana como fundamento de la ciudadanía y los conflictos sociales latentes.

Un Estado centralista, del que se dice que ha sido fallido y en el que sus dirigentes no conocen más allá de la capital del país, es muy fácil de definir como uno que no ha sido capaz de llevar la institucionalidad a todo el territorio. No en vano se ha desbordado el conflicto armado, un conflicto que no es solo por la tierra (la mala y casi inexistente distribución de ella), sino porque no ha llevado los servicios básicos y fundamentales para todos, la población ha carecido (carecido, es decir casi siempre no ha habido) educación, salud, conectividad, empleo, libertades, identidades.

En este capítulo, nodal en esta investigación, se hace un análisis, partiendo de los grupos sociales que establece Dahrendorf y que son la unidad básica de análisis de este trabajo, y que para efectos de lo planteado en esta tesis son la Institucionalidad, los Agentes armados ilegales y la Sociedad Civil, sobre los principales conflictos sociales identificados en Ituango: la Seguridad que no es una mera percepción, la Justicia, que brilla por su ausencia y las Oportunidades, que generan una brecha de exclusiones y desigualdades, esto a la luz de los investigadores Ariel Ávila y Jorge Eduardo Londoño. Se vislumbra también el conflicto ambiental, en una región rica en recursos

naturales, como parte del conflicto social y de la transformación misma del conflicto, lo que se abordará en el último capítulo.

Finalmente, los derechos fundamentales son los derechos humanos, y no hay mayor fundamento en tal teoría que la dignidad humana. Pero ahora cobra fuerza, igualmente dentro de la teoría de los derechos, unos no menos fundamentales, relacionados con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Un Estado moderno debe considerar la reconfiguración de conceptos como identidad, ambiente, desarrollo e innovación y ello se establece en los derechos que ahora se denominan Desca.

Por ello, en el tercer capítulo *La transformación del conflicto: un conflicto ambiental es un conflicto social*, se plantea el objetivo de analizar y argumentar, desde la teoría política y la teoría de derechos DESCA (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), que son los denominados de segunda generación, la transformación del conflicto como una oportunidad de trascender en oportunidades de progreso y desarrollo, que el conflicto social pase entonces de la resolución a la trascendencia, de acuerdo con Johan Galtung. En este capítulo se plantea una pregunta ¿Cómo se están gestionando o tramitando los conflictos sociales en entornos complejos de posconflicto armado y en diferentes escenarios económicos, sociales, culturales y ambientales? Con la ayuda de Galtung, se vislumbra en la transformación del conflicto una respuesta.

En consonancia con lo anterior, esta es una investigación que tiene pertinencia social, porque puede permitir a las comunidades y a los organismos del Estado presentes en la región, determinar las relaciones entre la institucionalidad y los conflictos sociales, para establecer políticas públicas que fortalezcan mecanismos como los de participación ciudadana y los de acceso a la justicia. Seguridad, justicia, oportunidades y participación como ejes transformadores de ciudadanía y propiciadores de convivencia.

Es importante también dar a conocer a la academia qué conflictos sociales se dan una región con tal entorno y tales situaciones económicas, sociales y culturales; es objeto de la investigación identificar y caracterizar los conflictos que surgen y resurgen de la institucionalidad. El significado histórico y los resultados de ello, derivarán las conclusiones de esta investigación: si se termina un conflicto surgen muchos más y ahí es donde debe estar la institucionalidad, con todo lo que ella significa, para tramitar y gestionar la transformación del conflicto social.

Muchos textos, tinta y papel a montones, se ha dedicado al tema de los conflictos, pero pocos se han dedicado a la región en mención a pesar de que es una zona que ha tenido todas las características de una pequeña Colombia: exclusión, desigualdad, riqueza en recursos naturales, estado ausente y todas las formas de violencia; un conflicto armado que con su ruido no ha permitido tramitar ni gestionar los conflictos sociales que sus ciudadanos quieren visibilizar y superar.

Algunos estudios han abordado el conflicto armado en Ituango, sus raíces en la región y los recorridos históricos por las zonas de conflicto que colonizaron; es propicio entonces darle continuidad a ese acercamiento al conflicto armado para estudiar los conflictos sociales que interesan a la región. Es una oportunidad para abordar el conflicto desde una dimensión netamente social, como la teoría liberal lo permite, ya no como solo una lucha de clases sino de fenómenos identitarios que afloran y que reclaman una institucionalidad activa.

Para abordar un tema complejo como este de la conflictividad social, se hace necesario partir de un enfoque sistémico que permita introyectar primero los conceptos aprendidos desde las ciencias como la sociología, para establecer los puntos de encuentro que permitan dilucidar a qué conllevan esos conceptos aplicados en la región foco de la investigación.

Posteriormente, mediante un método descriptivo, deductivo y analítico, en consonancia con los objetivos propuestos, se abordan uno a uno los objetivos mediante entrevistas en profundidad con algunos actores y entrevistas estructuradas con otros, para contrastar posiciones, complementadas con un completo rastreo de bases de datos y archivos de las instituciones municipales que permitan determinar la incidencia de la institucionalidad en la generación de conflictos o viceversa.

La información primaria, recolectada por medio de entrevistas con diferentes actores sociales e institucionales, permite diferenciar la manera como se ve el conflicto en Ituango. Por ejemplo, para los líderes comunitarios, campesinos, juveniles y religiosos, el conflicto es una manera de ir hacia adelante, de ver las situaciones difíciles como una oportunidad. Mientras que para los actores institucionales como la Alcaldía, la Personería y la Comisaría de Familia, el Estado es quien hace el esfuerzo por llegar a un territorio demasiado grande y extenso, con pocos recursos y herramientas. Por eso, para quienes el conflicto es una oportunidad, es el momento de que sea efectiva y de que el Estado llegue a cumplir sus funciones.

Este trabajo de investigación resalta ese encuentro dialógico con las posiciones institucionales y comunitarias, que son las que sienten y perciben el conflicto como encuentro de oportunidades, como fruto de un extenso trabajo de campo que implicó recorrer y leer la percepción de los actores, de la institucionalidad y de la sociedad civil, mediante entrevistas estructuradas y semiestructuradas con los líderes institucionales y comunitarios (ver anexos), además de espacios para el intercambio de ideas como conversatorios y diálogos informales, con el fin de reivindicar el encuentro de saberes que permiten contrastar la teoría con la realidad. Una cosa es que la teoría defina cómo y en qué escenarios se plantea el conflicto social, otra cómo las comunidades y las personas lo perciben y lo adaptan a su entorno. La comunidad de Ituango, más

que resiliente debido a que se ha adaptado a su cotidiano vivir, está ávida de plantear alternativas para su desarrollo; quiere replantear y gestionar el conflicto social puesto que ya no es necesariamente transversalizado por el conflicto armado.

Por ello, no son difíciles de conciliar las dos posiciones. Con políticas públicas consensuadas y con la participación de las comunidades, en un pleno ejercicio de ciudadanía, se podría construir sin olvidar la historia, para que el conflicto no permanezca como una herida abierta. Los ituanguinos quieren cerrar la herida del conflicto armado y seguir adelante. Ven el conflicto social como una oportunidad.

Capítulo 1

El conflicto que siempre ha estado: desde el conflicto armado hasta el conflicto social

El conflicto es natural al ser humano y subyace en todas las sociedades. No hay sociedad sin conflicto porque es el dinamizador de las sociedades, es el motor de ellas, tal como lo dicen teóricos de la conflictividad como Lewis Coser y Ralf Dahrendorf, de quienes se nutre esta investigación y que serán abordados a lo largo del texto.

Ahora bien, donde el conflicto armado ha estado presente no ha habido mucha posibilidad de que la ciudadanía, las fuerzas vivas y las organizaciones comunitarias, que son base esencial de la sociedad, puedan manifestar y gestionar los conflictos sociales para la convivencia y como una forma de acceder a los mecanismos de justicia y de bienestar.

Pero es importante diferenciar el conflicto que deriva en violencia, de los conflictos sociales mismos, que son procesos complejos de percepción y que deberán conducir a cambios o a nuevos dinamismos sociales (Coser, 1970). A lo largo del texto se verá que el conflicto no debe ser calificado ni mucho menos encasillado en bueno o malo, positivo o negativo. El conflicto es un proceso complejo en el cual los individuos o los grupos perciben que sus intereses y sus posiciones son diversas y ello deriva una diferencia que puede generar violencia de acuerdo con la manera como se tramite.

Por ello, en los conflictos juega un papel muy importante la identidad cultural, económica, social y política, porque determinan la complejidad de los conflictos sociales. La forma de gestionarlos y la debilidad o la fortaleza institucional para atenderlos serán determinantes en la manera como se puedan convertir en percepciones de cambio y bienestar, que es el fin primordial de las sociedades.

La violencia, la exclusión y la ausencia del Estado son algunas de las muchas formas como se expresa el conflicto social. Es natural que se evidencien diferencias y tensiones en todas las sociedades, pero en el caso de Colombia es notoria la incapacidad para solucionarlos de manera pacífica y concertada. Por ello, en la mayoría de las ocasiones las diferencias son resueltas por medio de la violencia, no solo por grupos en disputa, lo que es normal en los conflictos sociales, sino por la inacción o la incapacidad del Estado, que es a quien compete, puesto que llega tarde o nunca lo hace; de esta forma se perpetua la violencia y la desazón en lugar de oportunidades y desarrollo.

En este capítulo se pretende determinar, desde la teoría de conflictos, las variaciones en las modalidades y los tipos de conflictos sociales que se han presentado en el municipio de Ituango, así como caracterizar sus causas, los grupos sociales y el entorno que los genera.

En esta caracterización serán determinantes las teorías de Lewis Coser y de Ralf Dahrendorf, quienes han hecho aportes significativos a la teoría de los conflictos sociales. En el caso de Dahrendorf, con un modelo capaz de explicar la formación de grupos y su acción para lograr la integración mediante los cambios de estructura en la sociedad.

Para Lewis Coser (1970) el conflicto social es una lucha por los valores, el poder y los recursos en el cual los oponentes desean neutralizar o ganarles a sus rivales. Un conflicto será social cuando trascienda lo individual y las estructuras mismas de la sociedad. Asimismo, es necesario para la identidad, la cohesión y la delimitación de las sociedades, debido a que no vivirían sin conflicto o en permanente preparación hacia él, lo que debería desembocar más que en cambio, en una siempre nueva sociedad:

Mi intención es ir más allá de la gastada afirmación de que la vida social siempre implica cambio
(...) Trataré de distinguir entre ese movimiento lento y perpetuo de cambio que caracteriza el curso

de los tipos aún más estáticos de sociedad, y aquellos cambios profundos y sustanciales que señalan el colapso y la disolución de un viejo orden social, originando un nuevo sistema (Coser, 1970, p. 23).

Por su parte, Ralf Dahrendorf (1993) en su teoría de los conflictos sociales siempre habla de grupos que se oponen con intereses totalmente contrarios, el que defiende intereses establecidos, lo que ya acepta y le conviene, y el que no los acepta y quiere cambios de estructuras sociales. Para Dahrendorf “toda la vida social es conflicto porque es cambio” (Como se citó en Coser, 1970, p. 12). Y es en este contexto de “todo es cambio”, donde residen las diferencias entre Dahrendorf y Coser. Para Coser se centra exclusivamente en las funciones integrativas del conflicto social, mientras que para Dahrendorf se centra en lo que llama un “imperialismo panconflictivo” al considerar toda vida social como cambio sin prestar atención a su origen y a su resultado. Sin embargo, es importante acotar que para Dahrendorf el fundamento de todo orden social es la coerción antes que el consenso.

Para esta investigación es nodal el aporte de estos dos teóricos, porque se caracterizará el conflicto social que hoy pervive en el municipio de Ituango, históricamente signado por el conflicto armado y la lucha de poderes. Por eso, se analizará la incidencia de estos últimos elementos en la institucionalidad y se argumentará sobre la mejor manera para tramitar los nuevos conflictos que surjan y resurjan de una sociedad convulsa y esperanzada como la ituanguina, que tiene una historia trazada por el conflicto; no solo por el conflicto armado, sino por el conflicto que le ha permitido ser escenario de acontecimientos históricos para el país.

Es importante traer a colación la historia de Ituango desde sus orígenes fundacionales hasta el presente, ya que sin tal contexto no es posible entender por qué se han presentado tales conflictos en esa región, desde el armado hasta el social.

1.1. Una historia de conflicto

El Municipio de Ituango se encuentra ubicado en la región Norte del departamento de Antioquia, a 190 kilómetros de Medellín. Es un municipio distante y lejano, el viaje históricamente duraba entre 10 y 12 horas, pero desde 2013, que fue pavimentada la vía con recursos del proyecto Hidroeléctrico Ituango, el recorrido dura en promedio entre 5 a 6 horas, lo que ha significado un avance en su desarrollo económico y social.

Su territorio abarca 2347 km² y está asentado en medio de la cordillera Occidental y atravesado por el río Cauca. Limita con el departamento de Córdoba y el municipio de Tarazá por el norte, con quienes comparte el Parque Natural Nudo de Paramillo; con Valdivia, Briceño y Toledo por el nororiente; con Sabanalarga por el suroriente; y con Peque y Dabeiba por el sur.

Fue fundado en 1844 y erigido municipio en 1847. Su población aproximada es de 25088 habitantes, aunque estos datos como se dirá más adelante son difíciles de validar por la movilidad de su población, varias veces desplazada por la violencia, que están distribuidos en la zona urbana, tres corregimientos que son El Aro, La Granja y Santa Rita, y 132 veredas (Municipio de Ituango, 2012). Es un municipio verde, uno de los más montañosos de Antioquia y de grandes áreas de reserva natural. Tiene una gran actividad comercial y por la presencia de indígenas embera katíos y las características de su poblamiento, es común encontrar en él una rica diversidad cultural, florística y de fauna.

Ituango, como se colige, es un territorio grande, disperso, complejo y lejano, lleno de recursos naturales, cercano a la naturaleza y alejado de las grandes ciudades y del desarrollo. Su riqueza y lejanía le han dejado exclusión y olvido desde siempre. Cuando los colonizadores españoles llegaron a la región se adentraron en selvas agrestes y fueron recibidos con furia por

quienes ya habitaban el territorio. Desde el comienzo, los españoles entendieron que esa región no sería fácil y los nativos Tuango, descendientes de Nutabes y Caribes, se propusieron hacerlo difícil.

Gaspar de Rodas y Andrés de Valdivia, dos de los reconocidos grandes conquistadores españoles, fueron los colonizadores de la provincia. Enfrentaron la valentía de los indígenas Tuango para asentarse en el territorio y para que se cristianizaran, pero les tocó morir sin ver fundadas las colonias que querían en esa región. En los pocos textos y documentos de historia que se tienen sobre Ituango¹, se resalta que Gaspar de Rodas reconoció la valentía de los indígenas Tuango, que nunca le dejaron fundar la ciudad que quería en la que hoy es una hacienda que tuvo historia y reconocimiento en la región: la Hacienda San Juan de Rodas.

Valdivia, Gobernador de la Provincia de Antioquia y Gaspar de Rodas, recibieron la orden de fundar una ciudad para someter a las tribus indígenas que eran bastante belicosas y que no se consideraban sujetas a la corona. El propósito inicial de Rodas era fundar la ciudad de San Juan de Rodas, que diera memoria a su apellido, en un territorio cercano al que hoy es Ituango. En dos ocasiones lo intentó y en ambas los indígenas arrasaron con el poblado.

Por su parte, Andrés de Valdivia sí tuvo éxito en su fundación, pero al costo de la barbarie, el engaño y el maltrato a los nativos, quienes en represalia organizaron una emboscada y una masacre de los españoles en un sitio que hoy existe y se conoce como Matanzas, en un paraje cercano al municipio de Toledo, en límites con Ituango. En ese sitio murió el conquistador Andrés de Valdivia a manos del reconocido Cacique Guarcama. Posteriormente Gaspar de Rodas regresó y organizó la venganza asesinando al cacique, pero murió sin poder ver fundada la ciudad que

¹ Hay pocos textos con la historia del municipio. Para complementarla véase el Plan Municipal de Cultura 2016-2025, en las páginas 23 a la 29.

quería y reconociendo a los indígenas Tuango como los más valientes guerreros que hubo durante la conquista española (Cultura, 2016, p. 32).

La rebeldía y el conflicto marcaron la historia ituanguina. Y las contradicciones también, debido a que fue fundado en varias ocasiones y con diferentes nombres, perteneciente primero a Peque y luego a Sabanalarga. Finalmente, en 1847, Ituango fue constituido como distrito parroquial y erigido como municipio con el actual nombre, que proviene de vocablos indígenas cuyo significado en español es Río de Chicha, pero que es un homenaje a los indígenas Tuango:

Desde sus orígenes, en la época precolombina, el municipio de Ituango figura en las crónicas, como uno de los polos de desarrollo social y económico para la corona española. Desde el primer siglo de la colonización estas tierras se vieron abocadas a sufrir la más feroz violencia por imposición de los conquistadores españoles al punto de eliminar por el desplazamiento o por el asesinato a algo más del noventa por ciento de los asentamientos humanos que se localizaban en este lugar. Son los primeros registros del desplazamiento, de la expropiación y del desarraigo que se conocen en el continente americano y del cual se tiene referencia (Cultura, 2016, p. 23-33).

Mapa 1 Ubicación de Ituango en Antioquia



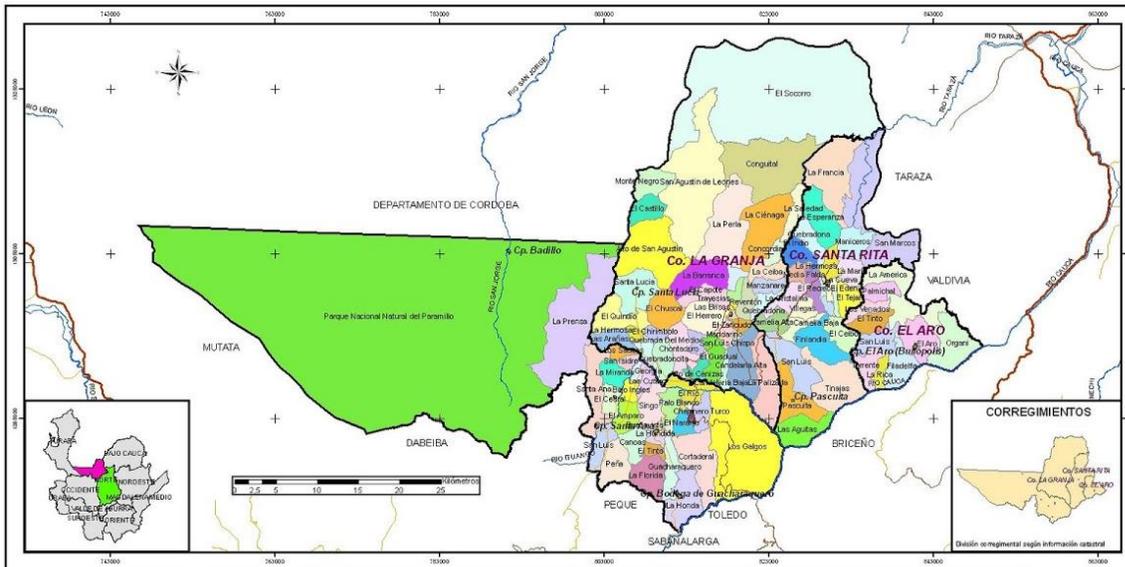
Fuente: (Aristizábal, 2018).

Ituango está ubicado en la región Norte de Antioquia como se puede ver en el mapa anterior. Es el norte lejano porque en su vasta extensión alberga gran parte del Parque Nacional Paramillo, que es una de las riquezas ambientales y biodiversas más importantes de Colombia en la que han centrado el interés diferentes grupos económicos, sociales y armados, para explotarlo y sacar sus recursos además de generar economías ilegales y paralelas, que incrementan el conflicto en la región. Limita, como ya se dijo, con el departamento de Córdoba y con varios municipios de las regiones norte y occidente de Antioquia, hasta tocar con Urabá, lo que lo convierte en un corredor estratégico y lleno de recursos naturales. A simple vista del mapa, la ubicación geográfica y la distribución, ya se vislumbran escenarios conflictuales en la localidad: la lejanía de la ciudad

y la distancia de la misma cabecera con sus numerosas veredas; hechos que son alicientes de un conflicto social en potencia.

Mapa 2

Ituango, cabecera municipal y distribución veredal



Fuente: (Gallo, 2008).

Se puede observar en el Mapa 2 la complejidad territorial del municipio, aunado a su lejanía de los centros de desarrollo regionales y a la lejanía de sus comunidades y veredas, se suma la extensión territorial y la falta de vías comunicantes entre sí, con lo cual se configura la ausencia de información y la falta de control sobre ella. En un territorio en el que el Estado ha sido el gran ausente, no es fácil controlar los datos de población, por las constantes migraciones y desplazamientos que generan los conflictos.

Según datos del *Plan de desarrollo municipal 2016-2019*², en el 2015 el municipio tenía 23 mil habitantes. Por el contrario, para el Dane³ la población en el 2005 ya era cercana a los 25 mil habitantes y su proyección natural iría en decrecimiento hasta los 19 mil habitantes para el 2020. Sin embargo y para la actual Administración Municipal⁴ la cifra de habitantes es de más de 25 mil y de 17.500 víctimas. Toda esta disparidad de cifras sería soslayable sino se estuviera hablando de un territorio que tiene el 80 % de su población en el registro de víctimas.

² Ver Plan de desarrollo Municipal: en [http://www.ituango-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019%20\(Reformulado\).pdf](http://www.ituango-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019%20(Reformulado).pdf)

³ Según las proyecciones del DANE, del censo de 2005, la población de Ituango tendría en 2017 un decrecimiento y estaría cercano a los 20 mil habitantes.

⁴ Entrevista realizada a Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango, el 21 de febrero de 2018. Anexo número 1.

Tabla 1
Datos de población de Ituango a 2017

Población	Número
Población total	23.959
Hombres	12.612
Mujeres	11.347
Hombres zona urbana	2.918
Mujeres zona urbana	3.147
Hombres zona rural	9.694
Mujeres zona rural	8.210
Población infantil	2.127
Niños y niñas zona urbana	413
Niños y niñas zona rural	1.714
Niños y niñas zona rural	1.714

Fuente: (Plan de desarrollo municipal Ituango, 2016-2019).

Como se puede ver en los mapas y en las tablas, es importante reiterarlo, Ituango es un municipio extenso y lejano, con pocas vías de comunicación con los grandes centros poblados y con mínimas conexiones entre sus veredas. La población recuerda de manera constante que apenas en 2013, gracias a aportes relacionados con la construcción del proyecto Hidroituango se logró la pavimentación completa de la carretera, que disminuyó el recorrido hacia Medellín en un promedio de cinco horas, lo que antes implicaba viajes de 10 y hasta 12 horas. Por el tamaño del municipio,

la conectividad entre los corregimientos y las veredas con el casco urbano requieren una infraestructura vial que se estima en más de 3.680 kilómetros cuadrados, según los cálculos de la Administración Municipal ⁵ (Municipio de Ituango, 2017, p. 47).

El historiador ituanguino Albeiro Montoya resume lo que ha sido un conflicto en este lugar: la ubicación y la lejanía de los grandes centros poblados, que lo han alejado del Estado y lo han acercado al escenario de la guerra:

Como era apenas natural, sólo existían los caminos, algunos ríos y las trochas para trasladarse de un lugar otro, la población se sentía demasiado alejada de las grandes urbes como Medellín, Bogotá o Cali, sin medios de información como la radio, la prensa, la televisión, el teléfono y más recientemente el celular; ello hizo que permanecieran durante muchas décadas sin que los conocieran, sin apoyo gubernamental, sin posibilidad de desarrollo, lo que dio origen a una sociedad sin mayores avances y expuestos a la incursión de actores armados ilegales que suplantaron la presencia del Estado con sus ideologías para crear inconformismo en los campesinos y se establecieron en algunas de las zonas montañosas con la firme intención de dominar el territorio, hacerlo un corredor estratégico entre el sur de Córdoba y Urabá, para el cultivo de drogas ilícitas y convertirlo en un escenario de guerra como efectivamente ha ocurrido por la presencia de paramilitares y guerrilla de las Farc y el ELN⁶ (Montoya, 2017, s.p.).

⁵ En el inventario de proyectos viales de mayor importancia se encuentran, según los datos del Plan de Desarrollo Municipal: la carretera El Aro — Valdivia, de 8 kilómetros de longitud; la carretera Ituango — Peque, de 15 kilómetros de longitud; El Cedral, con 20 kilómetros de longitud; Santa Lucía — Leones, con 80 kilómetros de longitud; La Granja — El Socorro, con 120 kilómetros de longitud; las partidas Las Mellizas — Jaidukamá (el único resguardo indígena en el que habita una comunidad Embera) con 140 kilómetros de longitud. Estos proyectos viales se requieren con urgencia para acercar las veredas con la cabecera municipal.

⁶ Documento *El conflicto social en Ituango*, entregado como un aporte personal del historiador local Albeiro Montoya para esta investigación, el 15 de diciembre de 2017.

La historia de Ituango ha estado signada por los conflictos, pero hoy atraviesa dos momentos históricos: el proceso de paz que tiene un capítulo importante en su territorio y el proyecto hidroeléctrico Ituango, la central energética más grande del país, que se construye en las riberas del río Cauca con inmediaciones del río Ituango.

Este contexto cambia el panorama conflictual en el municipio, por cuanto el primero significaría que los conflictos se deban redimensionar y el segundo que debería entrar una inyección de aportes a su desarrollo, con enormes beneficios para toda la población, pero que indudablemente, como agente de cambio, será un potenciador del conflicto social en los términos en que esta investigación lo plantea: el conflicto es cambio constante que dinamiza las sociedades.

Como se dirá más adelante en esta investigación, no es el conflicto armado que por décadas ejercieron los miembros del Frente 18 de las FARC como “señores de la guerra y como protoestados”, al decir de Duncan (2006) y Valencia (2013). En Ituango el conflicto armado se transformó en una confrontación por el territorio por parte de una variada mezcla de agentes armados ilegales que querían posicionar y sacar réditos de sus economías ilegales.

El EPL fue el primer grupo guerrillero que tuvo fuerte presencia en el territorio con grandes dominios veredales y buenas relaciones con las comunidades. Posteriormente, a finales del siglo anterior, el EPL firmó un *Acuerdo de paz* con el gobierno nacional que significó la desaparición de ese grupo armado. Pero como lo muestra la historia, varios de ellos se enrolaron en las filas de otras agrupaciones armadas, como las Autodefensas o grupos paramilitares y con narcotraficantes, lo que incrementó las iniciativas armadas de la Fuerza Pública y con ello se exacerbó el conflicto armado (Adarve, 2016, p. 20).

En una vereda de Ituango, en límites con Córdoba, se realizó parte del acuerdo que llevó a la desmovilización del EPL, según cuenta el Alcalde Municipal Hernán Darío Álvarez⁷. Y resalta que, por la extensión del municipio, incluso todos los grupos armados podían transitar sin tener choque ni confrontaciones militares.

Pero son las FARC el grupo que tuvo más incidencia en el conflicto armado en Ituango. Ya desde la década del 80, varios frentes guerrilleros transitaban por el territorio. Los frentes 5, 18, 34 y 36 tenían como retaguardia y base de operaciones a todo el territorio del Nudo de Paramillo y a varias regiones de Córdoba y el Nordeste de Antioquia.

El Frente 18 se quedó en Ituango como “señores de la guerra”, entendidos estos como una organización militar y política que conquista a la fuerza un territorio y se legitima políticamente con el uso de la violencia (Sepúlveda, 2013, p. 9). La cabecera municipal fue atacada siete veces en las tomas guerrilleras y hasta 1996, el Frente 18 de las FARC tuvo el control del territorio⁸.

Durante varios años, las FARC realizaron acciones armadas en Ituango con sistematicidad a la fuerza pública, tomas guerrilleras y dominio en amplias zonas veredales. Desde 1985 se registran masacres que dan cuenta del recrudecimiento del conflicto armado (Adarve, 2016, p. 21), con serias repercusiones para la población civil.

Este incremento de acciones armadas y asedio de la guerrilla de las FARC en Ituango, durante los últimos años del siglo anterior y comienzos de este, se dan según Adarve (2016), porque la insurgencia decidió pasar, luego de la VII Conferencia, a una guerra ofensiva como

⁷ Entrevista realizada a Hernán Darío Alvarez, alcalde municipal de Ituango, el 21 de febrero de 2018. Anexo número 1.

⁸ Para más información consultar: Verdad Abierta. Ituango 30 años en guerra. *Verdad Abierta*. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/4517-ituango-treinta-anos-de-guerra/>

estrategia para expandir su influencia y su teatro de operaciones. Luego de los fracasos en los sucesivos diálogos de paz de Caracas (Venezuela) y Tlaxcala (México), cambiaron a una confrontación directa con ataques y toma de poblaciones que provocaban miedo en las comunidades: “Como consecuencia de esto, se generó mayor capacidad destructiva que a la par de constantes acciones bélicas, incrementaron la letalidad y violencia en los años noventa en el municipio” (Adarve, 2016, p. 23).

El conflicto armado no será abordado en extenso en esta investigación, ya que ha sido abordado por múltiples investigaciones y tesis, como las de Cristian Adarve (2016) y Catalina Valencia (2013).

1.2. El conflicto armado: una historia con herida abierta

Desde las décadas de 1970 y 1980, hasta los días de hoy, Ituango ha sido base y escenario de diferentes grupos armados. Primero con el EPL (Ejército Popular de Liberación), una guerrilla de corte marxista leninista, mucho antes que las FARC con el frente 18 (Adarve, 2016, p. 19). Luego están los grupos paramilitares (AUC: Autodefensas Unidas de Colombia) y hasta las denominadas bandas criminales, Bacrim⁹, que aún hoy operan en el territorio. Con base en lo anterior, se puede afirmar que el conflicto armado aún pervive en la región.

⁹ Las bandas emergentes en Colombia o bandas criminales emergentes (BACRIM) fue el nombre dado por el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe, al fenómeno o reestructuración del crimen organizado que se dio en Colombia y en el marco de su Política de Seguridad Democrática.

Posteriormente, entre 2002 y 2010, las FARC fueron perdiendo la capacidad militar de combate en masa y se centraron en una estrategia que les permitiera conservar dominio sobre la población y atacar esporádicamente a las fuerzas armadas para demostrar autoridad en la zona.

En sus períodos de máxima violencia y de dominio de la zona, el grupo guerrillero se convirtió en una autoridad de facto, determinaba la expropiación de bienes, la conducta de la comunidad y ajusticiaba. Creó la percepción de que encarnaban la justicia y la seguridad, según lo expresa el alcalde municipal Hernán Darío Alvarez:

Un comandante guerrillero decía: si no se acogen a nuestros reglamentos, hay tres buses que salen: a las 10 am, a las 12 del día y a las 7 de la noche. Eso sucedió en los años 90 y comenzando el 2000. En cierto modo, esto se dió porque lo que el estado no alcanzaba a controlar, terminó controlándolo el Frente 18, ellos terminaron controlando la relación entre las comunidades¹⁰.

Desde la década del 90 comenzó el auge de la siembra de coca en todo el país, Ituango no fue la excepción. Este hecho trajo un nuevo conflicto al municipio, que sumado a la ya reconocida estigmatización por la presencia de grupos guerrilleros, se incrementó con los cocaleros. A su vez, esto llamó a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), el temible grupo paramilitar que perpetró masacres, desplazamientos, creó terror en la población y fue uno de los causante del principal conflicto social asociado a la justicia: las víctimas. Ituango es un municipio de víctimas, según lo acepta el mismo alcalde.

¹⁰ Entrevista realizada a Hernán Darío Alvarez, alcalde municipal de Ituango, el 21 de febrero de 2018. Anexo número 1.

A finales del siglo anterior, con la llegada de los paramilitares se incrementó el conflicto armado en Ituango y comenzó un nuevo capítulo en la vida municipal, el más cruento y violento de toda su historia. La guerrilla se replegó, pero regresó para recuperar su poder¹¹. En ese capítulo de la guerra murieron, desaparecieron y sufrieron tantos ituanguinos, que ni siquiera las instituciones oficiales tienen cifras concretas que den cuenta real del número de víctimas.

Los grupos armados guerrilleros como el EPL y las FARC, los paramilitares como las AUC y las bandas criminales (Bacrim), han escrito un extenso capítulo de sangre y violencia del conflicto armado en el municipio de Ituango. Todo ello ha quedado extensamente documentado por investigadores e instituciones que dan cuenta de la historia que jamás debe olvidarse para no repetirse. Entre ellos se destacan: la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que produce documentos permanentes y tiene observatorios sobre conflictividad en todo el país, y el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014). Pero, aun así, poco se ha abordado el conflicto social.

El abandono del Estado es una de las principales razones de que la población haya quedado inerme ante la magnitud de la sevicia y la crueldad de las acciones desplegadas por los actores armados durante ese momento del conflicto armado. Pero aún hoy, poco se ha hecho para que no vuelva a suceder.

Desde 2012 inició el proceso de paz con la guerrilla de las FARC. Durante un tiempo disminuyeron las acciones violentas, pero en palabras de la comunidad, lo que se sintió fue una “tensa calma”, un receso que no se apagó del todo y que resurgió en los últimos meses, a finales de 2017 y comienzos de 2018:

11 Para más información consultar: Verdad Abierta. Ituango 30 años en guerra. *Verdad Abierta*. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/4517-ituango-treinta-anos-de-guerra/>

(...) estábamos como en un proceso de receso de la violencia, pero sabíamos los habitantes de Ituango que eso no era para siempre y que los grupos armados violentos nunca se fueron del municipio, empezando porque sabemos y somos conscientes de que la mayoría de los que pertenecían a las FARC en nuestro municipio no se desmovilizaron, entonces para mí no ha habido evoluciones, son cambios ya además de que tenemos disidentes de las FARC, tenemos otros grupos armados, tenemos bandas criminales¹².

Desde 2017 los integrantes del Frente 18 de las FARC están asentados en la vereda Santa Lucía, rodeados de la presencia estatal y los organismos internacionales garantes del proceso, pero también de varios grupos armados que amenazan no solo al grupo desmovilizado, sino a la comunidad (Matta, 2018) y hacen parecer que el proceso de paz está en un punto de enorme fragilidad.

Lo que se temía volvió. A comienzos de 2018, inició un rebrote de violencia por la acomodación territorial de los nuevos agentes armados que están retomando el poder en las zonas donde ya no operan las FARC (ahora convertido en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) y donde el Estado no ha logrado hacer presencia con la institucionalidad.

A finales de enero de 2018, un atentado en la cabecera municipal revivió los peores días del terror: una granada que iba dirigida contra un miliciano de una banda criminal mató a una niña de tres años. La población conmovida e indignada, pero atemorizada, marchó por las calles de la

¹² Entrevista realizada a Hilda Oquendo, Líder de la Red de Mujeres Unidas de Norte de Antioquia, realizada el 23 de enero de 2018. Anexo número 2.

localidad para exigir el cese de las acciones violentas contra la población civil y más aún contra los niños (Aguirre, 2018).

El conflicto armado en Ituango es una herida abierta que aún no cierra y que por el contrario amenaza con abrir y crear nuevos entornos violentos. Pero la comunidad se resiste a perder una oportunidad de ver los conflictos de otra manera, tienen la esperanza de que la ola de violencia que se está viviendo sea un coletazo pasajero, que les permita ver nuevos conflictos, los que crean cambios y oportunidades.

1.3. El conflicto social: de lo que estamos hechos

Es natural que una sociedad que ha convivido con la violencia le tenga miedo al conflicto, se le reconoce como un elemento perturbador, que no se puede negar porque la evidencia abunda. Así pues, el conflicto armado ha golpeado tanto a Ituango que es apenas natural que esa comunidad no quiera hablar del conflicto social que puede ser motor de cambio y desarrollo. Este es un municipio que arrastra un sino trágico de violencia y estigmatización.

Para el municipio se está viviendo un momento histórico con el proceso de paz y con la construcción del proyecto Hidroeléctrico Ituango, ambos en su territorio. Esa región tiene una gran esperanza de hacer visibles los conflictos sociales como oportunidades de cambio, para pasar la página del violento conflicto armado.

Es necesario partir del entendimiento de que el conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, que al decir de Silva García (2008), se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Es decir, ninguna sociedad puede eliminar o vivir sin conflicto, por lo tanto los conflictos no son un problema en sí, sino su manejo.

Cuando se hace referencia al conflicto, se remite a la polémica, a las dificultades, a las personas, a las situaciones incómodas, a las disputas, a las confrontaciones por el poder o por desacuerdos económicos, sociales y hasta ambientales y culturales. Al parafrasear a Lewis Coser (1970), el conflicto es una lucha por los valores y por el estatus, por el poder y por los recursos escasos, en el curso del cual, los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Para Dahrendorf (1993), en cambio, el conflicto es un hecho social universal y necesario que se resuelve en el cambio social. Es entonces el conflicto un dinamizador del cambio social. Al decir de Silva García (2008):

El progreso social, con frecuencia aparejado a la idea de cambio, es no pocas veces un efecto de las luchas sociales. Por ejemplo, el radar, el sonar, los aviones a reacción, el helicóptero, la energía nuclear, Internet, etc., son avances tecnológicos que han transformado la vida de las personas y han emergido de graves choques bélicos, de la amenaza de ellos o de los preparativos para enfrentarlos (p. 29).

Las disputas y las contiendas, así como el debate y el disenso, no son algo anómalo, son expresiones naturales de la vida en sociedad. Una vida requiere del conflicto, porque de lo contrario sería uniforme, monótona y gris, además de un hecho imposible porque nunca será viable que todas las personas piensen, se comporten y perciban igual las situaciones cotidianas de la vida. Silva García (2008) explica que “el conflicto es la sal de la vida” (p 30).

A esto se refieren Dahrendorf (1993) y Coser (1970) (Como se citó en Silva García, 2008), cuando hablan de antagonismo social, sin el cual habría pocas o ninguna transformación. Es decir, que el conflicto requiere de adversarios, bien sean los actores sociales o los grupos sociales. Sin embargo, aquí es importante aclarar un poco más los conceptos de antagonistas sociales y de

adversario. En este punto entra a terciar Chantal Mouffe (2012), para quien el conflicto, así visto, más que antagonismo, sería un agonismo:

Introducir la categoría del «adversario» requiere hacer más compleja la noción de antagonismo y distinguir dos formas diferentes en las que puede surgir ese antagonismo, el antagonismo propiamente dicho y el agonismo. El antagonismo es una lucha entre enemigos, mientras que el agonismo es una lucha entre adversarios. Por consiguiente, podemos volver a formular nuestro problema diciendo que, visto desde la perspectiva del «pluralismo agonístico», el objetivo (por ejemplo de la política democrática) es transformar el antagonismo en agonismo. Esto requiere proporcionar canales a través de los cuales pueda darse cauce a la expresión de las pasiones colectivas en asuntos que, pese a permitir una posibilidad de identificación suficiente, no construyan al oponente como enemigo sino como adversario (p. 115-116).

Más adelante, en el segundo capítulo se retomará la posición de Mouffe en relación con ese agonismo, que conduciría a un consenso sobre la forma de abordar los conflictos sociales que se identifican en el municipio de Ituango.

Hasta acá, entonces, se deduce que los conflictos bien pueden ser por necesidades básicas sin satisfacer, por competencia por los recursos limitados o por conflictos de valores principalmente, que requieren de un antagonista social o de un agonismo; definido como una lucha entre adversarios.

Pero ¿Qué es el conflicto social? y ¿Cómo se identifica en el municipio de Ituango? Para comenzar a dilucidar esta pregunta, es importante seguir con Dahrendorf y Coser, teóricos del conflicto social.

Para Ralf Dahrendorf (1966) “toda vida social es conflicto porque es cambio” (p. 62). Pero para Coser (1970) decir que todo es cambio es conflictivo, porque el movimiento es un concepto relacional que presupone algo inmóvil, en relación con lo cual algo se está moviendo. Y discute más con Dahrendorf, le refuta su teoría de que el fundamento de todo orden social reside en la coerción antes que en el consenso. Para Coser (1970), en cambio, el conflicto es funcionalista porque tiende a mantener el sistema: “cualquier situación de conflicto que no ataca el núcleo valorativo fundamental de un sistema social y en consecuencia solo ataca la periferia, puede llegar a ser funcional, y mantener el sistema” (p. 30). Dahrendorf (1993) es un teórico liberal, porque para él, el conflicto social moderno es una manifestación de la libertad (p. 13).

Es importante, para contextualizar el conflicto, reseñar las dos principales teorías sociológicas conflictualistas: la marxista y la liberal, que son corrientes de sociología política porque se basan en el poder, pero sus diferencias se centran en la forma como lo enfocan y las contradicciones sociales que plantea (Silva García, 2008).

Para la corriente marxista el conflicto es una lucha de clases sociales desde donde se transforma la sociedad; el liberalismo, en cambio, no considera que sea solo una lucha de clases sociales, por cuanto los conflictos también se dan dentro de una misma clase social, sino que lo amplía a grupos sociales (Dahrendorf, 1962). Tal como lo expresa Silva García (2008):

La idea de una disputa sugiere siempre que hay dos partes contrarias que se enfrentan por algo, y la categoría de clase o de grupo sirve para entender quienes son los actores de la confrontación. Empero, la noción de grupo, que tiene una escala más micro y por ello más comprensiva, no significa que en las sociedades no haya clases sociales o, inclusive, conflictos entre ellas. Simplemente es una herramienta más apropiada. Un corolario del debate anterior apuntaría a que el conflicto se manifiesta como una lucha de grupos sociales y no, al menos en términos generales,

entre clases sociales. Los conflictos culturales, de índole religiosa, entre católicos y protestantes o aquellos que enfrentan a cristianos y musulmanes nada o poco tienen que ver con clases sociales, al igual que los conflictos de género (p. 32).

Según Germán Silva García (2008), para Dahrendorf toda sociedad está sujeta a cambios y tiene dos caras: conflicto y consenso; no se puede existir sin alguna de las dos ya que dependen mutuamente. Ahora bien, si dentro de alguna estructura social existe un exceso de demandas sobre las oportunidades, surgen la tensión y el conflicto. Habla de una sociedad basada en posiciones de poder y autoridad, de unos grupos sobre otros, y esa autoridad es el factor determinante de los conflictos sociales.

Los grupos en conflicto se involucran en acciones que provocan cambios en la estructura social. Cuando el conflicto es agudo, los cambios que se producen son radicales. Por esto Dahrendorf se apartó de la teoría marxista, porque no concebía que el conflicto es una mera lucha de clases sociales sino de grupos, y se enfocó como un teórico liberal del conflictualismo social, con indudables aportes a la teoría sociológica del conflicto.

Con este enfoque liberal conflictualista que se basa en una confrontación de grupos sociales, es importante definir e indagar sobre sus intereses, sus valores, sus creencias, las necesidades básicas sin satisfacer. Así mismo establecer cuáles son los grupos que se encuentran enfrentados, cuánto poder tienen y cómo pueden incidir en la dinámica del conflicto social.

Con recolección de información primaria, por medio de entrevistas, correos y conversaciones con diferentes actores de la vida social del municipio de Ituango, y tal como se ha dicho, con ese diálogo que permite contrastar la teoría con la realidad, ésta investigación puede determinar que en ese municipio hay tres grupos en confrontación que atizan el conflicto social:

la **Institucionalidad** representada en el Estado, los **Agentes armados ilegales**¹³ y la **Sociedad civil** escenificada en numerosas organizaciones comunitarias que entienden el conflicto social como oportunidades para avanzar y obtener bienestar. Superar los asuntos conflictuales permite obtener seguridad, justicia, inclusión y oportunidades.

En Ituango está latente el conflicto armado. A pesar de la desmovilización del Frente 18 de las FARC, o por lo menos de un número de sus integrantes por el *Acuerdo de paz* de La Habana, otro grupo de disidentes están enfrascados en una disputa territorial con bandas de narcotraficantes y delincuenciales que mantienen viva la llama de la violencia en el municipio¹⁴.

Pero el conflicto social es otro, el que mantiene viva la esperanza a pesar de que surja de las disputas y las confrontaciones entre grupos sociales por competencias, recursos o valores.

En Ituango hay confrontaciones de competencias y de territorios. El negocio del narcotráfico, por ejemplo, genera una cadena que deja expuesta a la población campesina y a la comunidad en general a una lucha cruenta por intereses económicos, que ponen en manifiesta debilidad a la sociedad civil por parte de agentes armados que quieren imponer sus economías ilegales, entre otras razones por la ausencia y la displicencia del Estado. En palabras de Catalina Valencia (2012):

13 El profesor Boris Salazar (2005) en el texto: *Las Metáforas de una guerra perpetua*, usa el término agentes armados, en un texto de estudios sobre Pragmática del discurso en el conflicto armado colombiano, que se trae a colación en este texto para darle significado a la palabra agentes, como actores que han perpetuado el conflicto con sus acciones y su discurso, porque como dice Salazar: “los agentes armados de la guerra colombiana no comparten ni valores ni métodos. Ninguno aceptaría haber perdido la guerra ni haber sido derrotado en un debate público, ni haber sido convencido por el otro o por las circunstancias, de la inutilidad de su lucha militar” (p. 159).

14 “La seguridad en el municipio, es un tema complejo porque a pesar de que las Farc hicieron una dejación de armas, desde hace 20 días se creó un nuevo grupo que se llama Renacer Guerrillero, ellos manifiestan que los incumplimientos del gobierno nacional los llevan otra vez a la toma de las armas. Hay gente que quedó inconforme con el proceso de paz y hoy vuelve a un nuevo conflicto armado” (Entrevista realizada a Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango, el 21 de febrero de 2018). Anexo número 1.

La configuración del territorio de Ituango presenta condiciones óptimas para el establecimiento de áreas de cultivos de coca por sus ecosistemas (trópico bajo y pre montaña) y su establecimiento en zonas boscosas de difícil acceso. Esto ha hecho que se constituya en el primer eslabón del negocio del tráfico de drogas y que se fortalezca una economía de guerra en la que las estructuras armadas ilegales han ejercido el control del territorio y, por ende, del negocio (p. 6).

Ante este resurgir del conflicto armado, la institucionalidad sigue estando ausente, incompleta o ineficaz para atender las demandas de seguridad, de justicia, de inclusión y de oportunidades, que permitan el estado de bienestar que los grupos de la sociedad civil propenden.

Son dicientes las diferencias entre estos grupos sociales, frente a lo que consideran como conflicto social. Para la institucionalidad, representada en organizaciones estatales como la Alcaldía Municipal, la Personería y la Comisaría de Familia, el conflicto social lo remiten a incidentes entre personas y familias, que aunque está claro que son conflictos, en realidad son de índole personal, ya que los enfrentamientos entre las personas surgen naturalmente por la convivencia. Como se desprende de Dahrendorf, no es el gran sustento del conflicto social.

Para algunos líderes comunitarios, en cambio, el conflicto social son las oportunidades que puedan surgir luego de pasar una página de violencia; se puede explicar como una manifestación de la esperanza y una percepción de que, si se superan las diferencias, se establecen oportunidades y el Estado cumple su papel, el conflicto social será esa “sal de la vida” de la que habla Silva García (2008). En palabras de una mujer líder del municipio:

Yo pienso que actualmente a Ituango le suceden varios conflictos sociales que están acabando con nuestra sociedad, entre ellos es la guerra de poderes y el deseo de tenencia del hombre que a

diferencia de sentirse dueño de lo que puede hacer por sus propios medios desea entonces también acaparar todo el poder y es ahí donde viene la desigualdad, la inequidad y por ende un sin sabor social de todas las personas¹⁵.

Los grupos sociales del conflicto en Ituango, identificados desde la perspectiva de esta investigación, derivados como se dijo de las entrevistas, las conversaciones, las percepciones y el sustento teórico del conflictualismo social son: la institucionalidad, los agentes armados ilegales y la sociedad civil. Si bien aparentemente no muestran cohesión en sus actuaciones, condición importante para ser agentes del conflicto social, si actúan en consonancia cada uno de estos grupos, es decir, sus objetivos son comunes y representan orillas definidas, por tal razón son grupos del conflicto social:

La **Institucionalidad**, que es el Estado mismo, se representa en la Administración Municipal; los órganos de justicia como los jueces municipales¹⁶ y los Fiscales; las entidades de apoyo al ciudadano como la Personería y la Comisaría de Familia; y las fuerzas del orden, Policía y Ejército, que en Ituango desde hace muchos años por las acciones del conflicto armado siempre ha habido en buen número.

En total son cinco instituciones para atender un territorio amplio y complejo. La Personería y la Comisaria de Familia, en la mayoría de los casos solo abarca la cabecera municipal, porque

¹⁵ Entrevista realizada a Mujer con discapacidad física en Ituango, quien solicitó reserva de su nombre, el 23 de enero de 2018. Anexo número 3.

¹⁶ “Tenemos tres jueces: Promiscuo municipal, de Familia, un fiscal local y un fiscal seccional- hablando con el fiscal seccional me dice: alcalde tengo 800 procesos en mis manos y una sola persona y un secretario para atenderlos. Es insuficiente el aparato de justicia, para las demandas de la sociedad, no damos abasto” (Entrevista realizada a Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango, el 21 de febrero de 2018). Anexo número 1.

son dos funcionarios para atender las 132 veredas y los tres corregimientos. Los jueces y fiscales tienen en promedio 800 casos por atender, dada la cantidad de demandas por víctimas y asuntos personales. La única fuerza que llega a casi todo el municipio es la armada legítima del Estado, pero como bien lo dice un ciudadano:

En efecto sí se han incrementado, el estado puede que esté apareciendo metiendo fuerza pública porque si he visto el incremento en policía, de pronto el ejército si está ahí, pero yo creo que eso es negligente, que eso son medidas que no hacen o que verdaderamente no llegan al punto de control para que no se vaya a dañar ese proceso que se lleva o esa tranquilidad que estaba viviendo en el Municipio, entonces considero que la verdad el Estado el papel que está asumiendo no es el ideal, la fuerza pública o la Policía, el Ejército simplemente es un control de quien entra, quien sale, cojo este malo, pero ellos van a seguir haciendo ochas y panochas como se dice en el monte e intimidando a los campesinos, entonces seguimos en las mismas¹⁷.

La institucionalidad es el principal grupo social del conflicto en Ituango y es también el dinamizador del conflicto social por su acción ineficaz, inoportuna, ausente y precaria¹⁸. A esa precariedad del Estado atribuye Adarve (2016) su tesis central:

¹⁷ Entrevista realizada a un ciudadano de Ituango, quien solicitó reserva de su nombre, el 22 de enero de 2018. Anexo 4.

¹⁸ La precariedad del Estado colombiano, según Daniel Pécaut (2001) está relacionada con la falta de autoridad estatal en vastas regiones del territorio nacional. No es solo ausente, es que no puede llegar ni consolidar su influencia sobre la sociedad.

Es la razón fundamental por la que el conflicto armado se acentuó y prolongó en Ituango. Dicha condición generó consecuencias como el dominio de la guerrilla de las FARC, la intensa confrontación entre éstas y los paramilitares, una multitud de violaciones a los Derechos Humanos y al DIH, graves delitos de lesa humanidad y la acentuación de la economía cocalera (p. 90).

Los **Agentes armados ilegales** están incrementando sus acciones en Ituango. Luego del proceso de paz de La Habana que implicó la desmovilización de una parte del Frente 18 de las FARC, un grupo de disidentes con bandas criminales y hasta extranjeros¹⁹, están recrudeciendo el conflicto armado para establecer el dominio territorial sobre el negocio de la coca y de la minería. Las FARC, o lo que queda de la disidencia denominada Renacer Guerrillero, las Bandas denominadas Clan del Golfo y los narcotraficantes colombianos y extranjeros, están presionando el negocio de las economías ilegales del cultivo de la coca y la minería ilegal. Esto incrementa la inseguridad y la percepción de que tanto la justicia como las oportunidades no llegarán puesto que se estaría configurando un enorme conflicto social.

La **Sociedad civil** es, al decir de María Teresa Uribe de Hincapié (1999), ese cuerpo de organizaciones sociales y comunitarias sobre las cuales se escenifican en Colombia las guerras por las territorialidades. En Ituango la sociedad civil es un cuerpo vivo que ha soportado los embates de los agentes armados y de la institucionalidad ausente.

Si bien el concepto de sociedad civil ha sido criticado por varios autores, porque como decía Dahl (1992) al referirse al concepto de democracia “un término que pueda significar cualquier cosa no significa ninguna” (p. 10). El concepto aplica porque en Ituango hay disposición

¹⁹ En testimonio, un campesino dice que es creciente el rumor de que en la zona se encuentran mexicanos, que pueden pertenecer a alguno de los carteles de ese país, tratando de expandir el negocio. Conversación del 23 de enero de 2018.

y voluntad para la resolución conjunta de problemas, en consonancia con el Estado. Y también porque como dice García Mazá (2008), una teoría crítica no puede renunciar a dar razón de un concepto que cuenta con un uso generalizado en la praxis social y política. En palabras de García Marzá (2008):

Ya sea al hablar de un conjunto complejo y dinámico de instituciones no gubernamentales (Keane, 1992: 33); de un espacio de asociaciones humanas sin coerción (Walzer, 1992: 294); de una esfera de la acción social regida por la acción comunicativa (Habermas, 1998: 407; Cohen y Arato, 2000: 476); del dominio del diálogo civil y el compromiso público (Barber, 2000: 52), siempre nos encontramos con ambas características y un referente único: su posición «frente» al Estado. La sociedad civil necesita al Estado para poder funcionar, pero es independiente en sus iniciativas, propuestas y capacidad organizativa (p. 31).

De este cuerpo de organizaciones comunitarias²⁰ que conforman ese grupo de la sociedad civil, en Ituango hay muchas, desde organizaciones culturales, religiosas y deportivas, hasta organizaciones de víctimas, de discapacitados y de mujeres ideales que trabajan por incrementar el conflicto social por encima del conflicto violento que estigmatiza a esa población, algunas de las cuales se destacan en la Tabla 2. Tal como lo explica Adarve (2016), es esa sociedad civil la que menos herramientas ha tenido para organizarse e incidir en el conflicto social, porque no tiene

²⁰ En Ituango existen 127 Juntas de Acción Comunal, 30 Juntas de Acueductos, 15 asociaciones gremiales, 4 comités de veeduría ciudadana y otros grupos organizados como bomberos, grupos juveniles y clubes deportivos. Se destacan entre las asociaciones a las mujeres, los campesinos y los sectores productivos. (Municipio de Ituango, 2017, p. 148).

como aliada a la institucionalidad, casi siempre ausente y débil, sino que enfrenta los embates del conflicto y de la estigmatización:

Esta dinámica estructural está dada por el gran impacto que el conflicto armado ha tenido en el territorio, pues los actores que allí se enfrentan no sólo buscan el control territorial por las potencialidades geoestratégicas de la zona, sino que, frente a una institucionalidad y una sociedad civil debilitadas, la maquinaria de los actores armados ha copado los escenarios sociales e institucionales y ha generado miles de víctimas, en el marco de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH, situación que supera la capacidad institucional para responder efectivamente a las demandas de servicios de la población afectada (Adarve, 2016, p. 146).

Tabla 2
Organizaciones e instituciones en el municipio de Ituango

Sigla	Organización e institución
AMII	Mujeres Ideales
ASOGADI	Ganaderos de Ituango
ASOPPRAI	Pequeños Productores Agrícolas
ASDEPPASI	Desplazados del Parque Paramillo Sector Ituango
ASOPADI	Paneleros
ITESIDIA	Discapacitados
ASOCAI	Cacaocultores de Ituango
ASOCOMUNAL	Juntas de Acción Comunal
ASDEDI	Asociación de Desplazados de Ituango

ASOPROLI	Porcicultores y Productores de Leche
ASPROASIR	Productores Agropecuarios de Santa Rita de Ituango
ASCOMI	Comerciantes de Ituango
ASCIT	Asociación de Campesinos de Ituango
API	Asociación de Productores de Ituango
ASPOFRUTOI	Asociación de Productores Frutícolas y Agrícolas de Ituango

Fuente: (Plan Municipal de Cultura de Ituango 2016-2025, p. 35).

Según las personas entrevistadas, tanto de la institucionalidad como de la Sociedad civil, los conflictos en Ituango los perciben como desencuentros, altercados, irrespetos a la autoridad y enormes problemas asociados a la familia y a las poblaciones vulnerables como los jóvenes, los campesinos y las víctimas.

Es recurrente que hablen de los problemas de drogadicción y la falta de oportunidades para los jóvenes, asociado al negocio que las economías ilegales practican en la región, a las riñas ciudadanas y a la violencia doméstica; se resalta un incremento de la violencia intrafamiliar como violaciones e incestos. Según dicen los líderes religiosos y algunos ciudadanos, práctica que ahora se evidencia porque se perdió la “autoridad de facto” que ejercía el Frente 18 de las FARC en la región o porque se extraviaron los valores morales.

Pero estas son manifestaciones latentes del conflicto, los verdaderos conflictos sociales son esos que surgen del proceso problemático en el que los diversos grupos del Estado y de las sociedades advierten incompatibilidades entre sus intereses, sus beneficios y sus necesidades. Luis Jorge Garay (2002) habla de repensar a Colombia desde una perspectiva que trascienda lo grupal

para enfocarse en lo colectivo, que es el fin último. Esto con el fin de construir una sociedad diferente con un nuevo contrato social, al asumir los conflictos sociales como oportunidades para ese cambio y desactivar los conflictos violentos.

En consonancia con los conversatorios, los diálogos y las entrevistas establecidas con las instituciones y las comunidades; así como con los líderes campesinos, juveniles, sociales y comunitarios que hacen parte de la sociedad civil, para esta investigación los conflictos sociales están enfocados principalmente en: seguridad, que a raíz de los sucesos violentos deriva en una creciente percepción de inseguridad, baja credibilidad y confianza en la justicia, pocas oportunidades e inclusión y en un latente conflicto ambiental que se avizora por el uso arbitrario e indiscriminado de los recursos naturales en los que la zona es rica.

1.3.1. Seguridad

Según Luis Jorge Garay (2002) la seguridad involucra una integralidad que implica seguridad ciudadana, de libertad de pensamiento, de organización y movilidad, alimentaria, ambiental y territorial.

Es necesario establecer la seguridad como una política de Estado, que no solo implique fuerza pública sino un cúmulo de condiciones económicas, políticas, sociales y culturales, para garantizar el respeto a la vida y a la integridad, así como la promoción de intereses públicos de la sociedad. También es necesario y urgente redefinir el papel del Estado como responsable de la seguridad en el territorio, para que no lleguen nuevos agentes armados a incrementar la percepción de inseguridad por la reconfiguración territorial para expandir sus negocios de siembra de coca y el ejercicio de la minería ilegal.

Cobran interés los temas de seguridad ciudadana y personal, reconfigurar la territorialidad y establecer tanto los aparatos de seguridad como de justicia, porque sin ello no se avanzará en el conflicto social que reclama la sociedad civil en Ituango.

1.3.2. Justicia

Jorge Eduardo Londoño (Avila & Londoño,2002) plantea que en las sociedades modernas y plurales, los ciudadanos interactúan procurando la realización de un plan de vida, libremente escogido, con el fin de lograr sentido, identidad y autorrespeto, pero que es necesario que el Estado establezca reglas que definan los parámetros bajo los cuales deben actuar los individuos y que imponga límites recíprocos para que todos sus habitantes sean respetados:

La justicia es el estándar que gobierna el conjunto de reglas que posibilitan la persecución pacífica de los planes de vida de individuos que tienen diferentes concepciones de la felicidad, de la moralidad, de la religión, de la economía, del arte, de la cultura. Se busca que esas regulaciones traten a todos como libres e iguales, según criterios de equidad y respeto mutuo (p.182).

Es latente la percepción de inseguridad por la reconfiguración territorial de los agentes armados y la falta de credibilidad en la justicia. Las manifestaciones de la comunidad son de asombro ante la falta de acción de la justicia y los pocos resultados que muestra.

Ituango es un territorio muy extenso en el que el Estado apenas tiene unos cuantos funcionarios. Los agentes armados están acostumbrados a imponer su propia justicia que lamentablemente la comunidad terminó por aceptar y legitimar, al punto que se puede afirmar que extrañan: “ el grupo imponía los castigos muy severos a veces, pero con eso había paz y

tranquilidad por acá”²¹. El conflicto social generado por la falta de confianza y credibilidad en la justicia amerita un análisis a profundidad y una atención especial. Es necesario que el Estado coopte los territorios para que los imprima de legalidad y legitimidad de la mano de las comunidades y de los grupos sociales organizados de la sociedad civil.

1.3.3. Inclusión social y oportunidades

Es recurrente escuchar la desazón de los jóvenes porque no encuentran oportunidades y con ello se consideran a sí mismos como presa fácil de los agentes armados y de la ilegalidad. Es un grito y un llamado de esperanza para que a Ituango lleguen las oportunidades, el empleo, las ofertas educativas y la inclusión social, que llegue de todo para todos.

Este conflicto social es nodal, porque no se centra en los asuntos históricos que ha manejado el conflicto armado como la seguridad y la justicia, sino que se centra en las oportunidades que pueden surgir de un conflicto social y que en Ituango se requieren con urgencia para atraer a los jóvenes, a los campesinos y a la comunidad en general.

Como una muestra de que vive un momento histórico, Ituango es epicentro de la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, que ha generado empleo y dinamización a su economía local. Sin embargo, a finales de 2018 se terminará la construcción del proyecto que avicinará un conflicto social que puede ser de gran magnitud por cuanto muchas de las personas empleadas en el proyecto, es posible que ya no quieran regresar a sus actividades en el campo y que incluso quieran migrar; se dejarían de lado los cultivos y las actividades agrícolas.

²¹ Entrevista realizada a un ciudadano de Ituango, quien solicitó reserva de su nombre, el 22 de enero de 2018. Anexo 4.

Con todo esto, la economía puede variar una vez el proyecto termine su construcción y las inversiones previstas, que superan con creces el presupuesto municipal de varios años, terminen. Es importante y primordial adelantar las políticas públicas que tiene previsto el *Plan de desarrollo municipal* para que se pueda gestionar este conflicto social, antes de que derive en expectativas frustradas que puedan llevar a manifestaciones violentas o a desazón y desesperanza, que también son factores que dinamizan negativamente el conflicto.

1.3.4. Recursos ambientales

La presión sobre los recursos naturales, asociado a la siembra de coca, a la minería ilegal y a la presión sobre el parque natural Paramillo, van a crear un enorme conflicto ambiental que ya se advierte; aunque ya es latente en el municipio, puede generar una vuelta de tuerca al conflicto armado. En el parque natural Paramillo, que es santuario nacional, rico en flora y fauna, existen enormes conflictos territoriales y usos indiscriminados de la tierra que ameritan un cuidado especial de las autoridades ambientales, de las fuerzas legítimas del Estado y de la sociedad como tal, que es responsable de cuidar los recursos naturales.

Asociado a los cultivos ilícitos y a la minería ilegal, se vislumbra un gran conflicto ambiental, y por ello es importante traer a colación la Teoría de Derechos, especialmente los denominados Desca (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), que promuevan la convivencia responsable, en deberes y derechos con la naturaleza.

Capítulo 2

Entre un Estado ausente y un Estado cohesionador

Este capítulo se propone analizar la incidencia que tiene la institucionalidad, o la ausencia de ella, en la generación de conflictos sociales y en la resolución de estos, en entornos de conflicto armado y de diferentes tipologías de violencia. En el capítulo anterior se hizo una caracterización de las tipologías del conflicto, se identificaron los grupos que lo dinamizan y se esbozaron los principales conflictos sociales que subyacen en el municipio de Ituango. En este se propone, como se enuncia, analizar su incidencia en la institucionalidad y su capacidad para desbordar al Estado o viceversa.

Es un hecho evidente que la ausencia del Estado permitió que aflorara y se intensificara el conflicto armado y facilitó la instalación de agentes armados como la guerrilla, los paramilitares y las bandas criminales que constituyeron casi un proto-estado o estado de facto (Adarve, 2016; Valencia, 2013).

Varias investigaciones han abordado el conflicto armado y las tipologías de violencia que ocasionó en el municipio de Ituango. Catalina Valencia, en un estudio que denominó “La reconquista de Ituango, un reto en seguridad y defensa nacional del Estado colombiano”, realizó una investigación en el marco de estudios políticos estratégicos de seguridad y defensa nacional, enfocado en demostrar que la complejidad de la geografía y la incapacidad histórica del Estado para proyectar la autoridad en las regiones, ha coadyuvado a concentrar la violencia en sitios específicos como el municipio de Ituango, donde han surgido, se han constituido y se han mantenido estructuras armadas y ejércitos capaces de imponerse como proto-estados.

Por su parte, Cristian Adarve escribió su tesis denominada “La recuperación y consolidación de Ituango: un asunto de Estado más allá de la firma en La Habana”, en la que resalta que es la ausencia del Estado, o un Estado precario como lo denomina, junto con factores como el narcotráfico, los que permitieron el asentamiento como estados de facto de los agentes armados.

Esta última investigación es enfática en señalar que mientras no se aborden acciones integrales de seguridad, justicia, fortalecimiento institucional e integración social y económica de manera focalizada por parte del Estado, se pueden generar nuevos episodios de violencia, acarreados principalmente por la disputa de una zona estratégica para el narcotráfico entre grupos de crimen organizado.

Ambos textos abordan en extenso el conflicto armado como se deduce de su lenguaje, son contundentes en concluir que la ausencia o precariedad del Estado, así como los factores que han originado la violencia, pueden ser recurrentes o espirales si no se atienden adecuadamente.

Pero ésta investigación aborda el conflicto social, ese que subyace en toda sociedad como inherente a ella y como oportunidad de cambio, como una confrontación sana por el interés legítimo de convivir en sociedad con las diferencias y las disonancias que sean propicias para el respeto de las identidades. En consonancia y en complemento con esos estudios, esta tesis plantea que más allá de la violencia del conflicto armado y de la ausencia del Estado en Ituango, hay una serie de conflictos sociales latentes que no han sido atendidos, que se convierten en espiral de violencias recurrentes. Son latentes porque de no atenderse pueden derivar en nuevas violencias, como de hecho son los causantes de las violencias que ha vivido la región.

La premisa fundamental del análisis, más allá de la ausencia del Estado o su debilidad histórica, es su presencia deshilvanada, insuficiente e inoportuna en muchas ocasiones, que solo aparece como un actor autoritario, sin cohesión social que dinamice los conflictos que la gente

requiere. Los principales conflictos sociales que subyacen en Ituango son, como ya se dijo, la seguridad, la justicia, la falta de oportunidades e inclusión y un buen manejo a los recursos naturales, que se puede traducir en un latente conflicto ambiental, como más adelante se analizará.

La pertinencia se centra en establecer relaciones entre la teoría crítica política y la gestión administrativa territorial o municipal. Esto quiere decir que el conflicto social es importante para dinamizar la institucionalidad y el Estado, ya que dinamiza la institucionalidad hasta el punto de desbordarla por su incoherencia y desarticulación; pero con ello, en aparente contradicción pero con sustento real, se puede permitir una plena configuración del Estado, uno moderno con todos sus atributos de seguridad, justicia y oportunidades para todos (Adarve, 2016).

2.1. Una institucionalidad desbordada y ausente

En Ituango el Estado ha llegado, podría decirse, por temporadas, a instancias de organizaciones que lo reclaman y por reacción a eventos de orden público o de proyectos de desarrollo. Un ejemplo de este último es la actual construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, que es una economía de enclave en la zona porque aunque le aporta beneficios y tributaciones al municipio, no es su eje principal por cuanto es un proyecto más de región y de país, que local; pero ha llegado el Estado, sin cohesión, sin políticas claras y sin compromiso evidente. Es decir, no con los atributos de un “Estado moderno” (Adarve, 2016), en el que primen la seguridad y la justicia, como condiciones principales.

Para Ann Masón (2000) el poder sobre el territorio es el centro del Estado moderno, y es justo lo que requiere Ituango, que el Estado colombiano ejerza poder en ese territorio, que ha sido

violentado y está aún bajo influencia y coerción de agentes armados que quieren seguir siendo el poder de facto como proto estados.

Pero más que un Estado moderno, se requiere de uno fuerte, que demuestre atributos plenos de modernidad, que lo alejen de esa percepción de debilidad que le reclaman. Ann Masón (2000) hace una buena radiografía de lo que es un Estado débil, además de describir cómo debe ser el Estado fuerte y moderno que requiere Ituango, sobre todo, del papel que juega la sociedad civil en esa fortaleza y legitimidad del Estado fuerte y moderno:

Los Estados débiles no controlan ni el territorio ni la población dentro de su jurisdicción; la capacidad política del aparato de gobierno central es limitada, incapaz de suministrar seguridad o de cumplir con funciones reguladoras básicas; el poder del Estado es insuficiente para responder adecuadamente a las amenazas; la idea de Estado es violentamente desafiada por grupos; la autoridad estatal no se acepta de manera generalizada; el uso de la fuerza por parte del Estado se considera ilegítimo; y la comunidad civil es fragmentada y marginada. Una de las paradojas de los estados débiles es que en la medida en que su coherencia y legitimidad institucional disminuyen, recurren frecuentemente a la represión militar como instrumento para mantener la fortaleza del régimen y el control interno.

Un Estado fuerte sería uno en el cual el control sobre el territorio y la población está altamente consolidado; las instituciones del gobierno relacionadas con el suministro de servicios básicos tales como seguridad, ley, orden y justicia son funcionales y efectivas; el poder coercitivo del Estado es suficiente para repeler las amenazas a su autoridad; hay un amplio consenso dentro de la comunidad política con respecto al significado y propósito del Estado; la autoridad y la fuerza ejercida en nombre del Estado es considerada como legítima; y, por último, la sociedad civil cumple un papel significativo en la función de gobernar (p. 89).

A esa desarticulación, precariedad, debilidad, incoherencia y falta de políticas claras del Estado, se debe que aún no se haya logrado, al decir de Catalina Valencia (2012), la reconquista y la recuperación, o la consolidación (Adarve, 2016). Muy al contrario, es posible que se presente un retroceso con la intención de los grupos como Renacer Guerrillero y las diferentes bandas criminales, disidentes y narcotraficantes que ahora copan espacios en una sanguinaria lucha territorial por el poder en la zona que abarca a Ituango y al parque natural nacional Paramillo, uno de los ecosistemas más biodiversos del país y que es ruta natural para el Urabá. Todo ello configura un cuerpo de agentes armados ilegales que quieren volver al conflicto violento, en contraste con el cuerpo de organizaciones de la sociedad civil, que quieren volver el conflicto social fuente de su desarrollo y de sus oportunidades.

Ni la reconquista ni la consolidación se han dado, porque el Estado a lo largo del siglo XX no conquistó sus territorios y dejó el control territorial en manos de poderes locales que naturalmente pocas herramientas institucionales tenían (Patiño, 2010). Con esto, el Estado coadyuvó con el afloramiento de agentes armados ilegales que asumieron el poder de facto, monopolizaron el uso de la fuerza y dominaron a la población (Valencia, 2013, p.147). Al decir del profesor Carlos Patiño Villa (Como se citó en Valencia, 2013):

La falta de control territorial fue básica para que las guerrillas, desde la década de los cuarenta, y los grupos de autodefensas ilegales, desde la década de los ochenta, logran actuar sin interferencia estatal, conformando ejércitos irregulares que se establecieron en zonas de retaguardia” (p. 245) que comenzaron a controlar con facilidad el territorio, desplazaron al Estado y asumieron el control que asumía y generaron nuevas formas de operar y “de buscar éxitos militares que tuvieran una repercusión estratégica contundente” (p. 143).

En Ituango ese abandono del Estado se tradujo en el conflicto armado que degeneró en violencia extrema, desplazamientos y una cantidad alarmante de víctimas: el 80% de la población ituanguina se considera víctima.

Aunado a ello, la desconfianza en las instituciones es palpable, porque en muchas ocasiones percibieron connivencia de las fuerzas armadas legítimas con algunos grupos armados. Ello le generó a la población la enorme estigmatización que han sufrido en muchas ocasiones:

Mucha gente pregunta que si es verdad que hay mucha guerrilla o que al llegar al municipio lo reciben los guerrilleros, a lo cual uno responde con la realidad, pero aclarando todas esas supersticiones que se crean gracias a los medios amarillistas ²².

Ituango es epicentro del proceso de paz que ya tiene más de un año de firmado y que aún no logra cumplir con gran parte de lo acordado. El 24 de noviembre de 2016 el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el entonces máximo comandante de la guerrilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”, firmaron en el Teatro Colón de Bogotá, el *Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*.

Hoy, distintos informes y analistas empiezan a generar alertas en torno a la implementación, reconocen algunos avances y destacan que el contexto de violencia ha cambiado. Por el contrario, en el municipio de Ituango es donde poco avance se ve y donde el contexto de violencia está regresando. En la vereda Santa Lucía, a dos horas del casco urbano, tiene asiento la

²² Entrevista realizada a Esteban Úsuga, líder juvenil y comunitario, el 5 de febrero de 2018. Anexo número 5.

zona de ubicación de los guerrilleros desmovilizados del Frente 18 de las FARC que se acogieron al proceso.

Según el informe de la Fundación Paz y Reconciliación (2017), Ituango es uno de los municipios en los que más pelagra el posconflicto y puede degenerar en mayor violencia. La infraestructura prometida y el establecimiento de proyectos productivos apenas está en el 87% y debió culminar hace más de seis meses. Los homicidios contra desmovilizados se incrementaron peligrosamente, en 2016 hubo dos, en 2017 siete y en lo que va de 2018 aumentaron los enfrentamientos y los hostigamientos al campamento de los desmovilizados²³.

El informe de Paz y Reconciliación hace énfasis en que es urgente e importante que el Estado cumpla lo pactado al poner en marcha estrategias eficaces para conjurar todos los factores de violencia que ya son evidentes como el crecimiento de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la insistencia de los herederos de los paramilitares, especialmente el Clan del Golfo, la consolidación de las disidencias de las FARC, la persistencia del ELN de volver a la confrontación armada y la anarquía criminal que se percibe en las zonas dejadas por las FARC donde están en aumento los delitos comunes y los conflictos con la comunidad (Paz y Reconciliación, 2017, p. 9).

El estudio también resalta que desde que empezó el proceso de paz en 2012 y hasta 2016 cuando se firmó el acuerdo final, los homicidios en Colombia se redujeron en 3.695 vidas, el 27% equivale a 957 vidas en los 242 municipios donde operaron las FARC. También se puede observar reducción en el secuestro que pasó de 3.306 casos en 1998 a 150 este año, y las víctimas de minas antipersonal que fueron 1.281 en 2006 frente a 15 en lo corrido de 2017. Pero se lanza una alerta

²³ Se recomienda escuchar: Matta, N. (26 de febrero de 2018). Los audios de la batalla entre disidencias de Farc y Urabeños. *El Colombiano*. Recuperado de <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/los-audios-de-la-batalla-entre-disidencias-de-las-farc-y-clan-del-golfo-en-ituango-XN8258505>

porque en 2017 y en lo que va corrido de 2018, se reporta un incremento en los índices de homicidios en 123 municipios, de los cuales Ituango muestra una preocupante cifra de incrementos de violencia.

El portal *Verdad Abierta*²⁴ retrató el desencanto de los habitantes de Ituango con el proceso de paz porque la arremetida de las Autodefensas, la aparición de otros agentes armados, la consolidación de la disidencia del Frente 36 que llegó a copar el territorio dejado por el Frente 18 y el aumento tanto del tráfico como del microtráfico, con mafias provenientes de Medellín, tienen no solo en zozobra sino en desazón a los habitantes del municipio, que ya avizoraban un conflicto social diferente y mejores oportunidades con el *Acuerdo de paz*.

Con el coletazo violento que ha provocado el reacomodo de agentes armados, la llegada de la disidencia del Frente 36, las amenazas a los desmovilizados y el constante tráfico y microtráfico, volvieron los desplazamientos, los asesinatos y los enfrentamientos en la región²⁵.

A Ituango volvió el miedo en los primeros meses de 2018, porque de nuevo el Estado se alejó confiando en que las condiciones de seguridad cambiarían con el proceso de paz, pero descuidó sus obligaciones en la consolidación territorial y del proceso mismo. Los agentes armados ilegales que llegaron al territorio están de nuevo consolidando su poder y convirtiéndose otra vez en señores de la guerra y en proto estados. La población manifiesta su desazón:

²⁴ Ver: Verdad Abierta. (9 de marzo de 2018). En Ituango hay un profundo desencanto con el proceso de paz. *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/en-ituango-hay-un-profundo-desencanto-con-el-proceso-de-paz/>

²⁵ Ver: Las nuevas guerras que quitan el sueño en Ituango y Briceño. *El colombiano*, febrero 26 de 2018. Tomado de: <http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/guerra-en-ituango-antioquia-tras-desmovilizacion-de-las-farc-FX8257531>

Pero el miedo colectivo que genera la guerra volvió a despertar el pasado 28 de febrero, cuando unas 91 personas (25 familias) provenientes de las veredas La Ciénaga, Sanjuanillo y La Soledad llegaron al centro poblado de Santa Rita cargando consigo algo de ropa y con la incertidumbre creciente por saber dónde pasarían esa noche y quizás las siguientes. Según contaron los labriegos al Inspector de Policía del lugar, días antes, un piquete de hombres armados les dijo que se tenían que ir porque la cosa se iba poner fea.

Nadie se atrevió a denunciar quién fue el responsable de los desplazamientos forzados. Quizá tampoco lo tengan claro pues, como dijo una habitante del centro poblado consultada por VerdadAbierta.com, “antes uno sabía que estaban las Farc y muchos años antes los ‘paras’. Pero ahora uno ve una cantidad de gente armada moviéndose por el monte y uno no sabe quiénes son. Eso da mucho miedo, la gente está llena de miedo (*Verdad Abierta*, 9 de marzo de 2018).

Es un asunto crucial que el Estado vuelva consolidado y controle no solo el territorio con la seguridad debida, sino que llegue con institucionalidad fortalecida, que cumpla con lo establecido en el *Acuerdo de paz*.

El problema del microtráfico que genera amplio consumo interno es un asunto que las autoridades deben tomar con seriedad. La rectora de la institución educativa de Ituango denunció que los narcotraficantes empezaron a llevar la droga a las puertas de las escuelas en helados y dosis gratis de marihuana para los niños, con lo que quieren generar dependencias y aumentar las ventas del negocio ilegal:

La situación ha llegado al extremo de que niños de cuarto y quinto de primaria comercializan la droga y los padres ayudan en esas ventas. En el municipio saben cuáles son las casas donde venden los estupefacientes. Lo hacen para comprar útiles, ropa o uniformes. Esto no va a mejorar a punta de consejos o de campañas, porque las necesidades económicas nadie las supe”, dice la rectora (Matta, 26 de febrero de 2018, párr. 15).

En la misma nota, el diario *El Colombiano* resalta que los negocios de la coca y del microtráfico son los que llevan a Ituango a regresar a la espiral violenta que se creía ya superada y que ahora se agrava con una creciente percepción de inseguridad que de nuevo es atendida solo con las fuerzas armadas; lo cual no es indebido, pero no debe ser la única solución. La fuerza pública debe estar en una política social de paz:

Este microtráfico y el negocio de la coca es lo que ha llevado a Ituango a convertirse en un escenario de guerra que en el 2017 dejó 16 personas asesinadas según fuentes de la Policía. Por sus calles hoy ronda el fantasma de la guerra, y tiene nombre propio: “Carnitas”, un disidente del frente 18 que no quiso jalarle al cuento de la paz. El último vestigio de esa guerra se esfumó el 26 de enero pasado. Las trincheras que sirvieron de escudo a los ataques guerrilleros fueron retiradas, pero con esa acción llegó el temor de la población que pidió a las autoridades no abandonarlos. El comandante de la IV Brigada del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, explica que los soldados seguirán prestando la seguridad en Ituango. “Vamos a fortalecer nuestra presencia en ocho veredas que son vulnerables y necesitan protección los líderes sociales. Va a ser uno de los municipios con más tropas”, indicó el alto mando militar (Matta, 26 de febrero de 2018, párr. 17).

El proceso de paz que no avanza como se acordó, el posconflicto en riesgo enorme de revivir la violencia por la llegada de varios agentes y la ausencia displicente del Estado, configuran caldo de cultivo para que el conflicto violento aflore y se pierda la oportunidad histórica de avanzar en un proceso concertado de convivencia en el que primen los conflictos sociales como oportunidades.

Esta tesis plantea que la institucionalidad, el Estado, por su ausencia permanente, su actuación deshilvanada y displicente, se desborda por el conflicto y a su vez desborda la conflictividad social. Sus actuaciones son ocasionales y reactivas a sucesos de orden público, no hay proyectos o políticas concretas, la enorme desconfianza que genera cuando llega e incumple, como en el caso de los proyectos que aún no logra concretar producto del *Acuerdo de paz*, hacen que se vea rebasado. Pero a su vez, cuando llega es reclamado y las organizaciones de la sociedad civil se ponen en la tarea de plantear muchos proyectos y metas esperando que el Estado les cumpla, lo que deriva en desazón y desconfianza cuando no se cumple. Por ello el conflicto social, a su vez, sobrepasa a la institucionalidad.

En Ituango se tienen muchas expectativas no solo con lo que se derive del *Acuerdo de paz*, sino con la llegada de la institucionalidad. Esperan reparación por el histórico abandono estatal, tienen proyectos y esperanzas cifradas en que es una oportunidad para que el municipio se inserte en el desarrollo regional y sea mirado más allá del conflicto armado que solo les ha generado estigmatización y dolor.

Luis Jorge Garay (2002) dice que es necesaria una nueva institucionalidad que rijan a su vez otras relaciones de coordinación, responsabilidad y cooperación entre los grupos sociales. En Ituango hay una institucionalidad y una sociedad civil debilitadas por agentes armados ilegales que quieren cooptar de nuevo el territorio y establecer poder de facto.

En tal contexto, a la institucionalidad le compete adoptar normas, pautas y comportamientos que favorezcan mejores condiciones de seguridad, acceso a la justicia con equidad para todos, generación de oportunidades y propiciar la asunción de compromisos y responsabilidades colectivas para el respeto tanto de la convivencia como de una adecuada administración de lo público, para instaurar una civilidad ciudadana y construir una sociedad

moderna que se refleje en todas las regiones, como Ituango. En este territorio se percibe que la institucionalidad no solo es débil sino incapaz de manejar los conflictos: “Para mí la presencia del gobierno no ha estado presente y la institucionalidad en nuestro Municipio es deficiente, le queda grande toda la problemática existente”²⁶.

A las organizaciones de la sociedad civil, como grupo dinamizador del conflicto social, le compete asumir un rol esencial para propender por un entorno de convivencia, con ciudadanías que aportan y debaten, favorable al desarrollo, a la generación de riqueza y al bienestar para todos, además de fomentar valores de respeto por el Estado y sus instituciones.

Es necesario e indispensable que la institucionalidad y la sociedad civil en Ituango recuperen y construyan relaciones de confianza mutua, que permitan dinamizar y gestionar los nuevos conflictos sociales de los que se derivará el desarrollo o el avance para la región. Si no se llega a un consenso tal, es posible que los agentes armados logren su propósito de revivir el conflicto y sumir a la región en otra época de violencia.

Luis Jorge Garay (2002) expone razones muy claras por las cuales se mantiene la precariedad estatal en Colombia, por las cuales el país no ha podido ser un Estado moderno. Razones que van no solo desde su incapacidad para copar el poder local en vastas regiones de su territorio, que ha sido su constante, de no ser capaz de velar por la irrestricta prevalencia de la ley y la aplicación de justicia, de no satisfacer las necesidades de la población y asegurar la integridad territorial, sino también porque hay un evidente deterioro de la convivencia ciudadana y una enorme laxitud en la interpretación de las normas y el acatamiento de las mismas, que se traduce

²⁶ Entrevista realizada a Hilda Oquendo Oliveros, Líder de la Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia, el 23 de enero de 2018. Anexo número 2.

en que no se respetan ni las normas ni al Estado ni a las instituciones. Lo anterior propicia que las comunidades, esa misma sociedad civil, sean cooptadas, mucho más vulnerables y acepten tanto los poderes como las normas de facto de los agentes armados y grupos económicos y políticos:

Ahora bien, la tradicional reproducción de prácticas impuestas de facto por grupos poderosos en usufructo de su privilegiada posición en la estructura económica, social y política en Colombia, ha impuesto valores, comportamientos y formas de proceder contrarios a la legitimación y a la institucionalización del Estado, al perfeccionamiento de un verdadero régimen de mercado, a la instauración y la representatividad de unos partidos políticos voceros de pertenencias ideológicas de sus miembros y actuantes como colectividad en procesos sociales bajo un sistema democrático. Así se ha obstaculizado el desarrollo de la cultura cívica —en cuanto contenido moral de determinadas creencias acerca de la sociabilidad humana y el reconocimiento moral del individuo—, el fortalecimiento del tejido social, la prevalencia de lo público y, en fin, la consolidación de un ordenamiento democrático en lo económico, político y social. Esta es una razón fundamental —aunque no la única— por la cual el país no ha podido alcanzar la instauración de un Estado Social de Derecho (Garay, 2002, p. 81).

2.2. La participación ciudadana: un fundamento para construir ciudadanía

Esta tesis también plantea que sin la participación ciudadana es imposible que se gestione adecuadamente el conflicto social, incluso es complejo que se termine el conflicto armado. La participación de la ciudadanía, de la sociedad civil, de ese cúmulo de organizaciones que hacen el cuerpo de la sociedad, es necesaria para que se logre una gestión adecuada de los conflictos sociales como la seguridad, la justicia, los procesos de inclusión, las oportunidades, y más aún, el

conflicto ambiental en ciernes que debe concitar el interés de la ciudadanía y la sociedad civil junto con el Estado.

En Ituango es imprescindible construir una ciudadanía crítica, diversa, que dialoga, debate y permite el conflicto social, porque sabe que es un mecanismo para el desarrollo de su región, rica en biodiversidad y en recursos naturales inexplorados por culpa del largo conflicto armado que ha vivido. Ahora, si bien es importante que haya participación de la sociedad civil, también es importante, como se ha dicho anteriormente, que el Estado cumpla su papel de propiciar los escenarios, las oportunidades para que el conflicto pueda ser tramitado junto con la participación de la ciudadanía.

El modelo de desarrollo que se tiene en el país no es muy propenso a la participación, ya que no la incentiva en las comunidades más allá del papel. Por eso, es el momento de que en regiones como el norte lejano de Antioquia, muy especialmente en Ituango por su ubicación geoestratégica, la participación sea fundamento para que los conflictos sociales afloren.

Al decir de Garay (2002), la participación es un proceso de doble vía, cambiante, que tiene la responsabilidad de construir diálogo político y social, acorde con las realidades y las necesidades. Es decir, la sociedad “requiere de organizaciones sociales y políticas que impulsen y promuevan la participación, canalicen las demandas sociales y las traduzcan en decisiones políticas, investidas de autoridad y legitimidad” (Garay, 2002, p. 86).

La participación, entendida como el proceso en el que las organizaciones de la sociedad civil actúan y discuten sobre el desarrollo que quieren y necesitan, vienen a ser las bisagras del antagonismo y el agonismo que el conflicto requiere, en interpretación de Chantal Mouffe (2016).

Mouffe argumenta que el enfoque prevaleciente de la teoría política, dominada por una perspectiva racionalista e individualista, no es suficiente para ayudar a entender los poderes

actuales. Y por ello es necesario trascender de los modelos actuales, meramente deliberativos y dialógicos, a un “pluralismo agonístico”, que supere y transforme el antagonismo: “El objetivo de la política democrática debiera ser el de suministrar el marco en el cual los conflictos puedan adoptar la forma de confrontación agonística entre adversarios en lugar de una antagónica entre enemigos” (Mouffe, 2016, p.129).

La participación ciudadana sería ese agonismo que supere el anacrónico antagonismo que ve enemigos en todos los debates. Superar esta noción es crucial para que el conflicto social en todo el país pueda trascender y aportar al desarrollo, que en localidades como Ituango son fundamentales porque las heridas del conflicto armado están abiertas. En ello juegan un papel fundamental los estudios políticos del discurso, que podrían construir los relatos de la reconciliación para el conflicto social.

En estimular la formación y la participación de una ciudadanía deliberativa, que identifique agonismos más que antagonismos, se encuentra una posibilidad efectiva para legitimar el Estado ausente en Ituango y fundamental para la transformación social.

2.3. Los conflictos sociales latentes

En Ituango hay conflictos latentes. El conflicto armado está en vía de resolución y cierre, aunque tiene reacciones y hay agentes armados que tienen interés en conseguir dominio territorial para obtener poder de facto. Pero el proceso de resolución avanza porque existe voluntad política de la institucionalidad, con sus ausencias e incumplimientos, y de la sociedad civil para superarlos.

Ahora es tiempo de enfocarse en los conflictos sociales latentes que son los que se perciben pero apenas están en vía de manifestarse y gestionarse; mientras el conflicto no se tramite y se

gestione seguirá latente. Y en Ituango lo son, porque los grupos sociales de la sociedad civil son en realidad débiles interlocutores por el poderío de los agentes armados que los coaccionan, además de la ausencia y la precariedad del Estado que los ignora. Silva García (2008) define así el conflicto latente:

El conflicto es latente cuando existe inconformidad, pero ella no se ha manifestado en acciones sociales, por motivo de la debilidad del interlocutor. En estricto sentido, el conflicto social latente no ha ocurrido, aunque la situación ya contendría la semilla necesaria para propiciarlo. El conflicto latente sería opuesto al declarado, en realidad la forma auténtica de conflicto social, según Vincenzo Ferrari son: “los conflictos traducidos en exigencias de comportamiento dirigidas al antagonista” (p. 40).

En Ituango se perciben los conflictos sociales. Una institucionalidad débil y ausente, precaria al extremo, una sociedad civil estigmatizada y coaccionada por agentes armados que tienen intereses en expandir su negocio de economías ilegales, son caldo de cultivo para que los conflictos afloren.

La comunidad ituanguina quiere ocuparse de sus problemas de convivencia, de identidad, de su desarrollo. Por eso les preocupan los conflictos cotidianos como el aumento de las riñas, los problemas de drogadicción, principalmente de los jóvenes, de la economía local que tiene muchos altibajos, el alto consumo de licor, la intolerancia hacia las nuevas identidades religiosas, de género, políticas y hasta ambientales; pero no pierden de vista que todo ello se traduce en grandes conflictos sociales que reclaman con urgencia un trámite y una gestión adecuada.

Conflictos como el de la creciente inseguridad, no solo por el coletazo provocado por el enfrentamiento entre agentes armados, sino por la seguridad ciudadana que genera preocupación

por los altos índices de delitos; la justicia que se percibe cojeante y selectiva, y la inclusión social que conjuga el interés de que las oportunidades lleguen para todos. En Ituango se espera y se quiere que el Estado llegue como un benefactor que aporta y permite la creación conjunta de oportunidades, no como un subvencionador de subsidios. Además, que dé cuenta del conflicto ambiental en ciernes, porque la región tiene una gran riqueza en ese aspecto. Es sede del parque natural nacional Paramillo, un patrimonio biodiverso que es un corredor estratégico para la región y ello le representa gran vulnerabilidad y lo asocia con una problemática ambiental que aumenta cada día exponencialmente.

2.3.1. La seguridad no es una percepción, es un conflicto social

La seguridad es una palabra muy compleja para definir, porque es una sensación vital, es decir, un ser vivo la percibe de acuerdo con el entorno. Por ello es muy complejo medirla en cualquier ámbito, porque independiente del lugar en donde uno se encuentre, la percepción dependerá de muchos factores. En los términos de la acepción de la RAE, es ausencia de riesgo y sensación de confianza en algo o alguien.

En consonancia con lo que plantea esta tesis, la seguridad es vital para el desarrollo humano y en tal sentido es un enorme conflicto social. Es claro que hay una dependencia, como dice Medina Velásquez (2013) entre la seguridad y el desarrollo, porque una necesita de la otra, “no puede haber desarrollo sin seguridad y no puede existir seguridad sin desarrollo” (p.8).

Cobra importancia la definición de seguridad ciudadana que plantea Medina Velásquez, porque permite entrever la relación que tiene con el conflicto social:

La seguridad ciudadana ha sido definida poniendo de relieve distintas dimensiones y niveles, en especial su intangibilidad y su carácter subjetivo. De manera amplia, se define como la preocupación por la calidad de vida y la dignidad humana en términos de libertad, acceso al mercado y oportunidades sociales. La pobreza y la falta de oportunidades, el desempleo, el hambre, el deterioro ambiental, la represión política, la violencia, la criminalidad y la drogadicción pueden constituir amenazas a la seguridad ciudadana (2013, p. 13).

Un campesino de la cabecera municipal de Ituango puede sentirse inseguro en cualquiera otra de las 132 veredas, pero la percepción no será la misma para ese campesino en sus propias veredas o en la cabecera municipal, y sucederá también, al contrario. Así cobra importancia el tema de la seguridad, que debe ser asumida por las autoridades, para que prime el uso de la fuerza legítima del Estado, pero no solo como una fuerza coercitiva, sino en el marco de una política social de paz, en la que deben cumplir un papel preponderante.

El Estado colombiano tiene establecida desde inicios de siglo una política de seguridad democrática con el propósito de crear condiciones para una civilidad moderna y democrática que garantice un ambiente idóneo para la convivencia y el desarrollo sin la intimidación de grupos criminales ni ataques de grupos armados (Garay, 2002, p. 32). Pero en zonas como Ituango solo se enfocó en un aspecto militarista y de control del orden público para contener las acciones de los grupos armados que arreciaron el conflicto armado para rechazar esa política de seguridad.

Ahora que el conflicto armado se está gestionando es necesario pensar una política de seguridad enfocada en la ciudadanía. Una seguridad ciudadana que cuente como aspecto principal, en consonancia con lo que esta tesis expone, con la participación de la ciudadanía.

En tal sentido es necesario redimensionar y redireccionar el papel de las fuerzas legítimas del Estado, que deberían enfocar sus acciones en consolidar la paz territorial, garantizar la seguridad con la participación ciudadana y coadyuvar en una intervención integral del Estado.

En Ituango la seguridad es percibida, como una zozobra permanente. En tal sentido es un conflicto latente, porque se manifiesta desde la emocionalidad, se siente amenazante y paralizante. Es la percepción de inseguridad el detonante para que el conflicto social no avance, por eso es un conflicto que requiere atención prioritaria e integral.

A lo largo de su historia el Estado colombiano no solo ha estado ausente al evadir sus responsabilidades e incumplir sus compromisos, sino que, más grave aún, al no garantizar la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos, que es un mandato constitucional. Y no solo no ha defendido la vida de los pobladores, no ha logrado enfrentar en la mayoría de ocasiones, con los mecanismos de coerción debida, a los grupos armados que violan la ley y ponen en peligro e inseguridad a los ciudadanos.

En la región las economías ilegales están creciendo exponencialmente la percepción de inseguridad. Tal como lo expone Adarve (2016), el tráfico de drogas incidió trascendentalmente en la prolongación e intensificación del conflicto armado en todo el país. Pero ahora, junto a ello, el tráfico de drogas y la minería ilegal hacen que haya una especie de resurgir del conflicto, por el reacomodamiento de agentes armados que llegan a la zona a disputar control territorial que el Estado displicentemente no ha copado como es su deber.

Ariel Ávila²⁷, en su libro *Seguridad y Justicia en tiempos de paz* (2017), expone cuatro asuntos fundamentales que son importantes de analizar para redireccionar la seguridad en el posconflicto. En primer lugar, la seguridad en la ruralidad (que es la inmensa mayoría del territorio colombiano, incluidas las cabeceras municipales), es sinónimo de conflicto armado porque se ha enfocado en enfrentar a los grupos guerrilleros, paramilitares y a todas las estructuras del crimen organizado.

En segundo lugar, deja claro que la seguridad rural no es objeto de una política pública debido a los pocos recursos y a la alta concentración de conflictividad. Este hecho denota que el Estado la ha asumido indebidamente en las llamadas zonas periféricas del país, que es la inmensa mayoría del territorio nacional y solo se ha enfocado en la convivencia urbana, es decir, en los grandes centros poblados.

En tercer lugar, ha asimilado la conflictividad rural a la urbana, sin un tratamiento diferencial, con lo cual el enfoque es equivocado y errático, tanto que en ocasiones lo ha llevado a creer (al Estado) que, según Ávila y Londoño (2017), “las zonas rurales son pacíficas y casi no registran hechos de conflictividad social” (p. 231).

²⁷ En este texto, los investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación (2017) identifican el riesgo del posconflicto en el municipio de Ituango: “Diferentes fuentes y autoridades confirman que hay presencia de estructuras criminales del Clan del Golfo y los Pachely de Bello, en las veredas Santa Ana; Bajo Inglés y Pascuitá, así como en el corregimiento de Santa Rita. Los Pachely, una estructura criminal perteneciente a la Oficina de Envigado, compraron una franquicia en alianza con el Clan del Golfo, para el control de las rutas y producción de coca en la región. El domingo 29 de enero, 15 personas salieron por amenazas del Clan del Golfo. Algunos líderes sociales denuncian que en Pascuitá, el Clan del Golfo reunió a la comunidad y les comunicó que ellos serían quienes contralorarán la seguridad, cobrarán el impuesto de peso por la base de coca que controlaba las FARC y que las reglas para la movilización seguían como lo imponían las FARC” (p. 166). Esto también fue reseñado por diferentes medios de comunicación como *El Colombiano*, del 26 de febrero de 2018: “Las nuevas guerras que quitan el sueño a Ituango”; y por el *Portal Verdad Abierta*, del 9 de marzo de 2018: “En Ituango hay un desencanto con el proceso de paz”.

Y por último, solo recientemente a raíz de estudios realizados por el PNUD²⁸, se interesó el Estado colombiano por ahondar y conocer su ruralidad. Esto dice el informe: “Colombia es mayoritariamente rural, tres cuartas partes de los municipios son predominantemente rurales, allí vive el 31% de la población y sus jurisdicciones ocupan el 94% del territorio del país” (Ávila y Londoño, 2017, p. 32).

Las políticas públicas de seguridad del Estado colombiano, tanto la de Seguridad Democrática como la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, promulgada en 2011 por la Presidencia de la República, los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de la Justicia y el Derecho, junto con la Fundación Ideas para la Paz, tienen un enfoque más centrado en el entorno urbano que en el rural. Ello da cuenta de la forma distante y a veces displicente como el Estado centralista colombiano ha mirado la ruralidad, al exacerbar con ello no solo el conflicto armado, sino al dejar de lado las oportunidades para que el conflicto social avance y transforme esas regiones rurales del país.

Con tal entorno, las economías ilegales han tomado la oportunidad para cooptar la autoridad de facto y establecer sus reglas y sus relaciones con las comunidades, amenazando y coercionando al cúmulo de la sociedad civil para que se someta a sus aparatos criminales. Al decir de Duncan (2006) y Catalina Valencia (2012) han actuado como los señores de la guerra que conformaron proto estados a su arbitrio y con sus propias condiciones de seguridad, según las cuales, las comunidades, es decir la sociedad civil, son el escudo de protección y por lo tanto los

²⁸ Ver PNUD. (2011). *Colombia rural. Razones para la esperanza*. Recuperado de http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-resumen_ejecutivo_indh2011-2011.pdf.

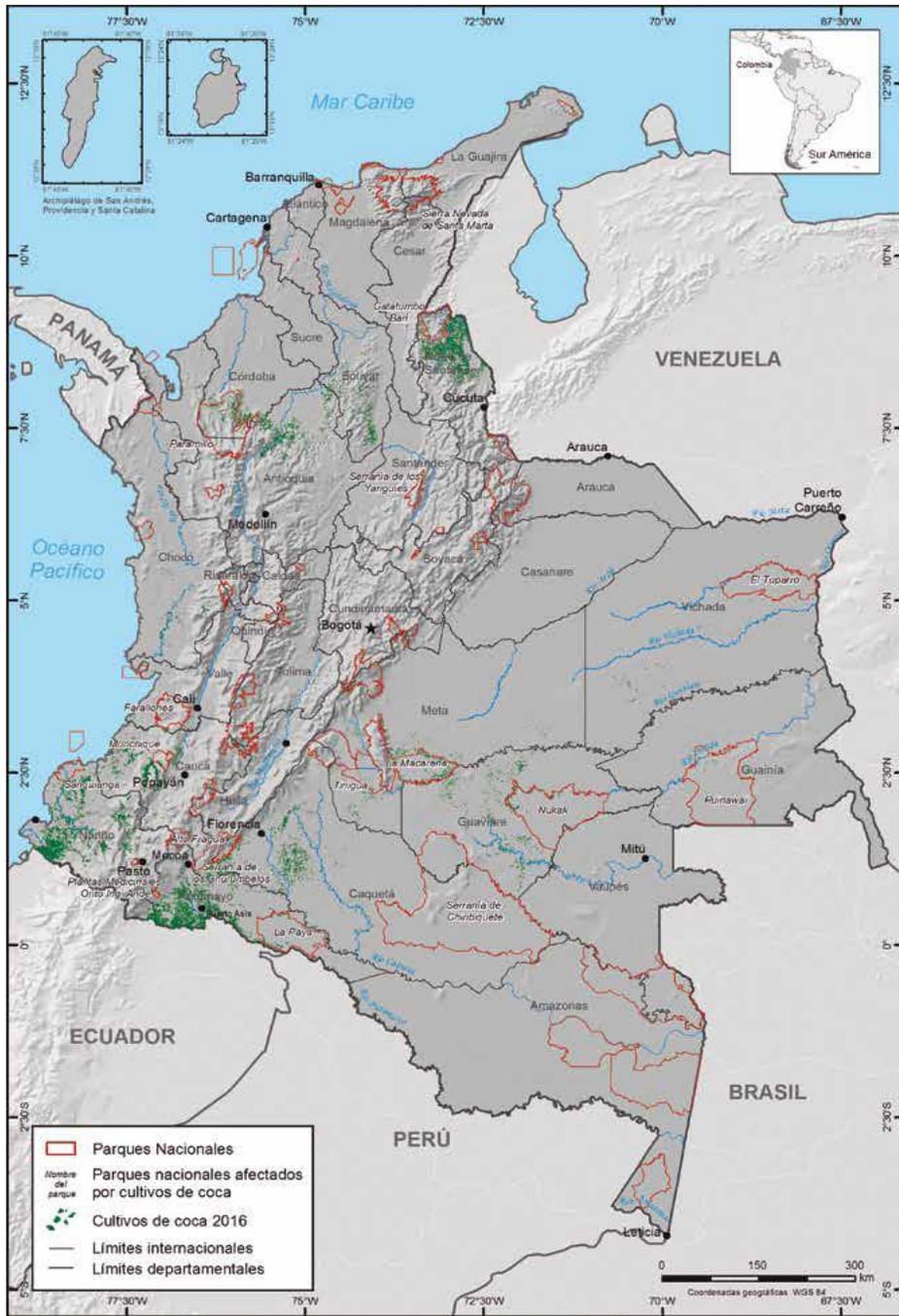
detentadores de la seguridad de ellos, lo que genera la percepción de inseguridad que se traduce en miedos colectivos y zozobra permanente.

Las economías ilegales, como el tráfico de drogas y ahora la minería ilegal, favorecen para que los agentes armados perpetúen su poder y se consoliden. Alfredo Molano (2013) reconoce el impacto que tuvo la economía de las drogas ilícitas, desde la década del 80, en el fortalecimiento de los grupos guerrilleros. Adarve (2016) hizo una radiografía de cómo no solo los grupos guerrilleros sino la connivencia y los acuerdos de estos con los paramilitares, aumentaron su poder económico con el manejo de economías ilícitas.

Con ello se configura que el conflicto colombiano se transformó ideológicamente. Ya no es un conflicto por el agravio (*grievance*), sino por la codicia (*greed*) (Paul Collier como se citó en Ávila y Londoño, 2017, p. 51). Aunque Daniel Pecaute (Como se citó en Pizarro Leongómez, 2015) no comparte tal tesis, porque considera que por lo menos en el caso de la guerrilla, las motivaciones de su lucha siempre fueron predominantemente ideológicas (p. 53).

Tal no es el caso de la confrontación actual, en la cual, al parafrasear a Collier (2000), la apropiación privada de recursos sería el motor determinante para querer intensificar y atraer de nuevo el conflicto. La producción de coca y la minería ilegal son factores determinantes para la seguridad en la región, como se puede observar en el siguiente mapa que ilustra los sembrados de coca en los parques nacionales de Colombia, con una presencia importante en la zona de Paramillo, objeto de esta investigación:

Figura 3
Parques Nacionales Naturales y cultivos de coca en Colombia



Fuente: Recuperado de
www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja

El gran problema del posconflicto colombiano es que se encuentra en el medio de economías ilegales y criminales, de agentes armados poderosos, disidentes, rearmados y emergentes, que tienen grandes intereses económicos y por ello están dispuestos a revivir las confrontaciones violentas para aprovechar el vacío de poder y de autoridad que dejaron los desmovilizados y que el Estado tampoco ha copado. Y la población está en medio, con miedo y zozobra: “Ahora estamos percibiendo una incertidumbre y una constante preocupación por los hechos violentos que están ocurriendo”²⁹. El pesimismo se apodera de los ciudadanos:

Tuvimos un tiempo de una tranquilidad que no nos la creíamos, impresionante, pero de un momento a otro se apareció lo que se tenía que aparecer, el pesimismo del pueblo salió a surgir y en efecto ya no sólo tenemos las FARC, sino que tenemos el golfo de Urabá interviniendo en el Municipio, entonces los que se desarmaron ya están armándose nuevamente para defenderse del golfo de Urabá y el pesimismo entra y nos lleva a pensar que las cosas se van a dañar, que el conflicto se va a incrementar y que la paz verdaderamente no nos va a tocar si el gobierno no hace algo urgente porque lo estamos viviendo y ya tenemos víctimas por estas nuevas personas que unos quieren venir a coger la plaza que dejó las FARC y otros se van a volver a armar para defender esa plaza, entonces estamos prácticamente viviendo o se puede vivir un conflicto más intenso que el que teníamos³⁰.

²⁹ Entrevista realizada a Isbelia Montoya, profesora del colegio municipal, el 15 febrero de 2018. Anexo número 6.

³⁰ Entrevista realizada a un ciudadano de Ituango, quien solicitó reserva de su nombre, el 22 de enero de 2018. Anexo 4

La seguridad es el punto más neurálgico en el posconflicto así como es factor fundamental en las características de un Estado moderno. Es claro que sin la seguridad es difícil que los demás componentes de la construcción del Estado se den, máxime cuando se entiende en palabras de Tzifakis (2007) que el posconflicto no es la finalización de todas las formas de violencia, ni mucho menos la resolución de todas las causas que le dieron origen. Entonces, cobra importancia la seguridad, entendida como dinamizador del conflicto social, como condición *sine qua non* para defender el posconflicto y avanzar tanto en desarrollo como en oportunidades.

Toda propuesta de una política de seguridad del Estado colombiano debe basarse en reconstruir la confianza de la población en el aparato estatal de seguridad y en el Estado mismo. Es indispensable la participación ciudadana en articulación con las fuerzas legítimas del Estado. Ambas deben trabajar conjuntamente y con base en una seguridad que se convierte en legítima seguridad ciudadana. Asimismo, es indispensable contar con los agentes armados, los disidentes, los rearmados y los emergentes. Si bien ellos no son parte de la sociedad civil, en tanto ilegales, son dinamizadores del conflicto y factor fundamental para crear una paz sostenible. Así lo resume una líder comunitaria:

Yo creo que todos en general nosotros necesitamos generar confianza en la institucionalidad y que la institucionalidad de verdad haga presencia en los territorios, estamos hablando de acercar el tema de la seguridad, la salud, el tema de educación, el tema del sisbén que para muchas de nuestras veredas es un tema alejado, la presencia de la fuerza militar en las comunidades que garantice que

los campesinos puedan participar en los diferentes procesos que vienen para el Municipio y en general ser pacíficos, confiar unos en los otros³¹.

Ávila y Londoño (2017) proponen que para lograr una política de seguridad en el posconflicto y construir un Estado moderno, se debe recuperar la legitimidad al: “generar una legitimidad que garantice que puede mantener a la población apartada de una nueva ola de violencia” (p. 79).

El Estado colombiano debe definir y enfocar urgentemente una política de seguridad ciudadana, no solo para los territorios en donde se vive el posconflicto sino para todo el país, en consonancia con lo firmado en el *Acuerdo de paz*, que implica reformas estructurales a las fuerzas armadas sin perder su doctrina, con foco en establecer relaciones armónicas con la sociedad civil y recuperar la confianza para que esa misma sociedad civil sea partícipe y artífice de la seguridad.

En tal sentido, las Fuerzas Armadas legítimas del Estado colombiano, como parte integral de la institucionalidad, deben ser artífices de una política social que consolide la paz territorial, garantice la seguridad y propenda por una intervención articulada e integral del Estado en las regiones, muy especialmente en Ituango, en donde es claro que peligra el posconflicto.

Finalmente, debe pensarse una política social de paz que comprometa a toda la institucionalidad, a los grupos de la sociedad civil y que involucre también a los agentes armados; que sea una responsabilidad tripartita sin la cual no sería posible un manejo integral de la seguridad ciudadana en esta región. Pero debe ser una política clara y contundente, porque involucrar a los

³¹ Entrevista realizada a Hilda Oquendo Oliveros, (cargo) de la Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia, el 23 de enero de 2018. Anexo número 2.

agentes armados no significa ignorar o disminuir la necesaria actuación de la justicia para castigar los delitos que corresponda. Sería contraproducente dejar la sensación de que se puede violar la ley, quebrantar la convivencia y atacar la seguridad ciudadana sin que la justicia actúe.

Por ello, en consonancia con una política social de paz y de seguridad ciudadana eficiente que propenda por la convivencia pacífica, se debe atender el conflicto social que genera la justicia o la percepción de que es selectiva e ineficiente.

2.3.2. Justicia en tiempos de paz: de la ilegalidad a la legalidad

En Ituango, según expresa la comunidad en conversaciones informales, se cree que la justicia no es para todos, que no vale la pena creer en ella porque es diferenciada, para mal, en contra de la gente. Esa creencia genera un enorme conflicto social, por cuanto al Estado le costará un gran esfuerzo recuperar la confianza en las instituciones de justicia, lo cual es nodal para abordar el posconflicto y afrontar los conflictos sociales derivados de él.

Según Ariel Ávila y Jorge Eduardo Londoño (2017) la justicia es el estándar que gobierna un conjunto de reglas que posibilitan la consecución pacífica de los planes de vida de individuos que tienen diversas concepciones de la felicidad, de la moralidad, de la religión, de la economía, del arte, de la cultura: “ se busca que esas regulaciones traten a todos como libres e iguales, según criterios de equidad y respeto mutuo” (p. 182). Precisamente esa es la percepción que genera la creencia en una justicia diferenciada, con un alcance que no es para todos y que le ha hecho perder, a buena parte de la sociedad civil, la credibilidad y la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia. Los escándalos de las altas cortes, a las que se les acusa de tráfico de influencias, sobornos y corrupción, permean al Estado local como en el caso de Ituango, aunque

es importante aclarar que no hay ni indicios ni denuncias de corrupción en contra de las autoridades de justicia locales.

Pero en este caso, los males endémicos del Estado central permean al Estado local con la mala imagen. Y ello se complejiza cuando en lo local no se siente que la seguridad sea atendida como debe ser, que los actores armados no son ni perseguidos ni castigados, ello aumenta la percepción de que la justicia no opera para todos en condiciones de equidad e igualdad. En Ituango la justicia no ha operado, por la endémica ausencia del Estado y porque éste no ha establecido, como dicta el ordenamiento jurídico, mecanismos que regulen la conducta de las personas, soportado en el monopolio coercitivo de la fuerza y en metodologías imparciales que ayuden a resolver los conflictos que surgen en la sociedad.

Como se ha dicho a lo largo de esta tesis y que es recurrente en todos los procesos de investigación en esta región, el Estado ha sido precario, ausente y displicente. Con ello ha permitido que la justicia no opere y que los territorios queden a merced de actores armados que establecen los poderes de facto y actúan como señores en el territorio. En Ituango los ciudadanos no han encontrado las condiciones que el Estado les debe ofrecer para consolidarse como sociedad, aparte de la exclusión y la estigmatización. Al parafrasear a Ariel Ávila y a Jorge Eduardo Londoño (2017), en Ituango ha habido una lucha constante entre el estado de naturaleza y el estado de derecho:

En un estado de naturaleza los individuos persiguen sus fines de forma autointeresada y acuden a formas privadas de violencia y coacción para hacer cumplir los pactos que hacen entre si, lo que trae como consecuencia que aquellos que carecen de supremacía o fuerza suficiente quedan a merced de la voluntad de las contrapartes (...) El Estado de derecho permite a los individuos sobreponerse a esta situación, estableciendo mecanismos institucionalizados para la resolución de

conflictos. Este mediación le atribuye un estatus igual a cada ciudadano y rompe con la dominación del poderoso sobre el débil (p. 182).

Como bien lo explica Londoño, el derecho es fundamental para dirimir y gestionar los conflictos sociales, ya que sus principios son la seguridad, la defensa, la legalidad y la imparcialidad, atributos sobre los cuales se debe reconstruir el pilar de la confianza y la credibilidad en la justicia en el país. Es importante ver la justicia como un servicio público esencial, porque ello justifica el ejercicio de la autoridad del Estado (Ávila y Londoño, 2017, p. 183).

En Ituango se debe fortalecer la institucionalidad para robustecer el aparato de justicia local. De acuerdo con el alcalde³², en Ituango hay tres jueces, un fiscal local y uno seccional, que tienen en promedio cerca de 800 casos para resolver. Por otra parte, el municipio tiene un personero y una comisaria de familia para atender un territorio casi más extenso que el departamento de Quindío y 132 veredas con sus tres corregimientos.

La Comisaría de Familia tiene alta rotación y lleva pocos años en el municipio, apenas desde el 2013. Igual pasa en la Personería, organismo alterno de defensa de los derechos del ciudadano que debe actuar como defensor del pueblo en lo local, pero igual se pierde en una inmensidad de conflictos vecinales que le desbordan su capacidad de gestión, tanto por la extensión y complejidad del municipio, como por los pocos recursos económicos, logísticos y tecnológicos con los que cuenta.

³² De acuerdo con el alcalde, el aparato de justicia que tiene el municipio es muy precario para atender los procesos que debe atender y la extensión territorial “Es insuficiente el aparato de justicia para las demandas de la sociedad, no damos abasto” (Entrevista realizada a Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango, el 18 de febrero de 2018). Anexo número 1.

A la justicia local le toca dirimir conjuntamente con los casos de terrorismo, la actuación de los grupos ilegales, los problemas asociados al narcotráfico, la minería ilegal y los conflictos vecinales y de convivencia que se presentan a diario en la localidad, lo que no les permite atender con la suficiente prontitud los hechos que en muchos casos son revictimizantes.

Todo ello conjuga no solo la pérdida de confianza y credibilidad, sino como en una vuelta de tuerca, que la gente extrañe la “justicia” que aplicaba el Frente de las FARC “Uno con la guerrilla sabía que si no cumplía lo que ellos mandaban, lo pelaban, ellos eran implacables”³³. Esta investigación no pretende crear la percepción de que en el municipio de Ituango no se cree ni se respeta a las instituciones encargadas de administrar justicia, sino que por la estructura del Estado colombiano, centralista y excluyente, esos aparatos locales no cuentan con las herramientas y las condiciones necesarias para operar adecuadamente. Por ello les toca asumir en masa procesos que en condiciones normales y debidas, deberían contar con un aparato completo de funcionarios, tecnología y recursos para hacerlo.

El aparato de justicia en Ituango no solo debe robustecerse y modernizarse, sino contar con la participación ciudadana que puede aportar y coadyuvar en la construcción y puesta en marcha de mecanismos no formales de resolución de conflictos. Es importante tener en cuenta los métodos tradicionales de administración mediante los diálogos comunitarios e incluso la justicia indígena³⁴ misma, como posibilidades alternas de acceso a la justicia, cuyo fin último es la resolución de los conflictos.

³³ Entrevista realizada a un ciudadano de Ituango, quien solicitó reserva de su nombre, en enero 22 de 2018. Anexo 4.

³⁴ En Ituango hay un resguardo indígena de la comunidad Embera Katío, con mas de tres mil Ha, en el que habitan cerca de 100 familias y cuenta con un cabildo que ejerce autoridad al interior de la comunidad.

Todo esto es importante para romper el paradigma de que el juez es la única instancia que puede resolver conflictos entre ciudadanos, cuando existen y se han probado mecanismos alternativos que pueden ser más eficientes y sobre todo más oportunos. Ituango, que es una comunidad estigmatizada y señalada a nivel nacional, se muestra como una sociedad abierta, dispuesta a dialogar y a construir.

Por lo que se percibe en los diálogos informales y en las entrevistas con las fuerzas vivas de la población, tales mecanismos pueden ser una vía para proteger o atender el posconflicto, tramitar y gestionar adecuadamente el conflicto social, que genera la percepción de que la justicia es diferenciada y parcial. Una herramienta que permita atender y gestionar adecuadamente los conflictos de convivencia, con participación comunitaria y con sus propios intereses locales.

Con base en lo anterior, Ávila y Londoño (2017) proponen el fortalecimiento y puesta en marcha, donde no los haya y en Ituango no están, de los Sistemas Locales de Justicia (p. 186). Este mecanismo permitiría construir confianza en la ciudadanía, desconcentrar y descongestionar la administración de justicia, fortalecer a las entidades territoriales como mecanismos que tienen en cuenta a las comunidades porque son prioridad y potenciar la oferta de justicia en las regiones más vulnerables y con mayor grado de conflictividad. Este mecanismo, además, atiende las necesidades desde lo local, con participación de los grupos de la sociedad civil y de la institucionalidad.

Ituango tiene varios problemas que la justicia debe superar desde cualquier mecanismo de resolución de conflictos. Dichos dispositivos son tanto preventivos como dialógicos, enfocados en asuntos de convivencia y de construcción de ciudadanía. Pero la justicia debe atender la creciente criminalidad, el narcotráfico que genera hechos tan aberrantes como la promoción del consumo en los menores de edad, las riñas por exceso de alcohol, los delitos sexuales y de género, las drogas que degeneran en hechos de extrema violencia, y en general los hechos penales que son

competencia de la justicia especializada. De esta forma se podrán disminuir esos “sentires” de injusticia que tiene la comunidad ituanguna, al decir de una mujer líder:

Esto digamos que genera muchos más cambios, muchos más como sentires en nuestra sociedad, porque tenemos además de la violencia física, tenemos el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de prostitución infantil, el tema de drogadicción en nuestros jóvenes, entonces no ha evolucionado mucho³⁵.

Por consiguiente, en Ituangó sería idóneo un mecanismo que combine la oferta de justicia desde lo institucional, es decir adoptar un Sistema Local de Justicia atendiendo a que son organismos ya creados por el Gobierno Nacional, y que se conjugue con la participación comunitaria, que aportaría con sus propios mecanismos de resolución de conflictos ciudadanos.

En un municipio complejo, extenso y con carencias, es urgente una medida que permita manejar el conflicto social del acceso a la justicia, para que junto con la permanente percepción de inseguridad, no coadyuven una vuelta a la violencia y por el contrario fortalezca las oportunidades y la inclusión, que es otro conflicto social subyacente en el municipio.

Londoño cierra su texto sobre la justicia en tiempos de paz, con una reflexión que hace un llamado a todos los estamentos tanto locales como nacionales para que se atienda con prontitud el conflicto de acceso a la justicia. Para recuperar la credibilidad y la confianza perdida, como un valioso aporte para la prevención de delitos y el acceso a la justicia en tiempos de posconflicto.

³⁵ Entrevista realizada a Hilda Oquendo Oliveros, (cargo) de la Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia, el 23 de enero de 2018. Anexo número 2.

El llamado se hace especialmente al Estado, pero también hacen falta otras fuerzas vivas que en muchas ocasiones han estado ausentes o que solo ocasionalmente se notan, especialmente la academia y los gremios económicos.

Esta investigación considera fundamental la participación de la academia en la defensa del posconflicto y en el establecimiento de una paz estable y duradera. Las comunidades necesitan sentir que no son objeto de investigación “como conejos de indias”, sino objeto de trabajo para aportar en su desarrollo. Un trabajo conjunto de las universidades, no solamente con oferta académica, sino con procesos de investigación enfocados y pragmáticos, con laboratorios y observatorios sociales que permitan visualizar y construir conjuntamente. Estos son algunos aportes, entre muchos, que la academia le puede hacer a la región; una forma de acercar a las comunidades con la academia. Ariel Ávila y Jorge Eduardo Londoño (2017) lo dicen claramente:

Los retos son inmensos y es responsabilidad del Gobierno, de la academia, de la industria y de la sociedad civil reflexionar armónicamente, y establecer diálogos que garanticen que el valor primordial de la justicia impere en nuestro ordenamiento jurídico y que la coexistencia pacífica y cooperativa con nuestros conciudadanos sea una realidad. Es necesario el diseño de políticas públicas, a través de un ejercicio multidisciplinar y participativo que debe generar espacios abiertos para el debate y la colaboración (p. 189).

Ituango adolece de políticas públicas, aunque en su *Plan de desarrollo* se tienen concebidas cuatro para las Víctimas, la Juventud, de Género y para los Discapacitados. Pero hace falta que sean más que nominadas en el plan y que pasen a la acción, para que las oportunidades y la inclusión sean realidad.

2.3.3. Inclusión social y oportunidades: las brechas que debemos cerrar

La falta de oportunidades es un consenso que comparten las personas, las organizaciones de la sociedad civil y el alcalde cuando se les pregunta por los conflictos sociales del municipio en la actualidad. Eso se conjuga con lo expuesto a lo largo de esta investigación: un Estado ausente y displicente en una zona lejana, compleja y de difícil acceso, donde ni el Estado ni las oportunidades llegan.

En las entrevistas con la comunidad, principalmente, se resalta que les preocupan los jóvenes, porque de no darles oportunidades laborales y educativas, no dudan que serán presas fáciles para los agentes armados que hay en la zona y con ello se puede configurar un retorno a la violencia. Precisamente la falta de oportunidades es el principal conflicto social y ha sido, todo el tiempo, el dinamizador del conflicto armado. La espiral de violencia que ha azotado la región se da por la exclusión y el abandono estatal, porque el Estado ha sido precario, excluyente y renuente a llegar a algunas regiones del país en las que ha permitido que tanto los violentos como las economías ilegales suplan su papel; además, ha sido promotor de exclusiones y generador de brechas entre la sociedad. Estas características demarcan que es un Estado con presencia diferenciada, como lo explica Marco Palacio (2012): “Las instituciones colombianas parecen funcionar adecuadamente dentro de los marcos del Estado de derecho para aquellos grupos sociales integrados al mercado por los derechos de propiedad: exportadores, importadores (legales e ilegales), banqueros; propietarios de bienes, etc.” (p. 26).

Esta actuación displicente del Estado es la promotora de la exclusión y de las brechas que se generan en la sociedad. El premio nobel de economía J Stiglitz (2015) ha disertado bien sobre

esas tesis: las brechas se han generado porque el 1% muy rico de la población mundial tiene el “interés y la estrategia” de mantener aislado y pobre al resto de la humanidad.

Una brecha es una fisura, una grieta que se abre, se profundiza y se ensancha, eso es lo que se ha promovido como una constante en localidades como Ituango, alejado de todo y de todos, presa solo de su violencia y sin oportunidades. Stiglitz (2015) dice que el grado de desigualdad que existe en el mundo no es inevitable ni consecuencia de leyes de la economía, es una “cuestión de políticas y estrategias” (p. 17).

Stiglitz llama la atención sobre problemas fundamentales que deben ser atendidos por el Estado y que vienen al caso para Ituango: la gran brecha que genera la desigualdad, la falta de oportunidades, la mala gestión económica y el papel ausente o displicente del Estado.

Son muchas las brechas abiertas en el territorio. Ituango es el tercer municipio en extensión del departamento y las brechas en relación con otros municipios de su tamaño e importancia se notan: las vías de comunicación son escasas y ello hace que la economía se encierre generando incertidumbre, sobre todo cuando la única vía de acceso al municipio, apenas culminada en 2013, se cierra. Los indicadores de pobreza son altos, el cubrimiento en salud es apenas en la zona urbana y en algunas veredas cercanas, de las 132 que tiene el municipio; el déficit en vivienda³⁶ supera el 70%, la educación si bien está cubierta en buena parte del territorio, solo abarca la básica, con unas pocas opciones de educación superior en la localidad.

³⁶ Ver el *Plan de desarrollo Municipal: Ituango, todos contamos para el cambio en la construcción de paz y reconciliación. 2016-2019.*

Pero esa desigualdad que genera conflicto social, también nace y se ha provocado desde el relacionamiento y la convivencia de las mismas comunidades. Como lo expresa una mujer discapacitada:

Yo pienso que a Ituango le hace falta entender que muchos conflictos que se generan nacen de la envidia porque hay otras personas que triunfan, nacen de la desigualdad o de la falta de comprensión y por esa falta de amor y de empoderamiento de nuestra propia tierra que lamentablemente entonces se vuelve en una pelea de humanos que en vez de luchar por el bienestar de nosotros mismos y de nuestras comunidades entonces terminamos por destruirnos a nosotros mismos incluso con los comentarios que surgen muchas veces sin criterio alguno sólo con el deseo de dañar la imagen de otras personas³⁷.

Otros indicadores importantes muestran que Ituango tiene oportunidades. Por ejemplo, el empleo y la reactivación de la economía, que ha sufrido por los embates del conflicto períodos de estancamiento y hasta parálisis, se han dinamizado con la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango, pero a su vez esto genera preocupación, porque es un empleo temporal, que disminuirá cuando se termine la primera etapa de construcción del proyecto.

A finales de 2010, luego de muchos estudios técnicos, ambientales y sociales para determinar la viabilidad financiera, se comenzó en firme la construcción de la central energética más grande del país. Aunque inicialmente se tenía prevista la generación de 3.400 megavatios, lo

³⁷ Entrevista realizada a Mujer con discapacidad física en Ituango (solicitó reserva de su nombre). 23 de enero de 2018. Anexo número 3.

que hubiera implicado inundar un ícono cultural y social como el Puente de Occidente en Santa Fe de Antioquia, finalmente va a generar 2.400 MW, que suplirán el 17% del mercado energético nacional.

El proyecto está ubicado en un enclave del cañón de río Cauca e implicará, aparte de su imponente infraestructura, un embalse de 79 kilómetros que recorren entre su cola en Santa Fé de Antioquia hasta el cañón donde se ubica la presa, un muro de 225 metros de altura, entre los municipios de Briceño e Ituango. Allí se albergarán, en un edificio equivalente a 20 pisos en el interior de la montaña, las ocho unidades que generarán la energía.

La construcción del proyecto no ha estado exenta de discusiones y debates. Varias organizaciones de la sociedad civil han reclamado que los proyectos hidroeléctricos causan daños irreparables a los ríos y generan impactos ambientales que no se mitigan adecuadamente con los meros planes de manejo ambiental; documento que establece las compensaciones a reconocer y la forma de mitigar y compensar los impactos, ordenado por la autoridad ambiental, antes de conceder la Licencia³⁸. Aun así, el proyecto está avanzando y a marzo de 2018, ya está cercano al 83 % según el cronograma³⁹ de obra.

Las inversiones previstas para la construcción de la obra, son cercanas a los 11,4 billones de pesos. De este valor, un porcentaje importante será entregado a los municipios para proyectos

³⁸ En Colombia, el organismo competente para conceder las licencias a este tipo de proyectos de gran envergadura es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que no ha estado exenta de polémicas por su conformación más política que técnica; un verdadero vacío y una falla administrativa del Estado.

³⁹ Ver: www.epm.co/proyectoituango

de inversión en obras de destinación específica para manejo ambiental de los recursos naturales y otros para proyectos sociales previstos en los planes de desarrollo municipales.

En el caso del municipio de Ituango, como se aprecia en la Tabla 3, las inversiones han sido superiores al presupuesto municipal. A diciembre de 2017, el municipio había recibido de parte del proyecto una cifra cercana a los \$65 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura, salud, educación, vivienda, obras de acueducto y alcantarillado, y la pavimentación de la vía entre el sector El Bombillo y la cabecera municipal, que permitió el acceso al municipio y mejoró las condiciones de movilidad, al reducir la distancia a Medellín de cerca de 10 horas a la mitad.

Tabla 3**Inversiones de Hidroituango en el municipio de Ituango, marzo de 2018**

Proyecto – Descripción	Inversión (COP)
Elaboración de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo para el municipio de Ituango (Actualización de EOT).	\$ 59,049,402
Dinamización de las economías locales, a partir de la adquisición de bienes y servicios en el municipio de Ituango.	\$ 9,825,045,101
Convenio de Cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, para desarrollar el proyecto: “Aunar esfuerzos para apoyar a las comunidades vulnerables y gobiernos locales de las de las áreas de influencia del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”. En el municipio de Ituango, se intervienen siete (7) veredas en las cuales se benefician 190 familias, discriminadas de la siguiente forma: Cortaderal (25), Guacharaqueros (11), la Honda (35), las Agüitas (26), los Galgos (27), Pascuita (50) y Tinajas (16).	\$ 1,409,628,398
Construcción de una cancha sintética de fútbol el municipio de Ituango.	\$ 4,145,086,714
Fortalecimiento institucional: Programas de dotación y capacitación en educación en derechos humanos, ruta integral para familias víctimas del conflicto armado, apoyo al fortalecimiento de comisarías de familia e inspección municipal.	\$ 1,437,695,438
Mitigación de los impactos generados por la presión migratoria en el municipio de Ituango a través de proyectos de intervención social o de infraestructura social y comunitaria.	\$ 1,499,678,106

Construcción, adecuación y mejoramiento de 78 km. de la red vial terciaria, secundaria y de caminos de herradura.	\$ 11,641,000,000
Implementación de proyectos productivos en 69 veredas del municipio de Ituango, donde se beneficiaron 372 familias.	\$ 2,789,200,500
Implementación del programa de seguridad alimentaria – MANA con 390 familias.	\$ 322,250,737
Construcción de 24 viviendas nuevas y el mejoramiento de 49 viviendas que beneficiaron igual número de familias.	\$ 2,307,376,393
Construcción de 100 viviendas – Programa Aldeas en las veredas de Buenavista (3), Cortaderal (5), El Tinto (4), Finlandia (2), La Florida (5), El La Fondita (5), La Honda (12), La Hundida (4), La Pená (16), Las Agüitas Palmichal (5), Las Arañas (8), Los Galgos (3), Palo Blanco (16), Pio Decimo (6), La Georgia (2) y Bajo Ingles (2).	\$ 4,029,606,140
Mejoramientos de cinco (5) centros educativos urbanos y rurales y la construcción de dos (2) centros educativos nuevos, consistentes en construcción y adecuaciones locativas en salones, comedores escolares, espacios para la recreación, sala de profesores entre otros.	\$ 2,196,358,627
Atención Primaria en Salud, Telemedicina y Dotación a nivel municipal.	\$ 578,396,728
Priorización y ejecución de ocho (8) proyectos de Presupuesto Participativo.	\$ 1,056,712,577
Programa Antioquia Iluminada – 2.345 viviendas electrificadas.	\$ 7,977,760,764
Conexión de 1.588 familias a redes de Gas domiciliario en el municipio de Ituango.	\$ 2,539,295,468

Construcción de llegaderos veredales en el marco de la restitución integral de la infraestructura social y comunitaria.	\$ 78,278,285
Mejoramiento de la Institución Educativa – CER Los Galgos del municipio de Ituango.	\$ 271,538,602
Administración de predios y construcción de cercos y amojonamiento de linderos en predios adquiridos para el proyecto hidroeléctrico Ituango, en el municipio de Ituango.	\$ 1,376,290,276
Diseño de la segunda etapa del relleno sanitario en el municipio de Ituango y obras complementarias.	\$ 142,381,153
Sistema de Vigilancia Epidemiológica – SVE.	\$ 588,731,317
Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el área Urbana del municipio de Ituango.	\$ 4,041,648,707
Construcción estufas eficientes y huertos leñeros para 100 familias del municipio de Ituango.	\$ 159,157,700
Mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa y deportiva de las veredas la Hundida y la Florida, del municipio de Ituango.	\$ 736,184,103
Programa Aldeas - Construcción de infraestructura comunitaria – Salón comunal El Cedral Municipio de Ituango.	\$ 48,500,000
Total inversión de EPM en el Municipio:	\$ 61,256,851,236

Fuente: (EPM, 2016).

Entre los proyectos establecidos para 2018, se tiene prevista la carretera hacia la vereda El Aro, que se convertiría en una de las principales inversiones. Este territorio fue golpeado por una masacre en 1997, que implicó una condena al Estado colombiano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La polémica que generan estas inversiones, se da porque los proyectos fueron concertados con las Administración Municipal que culminó su período en 2015, lo que implica que la actual debe gestionar la finalización de los proyectos acordados, pero que no necesariamente hacen parte de sus planes de inversión. Aún así, las inversiones son resaltadas como un aspecto positivo para el municipio que además, una vez comience la operación de la central, recibirá impuestos específicos como las transferencias por la venta de la energía de Hidroituango.

Según el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, por cada kilovatio que el proyecto venda en el sistema de interconexión nacional, a Ituango y a los demás municipios del área de influencia les corresponde un porcentaje de transferencias para invertirlo en proyectos ambientales de protección de cuencas y de recursos naturales, un aspecto muy importante porque el conflicto socio ambiental se perfila como una gran problemática para Ituango, por la falta de recursos para gestionar adecuadamente sus recursos naturales

Aparte de la polémica por lo que algunas organizaciones consideran un manejo inadecuado de los impactos ambientales, el problema de orden público ha estado en algunas ocasiones asociado al proyecto. Esa percepción puede deberse a que el Estado desplegó una gran cantidad de fuerza pública para la protección de la obra. Desde hace varias décadas el Ejército Nacional tiene una fuerza especial destinada al cuidado de proyectos y obras de infraestructura para responder a los atentados terroristas que hacían los grupos guerrilleros, muy especialmente el ELN que lo sigue haciendo y ocasionalmente las FARC, contra la estructura energética del país. El reclamo de las

organizaciones es que la excesiva militarización pone en riesgo a las comunidades porque atrae la atención de los grupos armados al obligarlos a replegarse.

En general, la comunidad destaca al proyecto como una de las buenas oportunidades que tiene el municipio y la región como tal. No solo las inversiones sino la dinamización de la economía regional son factores importantes que pueden contribuir a cerrar las brechas y a ofrecer oportunidades. La compra de bienes y servicios, así como la contratación social que el proyecto hace con las organizaciones comunitarias, son oportunidades de inclusión social.

A lo largo de la construcción, el proyecto ha generado más de once mil empleos directos en la región y en el país. En el caso de Ituango, según se muestra en la Tabla 4, la cifra de empleos implica no solo que se atendió la demanda de empleo del municipio, sino que puede implicar peligrosamente que el campo se vea abandonado e incluso que haya descomposición de los núcleos familiares, como lo expone la Comisaria de Familia: “Al tenerse que desplazar los miembros de la familia para el empleo que es una forma positiva, pues generó una dinámica económica, hay un abandono de estos niños y adolescentes, lo que genera que tengan problemas de comportamiento”⁴⁰.

⁴⁰ Entrevista realizada a Paula Andrea Gutiérrez, Comisaria de Familia de Ituango, el 23 de enero de 2018. Anexo número 7.

Tabla 4**Inversiones de Hidroituango que dinamizan la economía regional y el empleo⁴¹**

Bienes y servicios por grupo de actividad económica Ituango

Ferretería, materiales de construcción, aseo y otros bys.	\$ 3.965.125.679
Alimentación.	\$ 3.624.990.589
Alimentación y hospedaje.	\$ 407.366.944
Alojamiento y/o arrendamiento.	\$ 230.752.763
Papelerías y computación.	\$ 5.338.650
Servicios públicos.	\$ 5.740.264
Combustible y mantenimiento de vehiculos.	\$ 83.639.552
Transporte mular.	\$ 84.740.383
Transporte material, personal y fluvial.	\$ 82.091.953
Reconocimiento a población restituida.	\$ 16.348.000
Servicios médicos/medicamento.	\$ 170.606.167
Pago jornales.	\$ 5.587.500
Asociaciones.	\$ 1.143.411.062
Total:	\$ 9.825.739.506

Fuente: (EPM, 2016).

⁴¹ En marzo de 2018 había 620 personas, habitantes de Ituango, que estaban laborando en el proyecto, según los datos de EPM. Representa un alto porcentaje de empleabilidad para un municipio de pocos habitantes en zona urbana, como se nota en el cuadro de población.

A pesar de que es un aspecto positivo que reconocen los grupos sociales del municipio, el empleo es un factor de riesgo del conflicto social. A finales de 2018 culminaría la primera parte de la construcción del proyecto y las cifras de empleo bajarán a una cifra ínfima porque es previsible que ya en etapa de operación la central no requerirá abundante mano de obra. Ello puede implicar no solo que se regrese a cifras de alto desempleo, sino que la gente que se acostumbra a salarios y prestaciones sociales con un empleador como el proyecto, ya no quiere regresar a las labores del campo donde no tienen las mismas garantías ni oportunidades para sacar sus productos. Una situación como esta, que se prevé en el corto tiempo, debe ser abordada con urgencia por parte del Estado e incluso por el mismo proyecto para que la intervención y el manejo de los impactos sea verdaderamente integral.

También es importante mirar otras opciones de oportunidades para Ituango. Que el Estado cumpla lo previsto en el *Acuerdo de paz* en términos de establecer proyectos productivos; ayudar en la apertura y el mantenimiento de vías que permitan la comunicación del municipio con la región; verdaderas cadenas de comercialización tanto de los productos como de su agricultura; y finalmente que se hagan las inversiones previstas para establecer las políticas públicas definidas en el plan de desarrollo.

En el *Plan de desarrollo municipal* se tienen previstas varias políticas públicas⁴² orientadas para atender principalmente a la población joven, a la equidad de género, a los discapacitados y a las víctimas. Pero son planes que aún tienen poco avance y apenas están esbozados, porque excepto algunas oportunidades laborales y proyectos para los discapacitados, aún no se evidencia que sean políticas públicas concretas, que sean conocidas, introyectadas y disfrutadas por todos en el

⁴² Ver el *Plan Municipal de Desarrollo: Ituango, todos contamos para el cambio. 2016-2019.*

municipio. De hecho, solo el alcalde hace mención de ellas, todos los demás entrevistados no conocen que en el municipio se tengan tales políticas públicas.

Ituango requiere atención y presencia integral de la institucionalidad. Las fuerzas vivas del municipio hacen un llamado a las universidades para que lleguen con ofertas más allá de la educativa. Que la academia se acerque a la comunidad es factor valioso para determinar el poder del conflicto social en la construcción y transformación de la sociedad:

Estamos a la espera de que las universidades y los entes institucionales que no han venido a nuestro Municipio se acerquen, que vengan y conozcan de verdad la problemática, pero no tanto la problemática, sino la gente que tenemos en nuestro Municipio, que somos sobrevivientes de uno de los conflictos que vivimos y que estamos siempre prestos a buscar soluciones y a continuar adelante⁴³.

Inclusión y oportunidades son los principales conflictos sociales que requiere dinamizar Ituango. Luis Jorge Garay, en *Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social*, le da la preponderancia de requisito indispensable para transformar el país y conducirlo a un Estado moderno, con un desarrollo productivo que genere empleo socialmente eficiente, mejore en la equidad, permita el acceso a las oportunidades y apoveche responsablemente los recursos naturales.

⁴³ Entrevista realizada a Hilda Oquendo Oliveros, de la Red de Mujeres Unidas del Norte de Antioquia, el 23 de enero de 2018. Anexo número 2.

2.3.4. Recursos naturales: un conflicto socio ambiental en potencia

Ituango está ubicado en un corredor ecológico y biodiverso rico en recursos naturales. Es una ironía que sea un corredor natural que se conecta con otras regiones biodiversas como el Urabá y el Chocó, porque con ambas comparten la exclusión, el encerramiento, el abandono y ahora la explotación exacerbada sus recursos. Es una región del noreste de Colombia que ha sido utilizada por los narcotraficantes y los explotadores de la minería ilegal como corredor de sus economías ilegales.

Gran parte de su territorio se ubica en el Parque Nacional Paramillo⁴⁴, un ecosistema protegido por el Estado como una reserva ecológica, aunque realmente solo funciona en el papel y no en la realidad. El Paramillo es un parque natural de bosque seco tropical, bosque húmedo, selva húmeda tropical, bosque premontano, bosque sub-andino, humedales, ríos, quebradas y un relicto de páramo en su base. Si bien figura como protegido por el Estado, la verdad es que no se ha logrado evitar que los agentes armados lo utilicen como retaguardia de sus economías ilegales. La utilización discriminada e indebida de los recursos naturales de la zona, no solo con la economía de la coca sino con la minería ilegal, constituyen un enorme conflicto socio ambiental que puede tener consecuencias de vuelta de tuerca de la violencia.

Ávila y Londoño (2017) denominan conflictos horizontales a las disputas o pugnas entre las comunidades rurales, derivadas de la ausencia institucional o nuevas políticas sociales y

⁴⁴ Ver el *Plan de manejo Parque Nacional Natural Paramillo (2004- 2011)* Recuperado de: <http://>

www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0120

económicas que se den en una región, bien sea por disputas por el acceso a la tierra o por la exploración y explotación de recursos naturales no renovables (p. 74).

En esta dinámica, sobre Ituango se cierne un conflicto socio ambiental que puede adquirir gran dimensión. Ya la construcción misma del proyecto hidroeléctrico genera una discusión y una disputa por lo que algunas organizaciones sociales consideran un uso indebido de los recursos. Pero la exploración de recursos en los alrededores del Parque Paramillo en el marco de la denominada locomotora minero energética del Gobierno Nacional, va a generar conflicto social por la economía extractivista que pone en riesgo los recursos naturales no renovables.

El alcalde municipal es enfático en resaltar que quien controle los recursos naturales controlará el territorio:

Porque este municipio tiene un potencial no sólo energético sino minero, en Ituango tenemos muchos metales, oro, plata, material radiactivo, que hoy por hoy son reservas y quien controle el territorio a futuro, tendrá también el tema de la explotación de estos recursos”⁴⁵.

El conflicto ambiental será abordado con mayor profundidad en el siguiente capítulo, desde la teoría de Derechos que habla de los denominados Desca (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales). Ahora bien, en el marco de lo que se requiere para su adecuada gestión, la participación ciudadana es la manera correcta para hacerlo, junto con una llegada coordinada y articulada del Estado.

⁴⁵ Entrevista realizada a Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango, el 18 de de 2018. Anexo número 1.

Capítulo 3

La transformación del conflicto: un conflicto ambiental es un conflicto social

En este capítulo se plantea el objetivo de analizar y argumentar, desde la teoría política y la teoría de derechos DESCAs (Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), que son los denominados de segunda generación, la transformación del conflicto como una oportunidad de trascender, de acuerdo con lo planteado por Johan Galtung. En el capítulo anterior se analizó la incidencia del conflicto en la institucionalidad, y viceversa, y se describieron los conflictos sociales.

En Colombia los conflictos son diversos y de gran complejidad, las enormes brechas que se han generado con las exclusiones dan cuenta de conflictos sociales difíciles de gestionar. Pero a esos conflictos se suma el conflicto ambiental, derivado de la explotación indebida, exhaustiva e ineficiente de los recursos naturales. Especialmente son notorias las afectaciones a los recursos hídricos, la degradación de las tierras, la contaminación, la usurpación de aguas para el consumo humano, la ineficiente explotación agrícola y la violencia que genera la economía de la coca y la minería ilegal que agudizan los conflictos ambientales. En Ituango, como ya se ha dicho, por la riqueza ambiental que tiene la zona, se prevé un conflicto ambiental horizontal, al decir de Ávila y Londoño (2017), porque ya se presenta una pugna entre las comunidades rurales, derivada de la explotación exacerbada de los recursos naturales.

La aceleración de los procesos de globalización económica, política y social ha incrementado el número de conflictos ambientales al originar presiones sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Por ello, es importante analizar el conflicto ambiental ya no tanto como satisfacción de necesidades sino como la realización de un derecho; son tanto derechos

humanos los derechos civiles y políticos, como lo son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Y esta distinción es importante porque los derechos implican obligaciones al Estado, las necesidades no. Así pues, la participación, uno de los principios fundamentales de los derechos humanos, ha sido uno de los más incumplidos e irrespetados. Por tanto, tal como se trasluce de esta investigación, el enfoque de la participación ciudadana es fundamental y es una responsabilidad estatal, no solo para la adecuada gestión del conflicto sino para la transformación y trascendencia del conflicto tal como lo plantea Galtung (1998).

Mirar el conflicto ambiental como un conflicto social con un enfoque de derechos permitiría, como lo plantean Londoño, Güiza y Muñoz (2012), prevenir la sobre explotación de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente y las violaciones de los derechos humanos, al eliminar las barreras de tipo físico, administrativo, social o tecnológico que pueden restringir la información, la comunicación y la participación de las personas y las comunidades en materia de conflictos ambientales.

Si se promueve y se materializa este enfoque, dicen Londoño *et al.* (2012), se construirá una nueva cultura dentro las instituciones públicas del Estado y se traerá una mayor credibilidad, eficacia y eficiencia en el sector público, al mismo tiempo que se empoderará a la gente y se garantizarán los derechos fundamentales de las comunidades. Todo lo anterior viene a colación porque un conflicto ambiental envuelve lo político, lo social y lo económico.

En esta tesis se ha propuesto que el conflicto ambiental es una forma particular de conflicto social y es importante dilucidar primeramente por qué se le considera así. Al decir de Mariana Walter (2009) hay consenso en cuanto a considerar los conflictos ambientales como un tipo particular de conflicto social, por cuanto son procesos, es decir, no son estáticos y tienen un

desarrollo temporal en un ámbito público. En tanto que un daño al ambiente como el que se produce con el uso y el abuso indiscriminado de los recursos naturales ha sido provocado por el ejercicio de la minería ilegal, la economía de la coca y la proliferación de proyectos de actividades extractivas:

Ahora bien, si no se producen acciones por parte de actores sociales que a su vez generen reacciones en otros actores, no estaremos ante un conflicto ambiental. Un conflicto social lo es cuando adopta estado público e involucra más de un actor. Presupone por lo tanto acciones colectivas, en las que grupos de personas entran en disputa. Un conflicto alude, en síntesis, a una dinámica de oposición, controversia, disputa o protesta de actores (Santandreu y Gudynas como se citó en Walter, 2009, p. 2).

Esta investigación plantea que en Ituango, por su cercanía al parque Natural Paramillo y por la reconfiguración territorial que se está generando producto de la ausencia, la displicencia y la precariedad del Estado, se está configurando un enorme conflicto ambiental. Este hecho puede derivar en mayores violencias a las vividas con el conflicto armado ya concluido, debido a que se potenciaría por agentes armados ilegales que quieren perpetuar la economía de la coca y las economías ilícitas, para convertirse en proto estados de facto que continúan aprovechando la ausencia del Estado y la reconfiguración de sus dominios territoriales.

Mariana Walter (2009) hace una importante distinción entre el conflicto ambiental y el conflicto socioambiental, para determinar la dimensión ambiental de los conflictos. El conflicto ambiental se relaciona con el daño a los recursos naturales, en el que la oposición, es decir, los grupos de la sociedad civil que intervienen en el conflicto son, en la mayoría de los casos, activistas de organizaciones ambientalistas y exógenos al territorio. En el conflicto socioambiental se

involucra a las comunidades y a la sociedad civil de base, que son las directamente impactadas por la operación extractivista o el uso indebido o indiscriminado de los recursos naturales.

Es una distinción importante por cuanto en Ituango se encuentran los dos tipos de conflictos. El proyecto Hidroituango ha tenido la oposición de grupos ambientalistas nacionales e internacionales que ven un daño irreversible al medio ambiente, con lo que se configura un conflicto por la política extractivista del Estado en cuanto al uso de los recursos naturales; esto conlleva a una dimensión que trasciende lo local. Mientras que las economías ilegales con la siembra indiscriminada de un monocultivo como la coca y la producción indiscriminada de minería legal o ilegal, con insuficiente e ineficiente tecnología, acarrea un uso y abuso de los recursos naturales, que impacta directamente a las comunidades y que perjudica a toda la sociedad, no solo la local en tanto el Parque Paramillo es un santuario nacional que debe ser protegido y preservado. Lo anterior significa que no existe conflicto ambiental sin dimensión social (Fontaine como se citó en Walter, 2009).

Parafraseando a Walter, que va más allá y destaca tres aproximaciones diferentes para abordar el conflicto ambiental, éste enfrenta finalmente una discusión tripartita sobre cambio en los valores de la sociedad, la defensa de espacios para la vida y la relación entre la naturaleza y la sociedad. La primera corresponde al post-materialismo y procede de la ciencia política o la sociología política de los países desarrollados, la segunda se gestó en la ecología política y la economía ecológica, mientras que la tercera reúne a varios pensadores que reflexionan sobre los procesos como la expresión de esa relación entre naturaleza y sociedad, que se extiende más allá de la geografía del conflicto (Muradian, Martínez y Correa, 2003).

El creciente interés mundial en torno a la protección del medio ambiente y de los recursos naturales lleva a una conjugación de un conflicto social y redimensiona, en lo local y en lo global,

la lucha y la reivindicación por derechos que ya no son tanto necesidades, en palabras de Walter. Una vez se ha visibilizado la lucha por las necesidades básicas (como techo, comida y sustento), comienzan a valorarse otras dimensiones no materiales como el ambiente y su relación con la calidad de vida.

Y es en ese contexto en el que surgen los movimientos verdes, los nuevos movimientos sociales que se caracterizan por el pluralismo de valores e ideas, una orientación pragmática y la propuesta de reformas que amplíen la participación en las decisiones de interés colectivos (Melucci como se citó en Walter, 2009). Acá cobra importancia, de nuevo, la participación ciudadana como eje de lo que deben decidir los grupos de la sociedad civil en relación con el conflicto socio ambiental.

Ahora bien, en Ituango se presenta un conflicto social ambiental porque los grupos sociales de la sociedad civil están siendo sometidos por los agentes armados que quieren establecer sus economías ilegales en perjuicio del ambiente y de los recursos naturales, al aprovechar la anuencia implícita del Estado, por su ausencia, precariedad y displicencia. Al decir de Dixon (1991) puede ser un “conflicto inducido por el ambiente”, en otras palabras, por la degradación ambiental y la escasez de recursos que se da porque desde el centro se presiona a la periferia para hacer uso de los recursos naturales: “Los conflictos ambientales se manifiestan como políticos, sociales, económicos, étnicos, religiosos o conflictos territoriales, o como conflictos en torno de recursos o intereses nacionales. Son conflictos tradicionales inducidos por una degradación del ambiente” (Homer-Dixon, 1991, p. 9).

Son varios los conflictos sociales que subyacen en Ituango pero que pueden transformarse en oportunidades para manejar adecuadamente el posconflicto que se vive: la seguridad que genera zozobra en la región, la justicia que no se siente equitativa, la falta de oportunidades y de inclusión

social y el conflicto ambiental por el uso irracional de los recursos naturales al que quieren llevar los agentes ilegales para establecer una economía de la coca y de la minería extractivista.

Y un conflicto socio ambiental inducido es el que quieren imponer los agentes ilegales para hacer uso de las riquezas naturales del Parque Paramillo y de la región, y establecer el monocultivo de la coca para prevalecer su economía ilegal así como el ejercicio arbitrario de la minería ilegal, con lo cual se conjugaría no solo una violación al derecho a un ambiente sano sino a hacer uso racional, eficiente y respetuoso de los recursos naturales abundantes en la zona.

Ante ello los grupos sociales de la sociedad civil se encuentran inermes, porque como lo manifiesta Adarve (2016), la sociedad civil no encuentra una institucionalidad que le de garantías y respaldo, sino que enfrenta también los embates de un conflicto que está reviviendo y en el que intervienen agentes armados de todo tipo, que no sólo buscan el control territorial por las potencialidades geoestratégicas de la zona, sino que, frente a una institucionalidad y una sociedad civil debilitadas “han copado los escenarios sociales e institucionales, han generado víctimas y violan los derechos humanos, situación que supera la capacidad institucional para responder efectivamente a las demandas de servicios de la población afectada” (2016:146).

Todo ello conjuga la posibilidad de que se incentive y se promueva la participación desde lo establecido en la teoría de derechos Desca (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), para que el conflicto social, en esta etapa de posconflicto, al decir de Galtung (1998) pase de la Reconstrucción a la Reconciliación y a la Resolución, y sea luego transformado y trascendido; una transformación que será la forma ideal de afrontar el posconflicto como lo requiere la región y así poder convertirse en un polo de desarrollo o por lo menos en ofrecimiento de oportunidades para la gente, una llegada efectiva del Estado, con lo cual se tramitaría el

principal conflicto social que es la falta de oportunidades y de inclusión y se gestione adecuadamente el conflicto socio ambiental.

3.1. La teoría de los derechos Desca: los derechos de (nos) otros

La teoría de derechos establecida en la Declaración universal de los derechos humanos establece una clara distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Tal como lo determina Sandoval (2007), existe un Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y un Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC⁴⁶).

Esta tesis no pretende abocar a un tratado sobre los derechos humanos, porque no es el foco, pero si propone que el tema del conflicto social en Ituango sea abordado desde la teoría de derechos, especialmente los económicos, sociales y culturales, aunado al conflicto socioambiental, dado que con ello se puede reconfigurar una mejor actuación del Estado en tanto tiene deberes de obligatorio cumplimiento como garante del respeto, promoción y garantía de derechos de los ciudadanos de la región, que vienen vulnerados por años con la anuencia implícita de un Estado displicente y precario. Por ello es importante entender un poco la teoría de derechos DESCA para abordar el conflicto social en Ituango.

⁴⁶ Si bien el derecho internacional de los derechos humanos hace referencia a los derechos económicos, sociales y culturales o “DESC” y no a los “DESCA”, ante un modelo de desarrollo económico global que genera injusticia social y depredación del medio ambiente, diversas organizaciones de la sociedad civil principalmente en Latinoamérica insistimos en llamarlos “DESCA”, desde hace algunos años, en visibilizar los derechos ambientales implícitos en varios instrumentos internacionales y regionales. Colombia tiene un representante en el comité PIDESC, reconfirmado en el mes de abril de 2018.

Para hacer más clara la distinción entre los derechos civiles y políticos de los económicos, sociales, culturales y ambientales, y la manera como se relacionan con el conflicto social en Ituango, es importante comprender lo que Areli Sandoval (2007) llama “vida sin temor y vida sin miseria” (p. 8).

Como lo dice Sandoval, los derechos humanos son interdependientes y la violación de uno incide en la violación de otros derechos; los derechos civiles y políticos están más directamente relacionados con condiciones fundamentales para poder gozar de una vida libre de temor, es decir, sin miedo a sufrir amenazas, abusos, injusticias. Esos derechos son, entre otros, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de expresión, el derecho a no ser detenido arbitrariamente ni sujeto a tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, el derecho a la propiedad, que son justamente los derechos que han sido violentados durante años con el largo conflicto armado que ha sufrido Ituango y la región.

Por otra parte los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), son los que posibilitan un nivel de vida adecuado, es decir, como dice Areli Sandoval (2007) “están más estrechamente vinculados a condiciones para poder *vivir libres de miseria*, sin necesidades básicas insatisfechas que inciden en el deterioro de la calidad de vida” (p. 9).

Entre los DESCAs se considera el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la protección y asistencia a la familia, el derecho a la seguridad social, los derechos culturales, el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, el derecho de sindicalismo, el derecho a un

medio ambiente sano, entre otros. Es decir, están enfocados en garantizar una igualdad no solamente formal, por eso cobran importancia en el abordaje de los conflictos sociales.

En la Declaración de principios del PIDESC⁴⁷ se establece, en el principio 25, que la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son interdependientes e inseparables, y varios estudiosos del tema subrayan la importancia de reconocer el derecho a un medio ambiente sano o adecuado como un “núcleo de derechos” y definiéndolo como “una potestad que tenemos todos para exigir un cambio en las formas de tenencia, propiedad, aprovechamiento, destino, producción de los recursos naturales” (Sandoval, 2007, p. 90).

Es decir que el conflicto socio ambiental resulta determinante de los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto es un derecho el disfrute de un ambiente sano, no sobre explotado, ni insostenible. Pero la sostenibilidad va más allá de la preservación ambiental, y que algunos autores ubican como otro de sus ingredientes esenciales a la participación ciudadana, como lo plantea Areli Sandoval (2007):

El desarrollo sustentable debe movilizar los recursos para la satisfacción de las necesidades esenciales de la población como forma de elevar la calidad de vida de esta generación y de las futuras, a través de la máxima utilización de los recursos naturales a largo plazo, con tecnologías adecuadas para estos fines y con la activa participación de la población en las decisiones fundamentales del desarrollo.” Vivir sustentablemente significa “entender y aceptar las consecuencias de ser parte de una gran comunidad de vida y volverse más conscientes de los efectos

⁴⁷ Ver la declaración de principios del PIDESC en:
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>

que nuestras acciones tienen en generaciones futuras y en las otras especies con las que compartimos este planeta (p. 91).

En consonancia con lo anterior, en Ituango se han configurado conflictos sociales que pueden ser abordados, tramitados y gestionados desde la teoría de derechos, especialmente los que define el Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (PIDESC). Aunado a ello, la protección de los recursos naturales y la riqueza biodiversa que tienen el Parque natural Paramillo debe gozar de especial protección y procurar que su riqueza se preserve.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió un fallo ejemplarizante⁴⁸, que va en la vía de la protección de los sistemas biodiversos, la protección frente al cambio climático y la preservación de los recursos naturales, en el que determinó que la Amazonia y el río Atrato tiene los mismos derechos que una persona.

La Corte es enfática en señalar que el Estado colombiano no está haciendo lo suficiente para proteger las zonas de la deforestación y los efectos del cambio climático, con lo que se puede configurar, en un ejercicio de repetición de la sentencia, que al Parque natural Paramillo se le considere igual, y el Estado se vea obligado a actuar con mayor contundencia para frenar el santuario de economías ilícitas que los agentes armados ilegales quieren establecer allí, en perjuicio de las acciones de la sociedad civil en su defensa y su preservación.

⁴⁸ Ver: El Espectador. (5 de abril de 2018). La Amazonia tienen los mismos derechos que una persona. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-amazonia-colombiana-tiene-los-mismos-derechos-que-una-persona-articulo-748340>. Y El Espectador. (6 de abril de 2018). Detalles de la sentencia de la Corte Suprema que le dio derechos a la Amazonia. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/detalles-de-la-sentencia-de-la-corte-suprema-que-le-dio-derechos-la-amazonia-colombiana-articulo-748441>

De no controlar las economías ilegales que promueven los agentes armados y que están reviviendo los conflictos violentos por una reconfiguración territorial, el posconflicto daría vuelta a una violencia inusitada, por cuanto los intereses económicos generan más violencias que los objetivos políticos que en su momento tuvo el Frente 18 como proto estado en la zona, lo que agravaría el conflicto con hondas repercusiones sobre la sociedad civil.

Es necesario que el Estado llegue articulado no solo con la presencia militar y sus fuerzas legítimas, aunque es claro que ella solo es parte, sino con políticas públicas bien definidas que cuenten con el aval y la participación de las comunidades, en tanto serán las que gocen de ellas.

Por ello esta investigación propone que se aborde el posconflicto en Ituango y los conflictos sociales como tal, como un cuerpo de derechos establecidos en los DESCAs, atendiendo principalmente el conflicto de la exclusión social y la falta de oportunidades como una manera de atender lo económico, lo social y lo cultural, y al conflicto ambiental, en consonancia con el espíritu de la sentencia de la Corte Suprema como el conflicto dinamizador que le dará un vuelco positivo y de trascendencia al conflicto, en la vía en que lo plantea Galtung (1998).

3.2. La transformación del conflicto social: de la resolución a la trascendencia

Johan Galtung es considerado uno de los principales teóricos de la paz, pero los estudiosos sobre él coinciden en que detrás de todo el corpus de su obra que es la teoría y conceptualización sobre los conflictos, en realidad hay una clave para la teoría de la paz, para entender la violencia y para el desarrollo (Calderón, 2009).

Galtung como se citó en Percy Calderón (2009) explica que el conflicto es la *force motrice* que contribuye a generar verdaderos cambios en provecho del hombre, pero en otros casos,

trascendió y se convirtió en violencia, para conducir a la deshumanización absoluta. Por eso llamó al conflicto, el gran creador y destructor (Calderón, 2009, p. 61; Galtung, 1998, p. 18).

En relación con los conflictos sociales y el posconflicto en Ituango, parecen proverbiales las palabras de Galtung sobre lo que hoy sucede y que más parece una premonición sobre lo que la paz significa en la región:

La palabra paz la utilizan tanto los ingenuos que confunden la ausencia de violencia directa con la paz y no comprenden que el trabajo de hacer y construir la paz está a punto de comenzar como los menos ingenuos que saben eso y no quieren que ese trabajo empiece. Así la palabra paz se convierte en un muy eficaz instrumento de bloqueo de la paz. Nuestro ánimo es contribuir al esfuerzo mundial de desbloquear ese proceso hacia la paz más allá del alto el fuego, de forma que el después de la violencia, no se convierta tan fácilmente en el antes de la violencia (Galtung, 1998, p. 13).

Según Calderón (2009), Galtung plantea para el posconflicto tres etapas o 3R: Reconstrucción, Reconciliación y Resolución, para luego trascender (*transcend*) o transformar pacíficamente el conflicto mediante la creatividad, la empatía y la no violencia.

Esta investigación no propone específicamente una metodología para abordar el posconflicto en Ituango, porque no es su objeto. Como lo expresa la Fundación Paz y Reconciliación, este lugar es uno de los espacios donde más peligra el acuerdo a un año de firmado. La evidencia lo comprueba porque se están presentando todos los pronósticos previstos por la desatención y la falta de compromiso del Estado para hacer efectivo el acuerdo. En concordancia con ello es importante analizar la teoría de conflictos de Galtung y visibilizar sus propuestas como una forma de posible abordaje por parte de los grupos de la sociedad civil empoderados del proceso, tal como se avizora en Ituango.

Galtung plantea que la complejidad de los problemas, los peligros y oportunidades que emergen de los conflictos y de la violencia, quedan reducidos a tres ingredientes: Reconstrucción (tras la violencia), Reconciliación (de las partes) y principalmente la Resolución del conflicto subyacente; que son en realidad momentos interdependientes pero siempre con la base de la resolución, “el momento de empezar el trabajo de la paz es siempre, el momento de acabar es nunca” (Galtung, 1998, p. 79). En Ituango puede ser útil plantear, por parte del Estado y de la sociedad civil un ejercicio de las 3R como lo plantea Galtung, para salvar el posconflicto que pueda dar camino al surgimiento del verdadero conflicto social, que permita que sea transformador y que se pueda trascender; superar la etapa de la violencia para llegar al desarrollo, que es en realidad una connotación del conflicto social para que el conflicto no se quede solo en violencia. Galtung (1998) lo dice claramente:

El enfoque en Conflict Transformation By Peaceful Means (Transformación de conflictos por medios pacíficos) era cómo transformar ese conflicto de raíz de forma que las partes implicadas pudieran hacerle frente, siendo la tesis que es el fracaso en la transformación del conflicto lo que lleva a la violencia. Pero también había otra tesis, que el conflicto moviliza una reserva de energía que puede ser utilizada para fines constructivos, no sólo destructivos. En otras palabras, la violencia en general, y la guerra en particular, no es sólo un monumento al fracaso de la transformación del conflicto para evitar la violencia, sino también al fracaso de utilizar la energía del conflicto para propósitos más constructivos (p. 14).

El método *trascend* al que apunta Galtung, busca que el proceso conflictual pueda ser beneficioso para las partes. Como lo explica Calderón, si usamos medios positivos y oportunos

(empatía, creatividad y no violencia) para la transformación de un conflicto, entonces el fin será igualmente, o al menos potencialmente, positivo y constructivo:

Entendemos aquí por el concepto religioso de trascendencia al hecho de ir más allá de algún límite. La trascendencia y la transformación giran también en torno a los tres conceptos Reconstrucción, Reconciliación, Resolución presentados precedentemente, pero fundamentalmente en la Resolución que no significará construir algo nuevo, sino como una posibilidad de hacer brotar las habilidades y capacidades ya presentes en los actores y que a veces son olvidados en el fragor del conflicto. Este proceso se puede dar cuando las partes deciden salir de los límites estrechos del conflicto y, mirando más alto, se ponen unas metas comunes más elevadas (Calderón, 2009, p. 62).

Galtung le concede suma importancia, además de a los estudios para la paz, a los estudios para el desarrollo. Este último se proyecta más allá de las carencias humanas básicas, en la búsqueda de propuestas y estrategias para desarrollar y potenciar esas necesidades. En otras palabras, transformar el conflicto en oportunidades, tal como se ha dicho a lo largo de esta investigación que es la verdadera razón del conflicto social. Y también le apunta a un modelo de desarrollo que debe estar orientado a la erradicación del sufrimiento humano (satisfacción de las necesidades humanas) y hacia la naturaleza (equilibrio entre el hombre y la naturaleza) (Calderón, 2009, p. 76).

Bien dice Galtung que bastará una idea creativa basada en la empatía y que pueda ser llevada a cabo de un modo no violento, para trascender el conflicto y para poner todo el mecanismo de transformación en marcha. En este sentido la participación ciudadana, es decir, los grupos de la sociedad civil en Ituango, tienen oportunidades de hacer avanzar el conflicto social para que sea verdadera transformación y trascienda a instancias de desarrollo.

Le corresponde al Estado no solo hacer presencia eficaz y oportuna, sino con la autoridad y el peso de la justicia, de las oportunidades y de la inclusión, propiciar espacios de participación para que el panorama del conflicto social en la región cambie y se transforme. Como se ha dicho a lo largo de esta investigación y lo han resaltado las investigaciones precedentes, el Estado colombiano es el gran ausente en la región y a Ituango solo ha llegado en la figura de la bota militar, la exclusión y la estigmatización.

Ituango ha sido Reconquistado y Recuperado (Valencia, 2012; Adarve, 2016), pero nunca ha sido consolidado. Tampoco el conflicto ha sido transformado ni trascendido, como es el deber ser y es lo que claman las organizaciones de la sociedad civil en la zona. A la ausencia del Estado se suma la de otros cuerpos de la sociedad civil como la academia y los organismos financieros, culturales, gremiales que no han estado presentes para investigar a profundidad el conflicto y ser parte de la solución o para brindar ayudas y soportes económicos que permitan trascender el conflicto armado.

El coletazo de violencia que está viviendo Ituango en estos momentos, es producto de la reconfiguración territorial que quieren imponer los agentes armados para establecer sus economías ilegales. Constituyen una oportunidad para que el Estado y todo el corpus de organizaciones de la sociedad civil intervengan visibilizando el conflicto y realizando aportes para que se transforme. Todas las investigaciones precedentes habían advertido que tal coletazo de violencia sucedería si el Estado no cumplía su papel, no solo en lo establecido en los acuerdos de paz con las FARC en La Habana, sino en el papel que le corresponde como autoridad en la zona.

Los investigadores Catalina Valencia y Cristian Adarve, que se enfocaron ampliamente en el conflicto armado, advirtieron que la principal condición para el posconflicto no solo es desmovilizar a los grupos armados, sino que el Estado llegue con las instituciones sociales y

públicas que requiere la región, que ejerza soberanía como le corresponde y no deje ese papel a los agentes armados ilegales.

La lejanía de Ituango la mantiene desconectada y en la periferia. Los problemas tales como su enorme extensión, la falta de recursos por la poca organización administrativa, el precario apoyo del Estado y su enorme riqueza natural, la convierten en un explosivo que requiere atención y estrategias claras y definidas. Ituango no puede quedar a merced de agentes armados que subviertan el papel del Estado para convertirse en proto estados.

Es el momento de que el Estado tome su papel y asuma el rol que le corresponde en la seguridad de los ciudadanos, para que la percepción de que están a merced de los agentes armados ilegales no les cree el imaginario de la desprotección y se violen con ello derechos humanos fundamentales.

En cuanto a los aparatos de justicia, el Estado los debe fortalecer. Al tomar la teoría de Galtung, para trascender se debe hacer gala de la creatividad y de la empatía, para que llegue a todos por igual e incluso cuente con participación ciudadana en la resolución de algunos conflictos que pueden ser atendidos con su sabiduría cultural.

El desarrollo es fuente de oportunidades y de inclusión, por eso, en una región rica en recursos naturales, es una violencia inusitada que la pobreza sea tan extendida. El papel del Estado no solo es llegar, sino explicar su larga ausencia que ha resultado humillante y dolorosa para la gente de la región.

El conflicto ambiental es también una gran oportunidad para hacer un uso eficiente y racional de los recursos naturales. Aprovechar el Parque Paramillo para hacer estudios ambientales que propendan por la extensión de la frontera agrícola es una forma creativa y no violenta de trascender el conflicto. En la región existen variedades agrícolas inexploradas que son beneficiosas

para la economía nacional. Es en uno de estos escenarios, entre tantos otros, en los que se requiere la presencia de la academia para ayudar en los procesos investigativos y científicos que permitan tal ampliación de la frontera agrícola, que constituye riqueza natural de Ituango.

Ituango urge del Estado, de las organizaciones, de la sociedad civil, de la academia, de los gremios, de los medios, para que esta región rica en historia, en cultura y en recursos naturales no quede siempre en manos de agentes violentos. Ituango es territorio colombiano y merece que el conflicto que ha vivido por tantos años se transforme y trascienda a desarrollo tangible y sostenible.

Conclusiones

El Estado ha sido el gran ausente en Ituango y se desborda con el conflicto social. En toda su historia, que es rica en tradiciones y en cultura, el municipio nunca ha tenido una presencia constante y definida del Estado colombiano. En las ocasiones en las que interviene, para reconquistar o recuperar por la vía armada y militar el territorio, ha tenido acciones que victimizan y revictimizan a la población. En Ituango, la presencia estatal ha sido ausente, displicente y deshilvanada, con lo cual configura violaciones de derechos, exclusión y falta de oportunidades. La principal conclusión de esta investigación, que no es nueva, pero sí desconcertante en momentos en que se ha llegado a un Acuerdo de paz, es que, no solo es ausente por displicente, sino porque se verá desbordado por el conflicto social. El Estado, tal como está concebido y estructurado, no será capaz de afrontar, sin cambios enfocados en la participación ciudadana y en la apertura de espacios de diálogo para su propia transformación, los cambios que conlleva el conflicto social que se avecina. Los resultados son evidentes en Ituango.

Ituango ha vivido un conflicto desde su fundación histórica que fue exacerbado por agentes armados y alentado por la ausencia del Estado. Durante los más de 50 años que ha durado el conflicto armado colombiano, Ituango sufrió tres décadas con intensidad y violencia extrema. El Frente 18 de las FARC fue la estructura armada que más dinamizó el conflicto en la región, junto con varios grupos paramilitares, especialmente las AUC, que disputaron a las FARC, desde comienzos del 2000, el control del territorio para el establecimiento de economías ilegales. En esa confrontación hubo violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que dejó muchas víctimas, tantas que casi la totalidad de los habitantes de Ituango figuran en el registro de víctimas, pendientes de reparación y justicia.

El Frente 18 de las FARC actuó como un proto estado, al suplantar con mecanismos de autoridad, seguridad, justicia y tributación las funciones del Estado legítimo. Ello configura no solo el histórico abandono estatal a Ituango, sino su incapacidad para hacer frente a un agente armado que se consolidó en la región como señor de la guerra y dominó el territorio a sus anchas durante todo el período de la violencia. Solo con la reincorporación a la sociedad civil, las FARC dejaron libre el espacio que ahora está siendo copado y cooptado por otros agentes armados ilegales, entre los que se cuenta una gama variada de actores criminales en la zona: disidentes de las FARC tanto del Frente 18 como del 36, que se movieron desde el nordeste de Antioquia para ocupar la zona bioestratégica del Paramillo; guerrilleros del ELN que han llegado a la región a participar en la disputa territorial y los diferentes grupos paramilitares y Bacrim (Clan del Golfo, Los Pachely y ahora un grupo de mexicanos que han llegado bajo la sombra de los Pachely).

El conflicto social en Ituango lo dinamizan tres grupos sociales. En consonancia con la teoría del conflicto social de Ralph Dahrendorf, en Ituango se puede identificar claramente que existen tres grupos sociales que dinamizan el conflicto social: las Instituciones del Estado que con todas sus actuaciones y omisiones es el dinamizador principal; los agentes armados ilegales que se están reconfigurando en la zona y de los que hacen parte disidentes, subversivos y criminales de todas las estructuras armadas que hay la región; y por último, las organizaciones sociales de la sociedad civil sobre quien debería recaer la posibilidad de transformar el conflicto en oportunidades de desarrollo. Por el contrario, como se esperaba, la coerción de los agentes armados ilegales genera zozobra, miedo e inseguridad en la zona, lo que provocaría el fracaso del posconflicto y que se trunquen las oportunidades de paz y desarrollo para el municipio.

El conflicto social es una oportunidad para Ituango. El Estado articulado debe llegar para demostrar que ejerce la autoridad y propicia seguridad a los ciudadanos. Por consiguiente, se debe fortalecer el aparato de la justicia para que sea equitativa para todos, además de potenciar las oportunidades de desarrollo que se pueden generar en una región rica en recursos naturales; justamente aquí el cuerpo de organizaciones de la sociedad civil puede ser partícipe y dinamizador de esas oportunidades. Pero para ello, se requiere que el Estado asuma las responsabilidades que le competen.

Es necesario e importante cuidar el posconflicto y el *Acuerdo de paz*. Esta investigación concluye y propone que de ser necesario se haga un acuerdo de paz territorial que permita analizar los errores cometidos en la implementación para corregirlos y llevar a buen puerto lo logrado. Por supuesto no es una propuesta que se encamina a permitir que los agentes armados se arrojen en ella y consigan estatus de organizaciones políticas. Un *Acuerdo de paz* territorial o por lo menos una evaluación consciente y equilibrada permitirá ver los errores que se cometen en cada territorialidad con el *Acuerdo de paz*, establecer los correctivos y los ajustes que cada región por su particularidad permite. En el caso de Ituango es necesario que se escuche y se haga partícipe a las organizaciones de la sociedad civil que pueden aportar desde su saber comunitario para que no se pierda lo logrado y se ponga en peligro la paz en la región.

La displicencia del Estado genera enorme vulnerabilidad a Ituango para que vuelva la guerra. Los grupos armados que se incorporaron a la sociedad civil dejaron un vacío de poder que está siendo disputado por otros agentes armados ilegales o por disidentes de esa misma organización, que quieren copar nuevamente el territorio para imponer su autoridad y establecer economías ilegales no solo de coca sino de minería ilegal.

Las economías ilegales de la coca y la minería pueden generar una vuelta de tuerca de la violencia. Estos agentes ilegales están cooptando a la fuerza a los campesinos para obligarlos a establecer nuevamente sembrados de coca y así fortalecer ese negocio. Esta situación acarrea graves repercusiones para la seguridad en la zona y para la justicia, lo que incrementa esos dos conflictos sociales. La inseguridad se ha visto creciente en los primeros meses de 2018, con un incremento preocupante de asesinatos indiscriminados y selectivos en la región; con ello también aumenta la percepción de que nuevamente esos agentes armados asumen el papel del Estado al controlar la seguridad y la justicia en la zona.

El conflicto ambiental es una oportunidad para ampliar la frontera agrícola y hacer uso sostenible y responsable de los recursos naturales. La región es una zona rica y biodiversa, los estudios han demostrado que es un territorio agrícola con amplio potencial para establecer una ampliación que aleje los problemas que traen la siembra del monocultivo de la coca y el ejercicio de la minería ilegal y sin control por parte de las autoridades. Los planes de desarrollo del municipio han esbozado propuestas, que poco se han cumplido, en relación con las potencialidades agrícolas y pecuarias de la región. Con ello se conjugaría una oportunidad valiosa para defender el posconflicto y potenciarlo como una oportunidad de desarrollo.

La academia, los gremios y las organizaciones de la sociedad civil deben llegar a la región. Ituango es un municipio extenso, casi una subregión en sí mismo, alejado de los centros de poder y de cultura del Departamento. Por eso requiere que la sociedad civil y la academia lleguen a aportar, a ser guía en su desarrollo. De la academia se espera que ayude a conformar observatorios sociales, que llegue con la ciencia y la investigación para que coadyuve en pasar la página de la violencia y la estigmatización. De los gremios se espera que hagan aportes y generen oportunidades financieras para apalancar el desarrollo.

El conflicto social debe transformarse, debe trascender. Ya son muchos años de historia y estudios del conflicto armado que se ha vivido durante décadas. Es hora de que las organizaciones sociales y el Estado trabajen conjuntamente en la transformación del conflicto en oportunidades de desarrollo, bajo la tutela estatal pero con la amplia participación ciudadana. De tal manera que, al decir de Galtung, el conflicto pueda transformarse para trascender luego de la reconciliación y la resolución, con creatividad, empatía y no violencia, para que broten tanto las habilidades como las capacidades que es lo que quieren los ciudadanos de Ituango.

Anexos

Transcripción de todas las entrevistas que se utilizaron en el contenido de este trabajo de investigación. Cada persona autorizó su uso para esta tesis de maestría en Estudios Políticos en la Universidad Pontificia Bolivariana.

Anexo 1: Hernán Darío Álvarez, alcalde municipal de Ituango

Entrevista realizada el 21 de febrero de 2018

Entrevistador: Alcalde cuénteme de la historia de Ituango.

Alcalde: Ituango es un municipio que históricamente ha pasado todo por allí, por Ituango pasó la cárcel de la colonia de Antadó. Estuvo el conquistador en su época Gaspar de Rodas que estaba comisionado en esta región junto con Andrés Valdivia. Los indígenas Ituanguinos siempre fueron muy rebeldes y muy renuentes a la conquista española, inclusive hubo varios intentos fallidos de la construcción del municipio, primero se intentó en Cenizas con varios intentos fallidos por parte de los españoles, luego en San Juan de Rodas y lo último donde hoy se encuentra nuestro municipio se llamaba Fundungo. Es donde es hoy Pio X. Allí arrancó nuestro municipio con apellidos como el Sucerquia que hoy lo llevo en mi sangre, es un apellido indígena de Ituango, Peque, Sabanalarga, Toledo, Sucerquia es un apellido raro, pero son nuestros orígenes en nuestro municipio. Nuestro patriarca Patricio Sucerquia fue fundador del municipio de Ituango, y otros más que en el momento no recuerdo. También hay el apellido Yotagrí que también es de la descendencia indígena. Nuestros ancestros indígenas eran de la descendencia caribe, más de una descendencia guerrera,

la decía que la gente de Ituango era de una sangre muy caliente, pero esos son nuestros orígenes. En Ituango, la cárcel de Antadó fue parte de nuestra fundación. Ya que estas cárceles nacionales eran para tumbar selvas en los parques nacionales. Hubo una en Gorgona, por ejemplo.

Donde había un parque nacional había una cárcel con el ánimo de tumbar selva y colonizar, hacer ganadería y cultivos agrícolas. Una ley en los años 50, que se dio este proceso de las cárceles agrícolas. Muchas de las personas que salieron de esas cárceles se quedaron para vivir en Ituango.

Otro de nuestros orígenes como municipio, las violencias siempre hacen que las familias emigren de un lado a otro. Ituango en la violencia bipartidista fue un refugio de las familias conservadoras porque ustedes saben que cuando se dio la violencia bipartidista, tanto liberales como conservadores, a las familias les tocó huir hacia las ciudades o buscar refugio en lugares seguros.

Hablando con mis colegas de Peque, que fue un municipio de descendencia liberal y siempre hubo contiendas y celos políticos. En una reunión que tuve con el Dr. Bernardo Guerra, inclusive le entregaron una carta amenazante. Después como la política se hace en medio del diálogo, los caciques políticos de Ituango lo hicieron llamar y le pidieron disculpas. Y allí nace una gran amistad entre Luis Emilio Monsalve que fue representante a la cámara el partido conservador y el viejo Guerra, del partido liberal,

En la política antioqueña siempre se escuchó mencionar al doctor Guerra y al doctor Luis Emilio Monsalve. Los dos de una región muy cerca. Una vez hicimos un recorrido el alcalde de Peque y alcaldía de Ituango y de Uramita, que en estos momentos estamos haciendo grandes esfuerzos desde los dos municipios para conectarnos por una red vial Y pasamos por donde nació el Dr. Guerra en el Páramo y el Dr. Monsalve en Santana, puntos equidistantes y son como una sola región.

Del municipio de Ituango también podemos contar que todo el fenómeno de violencia política del país, lo que es el alto San Jorge y el Alto Sinú, fue donde los chinos geopolíticamente estructuraron los primeros grupos guerrilleros del EPL allí se formó el grupo EPL. Que inclusive en Juan Jose Córdoba, entre los límites de Ituango y Córdoba, allí fue una de las zonas veredales donde se dio la negociación con este grupo.

Estos fenómenos de violencia, lo decía Carlos Castaño en su libro, allí convivían todos los ejércitos al margen de la ley y que era tan extenso que podía tener zonas, sin tener choques, ni confrontaciones.

Ituango es un municipio muy extenso, 117 veredas, 8 centros poblados, 2 corregimientos. Tenemos todos los climas desde el cálido, hasta el clima de páramo. Y tenemos la zona del Parque, en esta zona hay un conflicto porque cuando fue declarado parque nacional, había gente que tenía escrituras dentro del parque nacional y hoy hay veredas dentro del parque. Las personas que tienen títulos y esos son conflictos que nunca se resolvieron. En nuestros planes de desarrollo han existido intentos de remediar esto, pero es muy difícil, porque reubicar la gente es muy costoso.

Reubicar la gente que tiene el centro nacional paramillo y que son legítimos dueños, es un conflicto que el estado hoy no ha resuelto.

Encontramos grandes personalidades: monseñor Ricardo Tobón del municipio de Medellín, es el arzobispo de Medellín es de Ituango. Personalidades como Liliana Rendón, Personalidades que han llegado muy alto en la política y en lo académico en altos cargos. Jesús Maria Valle, gestor de los derechos humanos era un tipo muy coherente, lo conocí en el concejo municipal del Municipio, Él nos enseñaba a jugar ajedrez y era una persona con discurso de coherencia, no era politiquero, era un tipo con ética y convencido de sus convicciones. Tanto que sus convicciones lo llevaron a dar la vida por el municipio

Entrevistador: Alcalde usted ¿Cómo percibe hoy a Ituango? ¿Que es Ituango Hoy?

Alcalde: Se mueven muchos actores. Es un referente geopolítico, lo digo así porque por Ituango nos salimos al Bajo Cauca por el Aro, hacia el Urabá, por las salidas que tiene Peque y Dabeiba, fácilmente nos comunicamos por la zona del altiplano por Toledo y San José de la Montaña.

Ituango siempre ha sido un lugar importante para las mismas finanzas nacionales e internacionales. El proyecto Hidroituango es hoy uno de los proyectos más grandes del país. Hidroituango es la generación de energía y la garantía de energía para las grandes ciudades. Vemos que hoy están en crecimiento y son demandantes de la energía eléctrica y no podemos ser dependientes de Ecuador, Venezuela, Panamá.

A Ituango le ha llegado este gran megaproyecto y le llegó también el tema del proceso de Paz. Un tema muy álgido, donde las Farc el frente 18, tenía su hegemonía allí y fue el lugar donde nunca se dejaron vencer. El proceso de paz nos dio tranquilidad durante dos años, el posconflicto es un tema bastante álgido porque se empieza a dividir este grupo.

Cuando era un solo grupo era más fácil el control territorial, y ahora con varios grupos y varios intereses peleándose el municipio. Porque este municipio tiene un potencial no sólo energético sino minero, en Ituango tenemos muchos metales, oro, plata, material radiactivo, que hoy por hoy son reservas y quien controle el territorio a futuro, tendrá también el tema de la explotación de estos recursos.

Aparte de los recursos naturales y el proceso de Paz, que en buena hora llega, tenemos los mismos conflictos sociales que nunca se han resuelto. Con la violencia bipartidista cuando yo era niño, no entendía porque la gente se peleaba y se daban machete. Ese tema nunca se resolvió en la violencia bipartidista, y eso generó odio entre las familias y cada muerto cada herido iba engrosando un problema. Cuando se dio la consolidación de los grupos irregulares en el municipio

se empezó a controlar los enfrentamientos de machete y entre las familias se detuvo el derramamiento de sangre y luego se dio el proceso de desplazamiento con unas normas claras.

Un comandante guerrillero decía si no se acogen a nuestros reglamentos , hay tres buses que salen tres buses. A las diez a.m. a las doce del día y a las siete de la noche. En los años 90 empezando el 2000. En cierto modo, esto se dio porque lo que el estado no alcanzaba a controlar, terminó controlándolo el frente 18. Terminó controlando la relación entre las comunidades.

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos sociales de Ituango hoy?

Alcalde: Falta de oportunidades en algunas familias; conflictos sociales a nivel interno de las familias; conflictos por intereses económicos; políticos que llevan a que determinados sectores choquen y no haya encuentros. Esos conflictos desencadenan en confrontación entre familias.

El autor Aleman Ralf Darendorf-teorico del conflicto social desde el liberalismo argumenta que las sociedades sin conflicto no viven, el conflicto es necesario. Él establece unas categorías. Un pensador colombiano Luis Jorge Garay definió unas categorías

Entrevistador: ¿Como está Ituango de acuerdo a estas categorías?

Alcalde: La seguridad: La seguridad en el municipio, es un tema complejo porque a pesar de que las Farc hicieron una dejación de armas, desde hace 20 días se creó un nuevo grupo que se llama renacer guerrillero, ellos manifiestan que los incumplimientos del gobierno nacional los llevan otra vez a la toma de las armas. Hay gente que quedó inconforme con el proceso de paz y hoy vuelve a un nuevo conflicto armado.

De otro lado están las autodefensas gaitanistas, que en cierto modo cuando estaban las FARC lo único que los movían eran los negocios entre ellos. Entre ellos había conflictos y también había acuerdos en regiones y en negocios. Ahorita, tanto renacer guerrillero como los gaitanistas en el municipio, se están disputando el territorio.

Tenemos un pie de fuerza pública de más de 800 soldados y 160 policías que no dan abasto para seguridad de un municipio más extenso que el departamento del Quindío, son muy pocos hombres, tenemos más territorio que estado. Yo hago parte de las autoridades municipales y el presupuesto de la administración es muy reducido para abarcar todas las necesidades del territorio. Yo quisiera tener intervención en todas las veredas y en todo el territorio, pero presupuestalmente el recurso humano es insuficiente. Toca priorizar acciones donde los problemas se ven reflejando.

Justicia: Tenemos tres jueces: Promiscuo municipal, de Familia, un fiscal local y un fiscal seccional- hablando con el fiscal seccional me dice: alcalde tengo 800 procesos en mis manos y una sola persona y un secretario para atenderlos. Es insuficiente el aparato de justicia, para las demandas de la sociedad, no damos abasto.

Entrevistador: ¿Usted percibe el desarrollo sostenible y los recursos naturales como un posible conflicto social?

Alcalde: Con los recursos naturales tenemos amenazas muy grandes, nuestro parque nacional Paramillo está siendo devorado en algunas zonas por la minería ilegal, son zonas difíciles de acceder a ellas y de controlar. Cuando yo llegué como alcalde, recuerdo que tuve una inducción de seguridad, y en uno de los informes que me daba el coronel de la época me decía que estaban devorando el Paramillo con ganadería extensiva y minería ilegal. Y me decía lo mismo, nuestros recursos humanos no dan abasto para mitigar el impacto. Y me decía que a la Legislación le faltaba avanzar para atender y castigar estos flagelos que van en contra del medio ambiente.

Entrevistador: En el plan de desarrollo se ha propuesto varias políticas públicas.

Alcalde: Discapacidad: en la política pública de discapacidad tengo un proyecto que es el espacio para los discapacitados en el municipio de Ituango, porque la gente los esconde y ellos no tienen la posibilidad de salir a la luz pública a hacer acciones que los lleven a una satisfacción en la

vida diaria. Hemos tratado de avanzar con Itesidia, es una organización que se dedica a hacer traperos y escobas, yo les ayudo con el arriendo y ellos tienen unas máquinas para trabajar, y de esta manera ser parte activa dentro de la misma sociedad.

Juventud: Este año le vamos a trabajar muy duro a la juventud. Estamos viendo un problema, que nuestra juventud se está perdiendo en la drogadicción y el alcoholismo y es por falta de espacios. Le vamos a trabajar en espacios como el Karaoke, también estamos trabajando en el tema deportivo en baloncesto, microfútbol, voleibol, taekwondo son algunas de las acciones que tenemos para que los muchachos se alejen de los vicios y del reclutamiento forzoso de estas estructuras criminales que aún persisten en el municipio.

Género: A veces hay extremos del machismo y del feminismo. Queremos una sociedad equilibrada donde las mujeres no se sientan violentadas y los hombres tampoco. Queremos trabajar en una equidad de género. Tenemos espacios en el municipio como las mujeres ideales y otros espacios organizativos para trabajar temas de familia. En la alcaldía la mayoría de mis colaboradores son mujeres. En esta administración se está dando mucha cabida a las mujeres para que hagan parte del entorno público y tengan posibilidad de servirle a nuestro municipio.

Víctimas: queremos trabajar la Ley 1148, la Ley de víctimas, que es de reconocer a las víctimas y darles un espacio, con el ánimo de no seguir sembrando dolor, sino que vean una oportunidad de superación, porque por nuestro estado benefactor y protector, sobreprotector a veces, la gente sólo reclama los subsidios y hay algunos que se han vuelto perezosos, Hay que trabajarle a esto para que sea una oportunidad para progresar y para salir adelante.

Dentro de mis colaboradoras tengo a una mujer que fue víctima de la violencia, pero con sus dos hijos, esta mujer, tiene un proyecto de vida y quiere sacar sus niños adelante y que tengan un buen futuro. Uno en ella ve un referente para volver a empezar.

Entrevistador: En el registro nacional de víctimas hay una gran cantidad población impactada ¿Cuántos habitantes tiene Ituango? y ¿Cuántos figuran como víctimas?

Alcalde: El municipio cuenta con 25000 habitantes y 17500 fueron víctimas. En realidad, todos fuimos víctimas de esta guerra. En Ituango las personas se caracterizan por ser pasivas (pacífica) no agresivas y amables. A pesar de todo lo que nos ha tocado vivir la gente es muy amable.

Entrevistador: Déficit social si usted considera que los tiene ¿Cuáles son?

Alcalde: Vivienda: es una de las carencias más grandes, hemos trabajado mucho con algunos proyectos y recursos, por ejemplo, con EPM hicimos 100 viviendas de aldeas, con el Banco agrario también, pero no damos abasto, la población rural tiene un gran déficit.

Hemos avanzado en mejoramientos de vivienda con unidades sanitarias familiares. El año pasado emprendimos un proyecto con 40 unidades sanitarias familiares para mejorar este déficit. Todavía falta mucho, pero estamos haciendo todo el esfuerzo. El porcentaje es cercano al 70%.

Educación: Las instituciones educativas se nos están cayendo; tenemos alrededor de 140 instituciones educativas. Una de las carencias es el título, tenemos muchas de las escuelas que son propiedad privada, porque antiguamente las personas donaban el terreno para la escuela, pero nunca hacían escrituras y trámite legal. Hemos hecho esfuerzos muy grandes con empréstitos, hasta el momento llevamos cuatro escuelas nuevas y hemos mejorado otras. Este año hicimos otro empréstito de 2000 millones para hacer más mejoramientos.

Otro aspecto en educación es la lejanía también influye mucho, tenemos niños que tienen que caminar uno o dos horas para llegar a la escuela, y el restaurante escolar es su única comida en el día. Tenemos situaciones de mucha pobreza en sectores rurales

Salud: Como tenemos áreas tropicales y de selva tenemos enfermedades como la Leishmaniasis y la Fiebre Amarilla. En el municipio, por esta violencia, también tenemos

enfermedades como el stress y del corazón. Tenemos un hospital de primer nivel que tiene un déficit de 1200 millones y así ha sobrevivido a esta crisis de la salud. En este momento tenemos 4 puestos de salud en los corregimientos. Por salud pública tenemos los programas de prevención y control de la natalidad.

Entrevistador: En un déficit social de infraestructura y vías de comunicación ¿Cómo se conectan las 132 veredas con el municipio?

Alcalde: Por caminos de herradura en algunos sitios, las comunidades han abierto carreteables o moto rutas, en otros tenemos 280 km de vías terciarias que es complejo para el mantenimiento. Antes con el conflicto era obligado el mantenimiento de los caminos, ahora la gente se aperezó y con el poco recurso que se tiene los invitamos para que hagan convites.

Entrevistador: ¿En Ituango hay problema con la tierra, todos son propietarios o poseedores?

Alcalde: Hay una concentración de tierra bastante grande. El parque nacional es muy extenso. Habían hacendados que tienen mucha tierra y por el conflicto tuvieron que salir y ya no la tienen produciendo. Hay muchas invasiones a esas haciendas. Tenemos gente que hoy no tiene tierra, o si la tienen es muy pequeña para producir. La gran mayoría son poseedores, no tienen título sino sana posesión, es el título que le dan algunos para ponerle los servicios públicos.

Entrevistador: ¿Cuál es el presupuesto de Ituango hoy en el 2018 y de dónde provienen los recursos?

Alcalde: El presupuesto está más o menos en 30.000 millones. Los recursos llegan de los impuestos: predial, industria y comercio, avisos y tableros. Hoy tenemos una bonanza con las obras que está haciendo EPM donde nuestras finanzas son sostenibles, porque en la gran mayoría de los municipios de Colombia de sexta categoría, son municipios insostenibles por la falta de

actualización catastral y del POT. Hay que entender el país nacional del país político. No es viable para ningún mandatario subir los impuestos, entonces políticamente no es viable.

Entrevistador: Luego del acuerdo con las FARC ¿El conflicto armado se terminó, mutó, transformó, qué pasó con él?

Alcalde: El conflicto anda en un proceso de mutación, debido a que en muchas regiones de nuestro municipio hay carencias y limitantes en salud, educación. Es muy atractivo para los jóvenes que les ofrecen un sueldo para hacer cosas indebidas. Hace 20 días estuve en un levantamiento de dos muchachos de una vereda de una familia conocida. Los platos rotos los pagan las familias de nuestro municipio, con todos estos conflictos armados y todos estos intereses, son las personas vulnerables las que terminan pagando los platos rotos.

Entrevistador: ¿Han aparecido otros conflictos? ¿Otras violencias?

Alcalde: Hay otras formas de violencia, ya se ve es el sicariato, ya no son combates entre ejércitos ya son dos o tres personas que acribillan a alguien. Se ha aumentado es el sicariato. Ya el conflicto no se da entre ejércitos. Estos conflictos traen el monopolio de la fuerza, de la justicia. Estos actores hacen reuniones e imponen sus reglamentos.

Entrevistador: ¿Hay gobernanza y gobernabilidad en Ituango o hay dificultades?

Alcalde: La Gobernabilidad en el municipio, está dada. Hay presencia del Estado, aunque no solucionan a cabalidad los fenómenos que se van presentando. Los mecanismos de los ilegales son más rápidos y más efectivos, porque nosotros (las autoridades) llevamos un debido proceso. La gente en busca de premura no busca un debido proceso. Si tenemos todos los estamentos del estado, se trata de llegar a donde más podemos, pero con muchas dificultades. La gobernanza es el nivel de legitimidad del mismo gobierno. Hay cosas que nos unen, entre comunidad y gobierno, por ejemplo, hace 15 días hicimos una manifestación pública todos los estamentos desde las

instituciones educativas, religiones, el comercio, la fuerza pública, todos confluimos en esta marcha para rechazar la muerte de la niña Dayana.

Entrevistador: La institucionalidad: En Ituango uno puede percibir un estado ausente, pero después de este acuerdo con el grupo, ¿Cómo lo calificaría usted?

Alcalde: Tenemos un cúmulo de problemáticas, temas como la propiedad privada que aún no se han podido resolver. El presidente se dio a la tarea de sacar un proceso de paz y sabemos que no es fácil. Para que haya una paz real hay que negociar con todos los actores y pensaría que hay que llegar una nueva constituyente para repensar nuevamente el país.

Entrevistador: ¿Con el estado actual que tenemos, la institucionalidad ya llegó a Ituango, cómo llegó?

Alcalde: Ha llegado de muchas formas: con educación, porque tenemos 140 escuelas rurales y ahí está el estado educando. Con la salud; con las brigadas de salud que se han hecho, con fuerza pública hasta los rincones más inhóspitos del municipio, con programas sociales, con programas desde la nación, con el acuerdo de paz han llegado cinco agencias restitución de tierras, sustitución de cultivos, renovación territorial, reincorporación. Están yendo al territorio y están en contacto con las comunidades. Ahí se muestra el actuar del estado.

Entrevistador: ¿Usted diría que la institucionalidad desborda al conflicto o al contrario?

Alcalde: El conflicto desborda la institucionalidad porque desafortunadamente en la sociedad se ha creado el chip que el estado resuelve todo y no hemos sido capaces de crear soluciones y nos hemos vuelto perezosos. Si el estado no puede intervenir, las comunidades deben plantear soluciones. Es tan desbordante que, al mismo grupo guerrillero, en su momento, le tocaba resolver los problemas de pareja. La gente a veces permite que la violencia entre a resolver sus propios problemas. En vez de ser propositivos. Se han desbordado los conflictos sociales, se ha

incrementado el tema del microtráfico, se ha desbordado el tema de las extorsiones, porque estamos ahora en la anarquía de varios actores armados disputándose el territorio.

Entrevistador: ¿Qué considera que le hace falta a la alcaldía para que funcione como la comunidad lo requiere?

Alcalde: Hace falta recursos humanos, financieros para poder llegar con programas y políticas públicas que ataquen los problemas grandes. Los recursos a veces son escasos, antes no había ni motos ni carros, ahora nos ha tocado conseguir medios de transporte para poder ir a los lugares y atender las emergencias de seguridad que afectan el municipio.

Entrevistador: ¿El alcalde cree que hay confianza en las instituciones?

Alcalde: En algunas zonas del municipio hay confianza, en otras no, porque no alcanzamos a llegar por la lejanía. Yo he sido de los alcaldes que ha salido. Cada que hago visitas me hacen una lista de peticiones y yo les digo que hago una o dos cosas, porque por los recursos no alcanzamos. La gente confía en que la institución le resuelva. La gente confía en la policía. Con el proceso de paz se aumentaron las demandas porque ya la gente entiende que hay instituciones legalmente construidas para resolver esos conflictos. No es a machete, sino que hay instituciones legal y legítimamente constituidas. La comisaría de familia también hemos aumentado el personal para concientizar a las familias que el incesto es un delito. También hay casos de abusos a menores.

La política pública de infancia y adolescencia, los niños son los adultos del mañana, a estas personas hay que garantizarles la educación, bienestar y una vida digna.

Entrevistador: ¿Cómo ve a Ituango en un futuro?

Alcalde: Una tierra pujante y productiva, porque tenemos todas las bondades en nuestro campo y nuestra gente. Ituango tiene todas las bondades para salir adelante. Nuestra gente sobresale donde vaya, con la pujanza y la verraquera paisa. La gente es muy activa en el comercio y las actividades

económicas. Ituango es un municipio muy movido. Yo estoy poniendo mi granito de arena en este cuatrienio. Mi discurso será que la institucionalidad debe prevalecer con los demás actores. La institucionalidad es un contrato entre la sociedad y los que regulamos todo el tema de los conflictos. Desde mi ideología liberal siempre he pensado que la institucionalidad hay que preservarla y defenderla. Las instituciones deben prevalecer.

Anexo 2: Hilda Oquendo Olivares, líder de la Red Mujeres Unidas del Norte de Antioquia

Entrevista realizada el 23 de enero de 2018.

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos sociales del Municipio de Ituango?

Líder: En nuestro Municipio tenemos diferentes conflictos, tenemos el conflicto cultural, el conflicto que nos han creado por la iglesia, el conflicto por los grupos armados que existen en el Municipio, digamos que las mujeres hemos sido marcadas por diferentes tipos de violencias no solamente por la violencia económica, social, política, violencia intrafamiliar, también por la violencia del conflicto que ha dejado a muchas madres solteras, el tema de que nos toca hacernos cargo de nuestras familias a muy temprana edad o el tema de que no tenemos un proyecto de vida propio sino que pensamos que el proyecto de vida es conseguir un esposo y dedicarnos a la familia y a los hijos; entonces tenemos muchos tipos de violencias y de conflictos en nuestro territorio.

Entrevistador: ¿Cómo defines el conflicto social?

Líder: para mí una definición de conflicto social es sencillo, digamos que son las falencias que tenemos en nuestro territorio para ejercer nuestro papel y nuestro rol en la sociedad, nosotros vivimos marcados por lo que dirán, por lo que debemos hacer y no por lo que queremos hacer.

Entrevistador: ¿Cómo cree que ha evolucionado el conflicto en el Municipio luego del acuerdo con el grupo armado FARC, han aparecido otros conflictos, se han exacerbado o han incrementado algunos?

Líder: Yo pienso que no ha habido evoluciones, ha habido digamos cambios, estábamos como en un proceso de receso de la violencia, pero sabíamos los habitantes del Municipio de Ituango que eso no era para siempre y que los grupos armados nunca se fueron del Municipio, empezando porque sabemos y somos conscientes de que la mayoría de los que pertenecían a las FARC en nuestro Municipio no se desmovilizaron, entonces para mí no ha habido evoluciones, son cambios ya además de que tenemos disidentes de las FARC, tenemos otros grupos armados, tenemos bandas criminales y esto digamos que genera muchos más cambios, muchos más como sentires en nuestra sociedad, tenemos además de la violencia física, tenemos el tema de la violencia contra las mujeres, el tema de prostitución infantil, el tema de drogadicción en nuestros jóvenes, entonces no ha evolucionado, solamente ha cambiado el panorama para nosotros.

Entrevistador: ¿Percibe que luego del acuerdo con el grupo armado FARC se ha desbordado la institucionalidad, es decir, que hay muchos conflictos, pero que el estado no aparece para resolverlos? ¿A qué se lo atribuye si es el caso?

Líder: Digamos que la presencia del gobierno en nuestro Municipio ha sido falente en todos los escenarios, el tema de salud, educación, recreación, el tema de fuerza pública en el Municipio tan insuficiente diría yo porque sabemos que estábamos en un proceso de paz y que el ejército debería cubrir los territorios que fueron dejados por este grupo armado no se dio, por eso en este momento tenemos el recrudecimiento de la violencia con nuevos grupos armados, entonces para mí la presencia del gobierno no ha estado presente y la institucionalidad en nuestro Municipio es deficiente, le queda grande toda la problemática existente.

Entrevistador: Desde su percepción, ¿Cuáles de los siguientes grupos u otros son ahora los más vulnerables o que más requieren atención y de qué casos específicamente: Las mujeres, los jóvenes, los niños, los campesinos, los obreros, hombres, familias, grupos religiosos, organizaciones comunitarias, otros, cuáles?

Líder: Sería difícil escoger entre un grupo vulnerable en el Municipio y más o menos en el contexto que estamos viviendo en este momento, para mí yo pienso que todos somos vulnerables, vemos los hechos de las últimas semanas digamos que no se ha podido iniciar los procesos de restitución de cultivos para los campesinos porque no hay garantías, en cuanto a las mujeres pues vemos que nuestros proyectos de vida van a quedar aplazados por el tema del conflicto armado y volvemos a quedar vulnerables frente a que nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros familiares van a hacer parte nuevamente de la guerra, los niños, ya en nuestro Municipio murió una niña de 3 años inocente que no conocía digamos el contexto en el que estaba viviendo; los jóvenes que digamos están presentes en el territorio con problemas de drogadicción entonces también son muy vulnerables, yo pienso que es una constante, no podría decidirme en este momento por ninguno de los grupos.

Entrevistador: ¿Considera que ha habido o hay grupos políticos o grupos armados u otros grupos que incrementan el conflicto social, cómo o de qué manera y qué se debe hacer para manejarlo o gestionarlo adecuadamente?

Líder: Es muy difícil yo decir o garantizar que en el Municipio Hay presencia de grupos armados, yo sé que ha habido muertes, asesinatos, panfletos, letreros en las casas, pero eso no garantiza que yo tenga las pruebas de que existe un grupo como tal en el Municipio; ¿cómo enfrentarlo? Tampoco sabría dar una respuesta concreta, yo pienso que lo que tenemos que hacer las personas del Municipio es tratar de sobrellevar la situación, no quedarnos estancados en el tema de la

violencia sino continuar, trabajar lo más que se pueda en el tema social con nuestros jóvenes y niños y empoderarnos de los procesos que llevamos hasta el momento para que no decaigan en el contexto.

Entrevistador: ¿Qué le hace falta a Ituango para avanzar o para que sus conflictos se puedan resolver pacíficamente o de la manera más adecuada, que se puedan gestionar los conflictos que resulten de la convivencia en ciudadanía?

Líder: Yo creo que todos en general nosotros necesitamos generar confianza en la institucionalidad y que la institucionalidad de verdad haga presencia en los territorios, estamos hablando de acercar el tema de salud, el tema de educación, el tema del sisbén que para muchas de nuestras veredas es un tema alejado, la presencia de la fuerza militar en las comunidades que garantice que los campesinos puedan participar en los diferentes procesos que vienen para el Municipio y en general ser pacíficos, confiar unos en los otros. Estamos a la espera de que las universidades y los entes institucionales que no han venido a nuestro Municipio se acerquen, conozcan de verdad la problemática, pero no tanto la problemática sino la gente que tenemos en nuestro Municipio, que somos sobrevivientes de unos de los conflictos que vivimos y que estamos siempre prestos a buscar soluciones y a continuar adelante.

Anexo 3: Anónimo, mujer discapacitada de Ituango

Entrevista realizada el 23 de enero de 2018. La persona solicitó reserva de su nombre.

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos sociales de Ituango?

Mujer: Yo pienso que actualmente a Ituango le suceden varios conflictos sociales que están acabando con nuestra sociedad, entre ellos es la guerra de poderes y el deseo de tenencia del hombre que a diferencia de sentirse dueño de lo que puede hacer por sus propios medios desea entonces también acaparar todo el poder y es ahí donde viene la desigualdad, la inequidad y por ende un sin sabor social de todas las personas.

Entrevistador: ¿Cómo define usted el conflicto social?

Mujer: Es una pregunta muy interesante porque de alguna manera tiene relación con todas las problemáticas sociales que hay en nuestro municipio, realmente para mí el concepto de conflicto social acontece a la falta de oportunidades que deberíamos tener todas las personas siendo ciudadanos sujetos de derecho como así lo reza la constitución política de Colombia.

Entrevistador: ¿Cómo cree que ha evolucionado el conflicto en el Municipio luego del acuerdo con el grupo armado FARC han aparecido otros conflictos, se han incrementado algunos?

Mujer: Pues tengo la certeza de que en un principio sentimos como esos aires de paz y tranquilidad y ese deseo vehemente en el que todo ser humano piensa y anhela en el que algún día la paz será posible, pero pienso que habrá paz cuando cada uno esté en paz consigo mismo y si no es así no se logra porque cada día entonces va a haber o van a surgir otros grupos u otras personas que sientan como ese deseo de acaparar espacios que otros han dejado para tomar posesión y por ende generar zozobra en la comunidad de Ituango.

Entrevistador: ¿Percibe qué luego del acuerdo con el grupo armado FARC se ha desbordado la institucionalidad, es decir, que hay muchos conflictos pero que el estado no aparece para resolverlos? ¿A qué lo atribuye si es el caso?

Mujer: Yo me atrevería a decir que el deseo por alcanzar la paz y después de unos acuerdos que se han firmado donde el gobierno y muchas instituciones han estado presente, podríamos decir que

aún hace falta entrega, más aportes, más inversión social en las comunidades y mayor participación por ende de los gobiernos, de alguna manera entonces esto se convierte en que el conflicto es más grande y cada vez se está volviendo más difícil resolver una situación que es de todos.

Entrevistador: Desde su percepción, ¿Cuáles de los siguientes grupos u otros son ahora los más vulnerables o que más requieren atención y de qué casos específicamente: mujeres, jóvenes, niños, campesinos, obreros, hombres, familias, grupos religiosos, organizaciones comunitarias, otros, cuáles?

Mujer: Bueno estamos hablando entonces de unos grupos poblacionales que sin duda alguna tienen una procedencia y esa procedencia se llama familia, yo pienso que en su máxima expresión la familia es la sociedad o ese seno en el que se debe empezar a invertir ya que por decir algo, la juventud anda con conductas o ciertos comportamientos que uno se preguntan por qué, por qué está pasando, por qué está sucediendo, y es allí donde está la carencia y el vacío de una familia que precisamente le ha faltado más oportunidades para poder brindar una mejor calidad de vida a sus hijos, entonces al crecer estos grupos se abren a una macro sociedad mucho más grande donde tiene que enfrentarse a la aceptación y la inaceptación y por ende entonces viene como ese deseo de que me escuchen y si no soy escuchado entonces cada persona va tomando represalias en cuanto a esa indiferencia que la misma sociedad le va mostrando.

Entrevistador: Entonces para usted es la familia la que más requiere atención ¿Considera que ha habido o hay grupos políticos o armados u otros grupos que incrementan el conflicto social, cómo, de qué manera, qué se debería hacer para manejarlo o gestionarlo adecuadamente?

Mujer: Sí a veces es muy complicado de pronto dar una opinión al respecto porque uno de alguna manera siente que su punto de vista o su expresión lo está llevando de pronto a tener algún riesgo, sin embargo es muy importante uno poder expresar que los grupos armados han tenido siempre

como ese deseo de hacer participación por decir algo en el área política y es que el área política hoy en día se ve no como esa oportunidad para el cambio y para la constitución de sociedades cada vez mucho mejores si no que la política ha llegado al punto de que las personas suelen entonces actuar o querer estar en ella por intereses propios y eso es lo que precisamente ha hecho que se genere más conflicto social en nuestras comunidades.

Entrevistador: ¿Qué se debe hacer para manejarlo o gestionarlo adecuadamente? ¿Si hay otros grupos políticos o armados que han incrementado el conflicto social qué debería hacerse entonces?

Mujer: Pues yo pensaría que la justicia o por lo menos las leyes deberían ser más severas porque en última instancia entonces terminamos siendo las personas afectadas de igual manera y unos cuantos se benefician de esos intereses políticos.

Entrevistador: ¿Qué le hace falta Ituango para avanzar o para que sus conflictos se puedan resolver pacíficamente o de una manera más adecuada, que se puedan gestionar los conflictos que resultan de la convivencia en ciudadanía?

Mujer: Yo pienso que a Ituango le hace falta entender que muchos conflictos que se generan nacen de la envidia porque hay otras personas que triunfan, nacen de la desigualdad o de la falta de comprensión y por esa falta de amor y de empoderamiento de nuestra propia tierra que lamentablemente entonces se vuelve en una pelea de humanos que en vez de luchar por el bienestar de nosotros mismos y de nuestras comunidades entonces terminamos por destruirnos a nosotros mismos incluso con los comentarios que surgen muchas veces sin criterio alguno sólo con el deseo de dañar la imagen de otras personas.

Anexo 4: Anonimo, ciudadano de Ituango

Entrevista realizada el 22 de enero de 2018. La persona solicitó reserva de su nombre.

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos sociales en Ituango?

Ciudadano: En mi concepto los principales conflictos sociales en Ituango, Pues que te digo, mi manera de pensar yo creo que cuando empezamos a hablar “sociales” Hablamos de una sociedad como tal y una sociedad siempre debe estar lidera entonces yo creo que en mi concepto el liderazgo que hay en el Municipio hace que se generen conflictos sociales por insatisfacción, ¿insatisfacción de qué?, insatisfacción de líderes que hagan o que obren verdaderamente en el Municipio correctamente y a favor del pueblo , entonces no sé si estoy equivocado, pero considero que los conflictos sociales en Ituango son más que todo por falta de liderazgo.

Entrevistador: ¿Cómo defines el conflicto social?

Ciudadanos: El conflicto social en mi concepto lo definido como una insatisfacción de las personas, como una inconformidad, como un desorden, como una entropía, no sé, pues yo siento que un conflicto se genera cuando hay algo que no está acorde a mi gusto, entonces definir un conflicto social en este momento sería como la insatisfacción de un pueblo.

Entrevistador: ¿Cómo cree que ha evolucionado el conflicto en el Municipio luego del acuerdo con el grupo armado FARC, han aparecido otros conflictos, se han exacerbado o se han incrementado algunos?

Ciudadano: pues como tú lo sabes tuvimos un tiempo de una tranquilidad que no no la creíamos impresionante, pero de momento a otro se apareció lo que se tenía que aparecer, el pesimismo del pueblo salió a surgir y en efecto ya no sólo tenemos las FARC, sino que tenemos el golfo de Urabá interviniendo en el Municipio, entonces los que se desarmaron ya están armándose nuevamente

para defenderse del golfo de Urabá y el pesimismo entra y nos lleva a pensar que las cosas se van a dañar, que el conflicto se va a incrementar y que la paz verdaderamente no nos va a tocar si el gobierno no hace algo urgente porque lo estamos viviendo y ya tenemos víctimas por estas nuevas personas que unos quieren venir a coger la plaza que dejó las FARC y otros se van a volver a armar para defender esa plaza, entonces estamos prácticamente viviendo o se puede vivir un conflicto más intenso que el que teníamos.

Entrevistador: ¿Percibe que luego del acuerdo con el grupo armado FARC se ha desbordado la institucionalidad, es decir, que hay muchos conflictos pero que el estado no aparece para resolverlos, a que lo atribuye si es el caso?

Ciudadano: Pues sí, en efecto sí se han incrementado, si se han generado varios conflictos ya y el estado puede que esté apareciendo metiendo fuerza pública porque si he visto el incremento en policía, de pronto el ejército si está ahí, pero yo creo que eso es negligente, que eso son medidas que no hacen o que verdaderamente no llegan al punto de control para que no se vaya a dañar ese proceso que se lleva o esa tranquilidad que estaba viviendo el Municipio, entonces considero que la verdad el estado el papel que está asumiendo no es el ideal, la fuerza pública o la policía, el ejército simplemente es un control de quien entra, quien sale, cojo este malo, pero ellos van a seguir haciendo ochas y panochas como se dice en el monte e intimidando a los campesinos, entonces seguimos en las mismas.

Entrevistador: Desde su percepción ¿Cuál de los siguientes grupos u otros son ahora los más vulnerables o que más requieren atención y de qué casos específicamente: las mujeres, jóvenes, niños, campesinos, obreros, hombres, familias, grupos religiosos, organizaciones comunitarias, otros, cuáles?

Ciudadano: Bueno en mi concepto pues si nos ponemos a mirar todos pertenecemos a una sociedad y todos estamos siendo vulnerados, todos, todos, todos, pero tenemos que tener en cuenta que hay unas personas que tienen una prioridad y en mi caso son los niños y los jóvenes porque se supone que los niños están formando que los niños están aprendiendo, que los niños van a ser el pilar de nuestro país, que los jóvenes van a ser el pilar de nuestro país, entonces ellos van a seguir ahí intimidados, en conflicto, van a seguir viendo lo que se ha vivido en Colombia por más de 50 años, entonces me parece que ellos están siendo muy vulnerados los niños y los jóvenes horrible, los jóvenes si es algo muy preocupante porque se siente como el desorden, como la falta de orientación por parte de mamá, papá que muchas veces no tienen ni tiempo para dedicarles por estar trabajando para bregarlos a sostener, entonces yo creo que estos dos puntos si hay que intervenir rápido antes de que sean más vulnerados.

Entrevistador: ¿Considera que ha habido o hay grupos políticos o armados u otros grupos que incrementan el conflicto social, cómo o de qué manera, qué se debe hacer para manejarlo o gestionar adecuadamente?

Ciudadano: grupos políticos sí los hay, que lo único que quieren es seguir generando conflicto en el país, que su odio, que su resentimiento, que su frustración sigue a flote y que esto no los va a dejar tranquilos hasta que no vean desangrado o no vean acabado a quien en algún momento les hizo daño, entonces esos grupos políticos son los que prácticamente inestabilizan la tranquilidad en el país, incluso hacen campañas para que el pueblo trate de impedir un proceso de paz, la hicieron en algún momento y siguen ahí acechando por los lados interviniendo en la tranquilidad y ellos son los que impiden prácticamente que un proceso de paz o que un pueblo crea verdaderamente en este proceso y se afiance en la tranquilidad y en la paz. ¿Qué se debe hacer para manejarlo o gestionarlo adecuadamente?, un control directamente o severidad con las normas

diría yo para que ellos no entren o no sé, la verdad es algo complejo porque cada quien tiene su punto de vista e ingresar a decirle a un grupo político “no venga usted acá a inestabilizar un proceso de paz” es charro, no tendría sentido porque ellos siempre lo van a hacer, su odio y su rencor no los va a dejar, entonces poderlo gestionar de que ellos no lo hagan o que de pronto no generen esa inestabilidad en el país va a ser algo complejo por lo que cada quien tiene su punto de vista aunque ese punto de vista nos pueda estar afectando a los colombianos, entonces no es fácil poder gestionar algo ahí cuando hay tantas personas que quieren seguir viendo al país desangrado.

Entrevistador: ¿Qué le hace falta Ituango para avanzar o para que sus conflictos se puedan resolver pacíficamente de la manera más adecuada, que se puedan gestionar los conflictos que resulten de la convivencia en ciudadanía?

Ciudadano: Le hace falta en mi concepto, mi respetable concepto, hace falta liderazgo, le hace falta un líder que verdaderamente tenga ese sentido de pertenencia, que interactúe con el pueblo, que haga que el pueblo se sienta seguro, que lo aconseje, que le diga, que lo instruya, que haga sentir esa seguridad, es que yo creo que la seguridad del pueblo también se ve reflejada en un líder, si el líder muestra seguridad y muestra interacción con la sociedad eso afianza mucho y si uno ve directamente las intervenciones en el Municipio, si cuando pasa algo sales y actúas o interactúas con el pueblo y le dices “mira esto se va a solucionar, no se preocupen...” puede que se haya presentado, pero yo siento que falta más, que falta mucho más liderazgo y ese es un papel muy importante, y falta liderazgo no solo para Ituango sino para todo el país, o sea estamos sedientos de un verdadero líder.

Anexo 5: Esteban Úsuga, líder juvenil comunitario de Ituango

Entrevista realizada el 5 de febrero de 2018.

Entrevistador: ¿Cómo percibe usted hoy a Ituango, qué es Ituango hoy?

Líder juvenil: Ituango es un municipio que se viene transformando en muchos aspectos, ya no es el mismo de hace 10 años. Ha tendido un crecimiento demográfico, en infraestructura, en dinamismo económico, entre otros; sin dejar atrás las transformaciones que ha sufrido el conflicto armado, que hoy en día, es una incertidumbre su fin.

A Ituango siempre lo comparo con el ave fénix, ya que siempre renace de las cenizas. Hoy se sigue levantando a pesar de tantos tropezones. Veo un municipio con muchas potencialidades y con muchos retos, un territorio con una riqueza enorme, pero con poco liderazgo desde lo público y poca visión de largo plazo. Hoy nos rodean dos contextos que son de carácter nacional como son el Proceso de paz y el Proyecto Hidroeléctrico Ituango: el primero ha dejado muchas inquietudes, siendo lo más beneficioso para el pueblo, pero que al Estado le ha quedado grande asumir y ocupar espacios, que no genera oportunidades y la inversión social aún llega cojeando. En segundo aspecto está el PHI que a través de EPM ha llegado como una “salvación” por su inversión social, que pronto iniciará generación y las transferencias por venta de energía (así tengan una destinación específica por Ley) llegarán los políticos como aves carroñeras a captar el recurso adicional. Hay esperanza en un tema turístico por lo que significa Ituango en cuanto a historia y transformación, aunque nos sigue faltan bases para fomentar la llegada de turistas, con infraestructura colonial o de “pueblo”, personas conocedoras de la historia, calles en buen estado (aunque ya se está trabajando en eso), se viene cambiando la tecnología del alumbrado público, las vías terciarias y

potenciar nuestra riqueza natural no para su explotación en minerales, sino en la observación y conservación. Queda mucho por hacer y es el Ituango que percibo hoy.

Entrevistador: ¿Cómo define el conflicto social en este municipio? Y ¿Cuáles son los principales conflictos sociales de Ituango hoy?

Líder juvenil: En mi concepto, el conflicto social parte en no creer en nuestra gente, aunque nos caracterizamos por nuestro sentido de pertenencia tan grande por ser de Ituango, nos da mucha dificultad unirnos en torno a causas sociales, en creer en nuestros talentos y nuestras capacidades. Lastimosamente escucho en la calle la frase: “Ituanguino come ituanguino” haciendo referencia a que nos genera cierto bienestar que a algún paisano no le vaya bien.

Lo que explico es algo difícil de discutir con las personas de mi municipio, porque de alguna manera genera malestar. Un conflicto social de esa magnitud a veces ni nos deja ver los errores que cometemos y más fácil llegan las personas de afuera a mostrar en qué estamos fallando. Desde que seamos capaces de al menos convivir con nuestros vecinos, entender que cada persona tiene su punto de vista, que podamos felicitar a quien le va bien, no celebrar de manera irónica a quien le va mal; ahí, una parte del conflicto social terminaría. La situación puede que pase en otro territorio, pero ha sido en los últimos dos años que he analizado eso conscientemente en búsqueda que nuestra población pueda cambiar ese chip.

Nos marca mucho el resentimiento por todo un ambiente de violencia, nos marca los problemas que se solucionan con machete, nos marca en grandes proporciones los chismes, pero nos marca mucho más que no podamos unirnos sobre causas que valen la pena.

Entrevistador: ¿Alguna vez se ha sentido discriminado o estigmatizado por ser de Ituango?

Líder juvenil: Estigmatizado me he sentido, pero creo que he hecho lo necesario por mostrar un Ituango lleno de talento y de gente buena. Siempre que me he presentado (en todos los espacios)

digo de entrada que soy de Ituango. Mucha gente pregunta que si es verdad que hay mucha guerrilla o que al llegar al municipio lo reciben los guerrilleros; a lo cual uno responde con la realidad, pero aclarando todas esas supersticiones que se crean gracias a los medios amarillistas.

A mi parecer, esa falencia o dificultad de la estigmatización, la hemos sabido utilizar para generar soluciones en cuanto a mostrar una imagen positiva, de transformación, donde los hechos negativos son aislados y no constantes. Hemos demostrado que Ituango tienen un significado poderoso de resiliencia y amor propio.

Entrevistador: De los siguientes conflictos, cual o cuales considera más apremiantes o más visibles en Ituango hoy y por qué: seguridad, justicia, empleo, inclusión y oportunidades, propiedad de la tierra, vivienda, educación, salud, recursos ambientales. Si considera otros: ¿Cuáles?

Líder juvenil: Empleo y oportunidades: Ituango enfrenta una situación favorable con la entrada del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, ya que en gran medida ha logrado dinamizar la economía del municipio. Pero hemos estado en el foco, en la mira de todo el mundo y no hemos sabido aprovechar eso; hoy en día nuestros jóvenes a duras penas pueden seguir sus estudios en el territorio, pero adicional, conseguir un empleo es más difícil. Nuestro reto es que las oportunidades lleguen y las nuevas iniciativas sean lideradas por las personas de Ituango buscando que el progreso siga siendo sinónimo de nuestro territorio.

El factor seguridad es algo que volvimos normal, es decir, lo anormal lo convertimos en parte de nuestra vida y hay que cambiar eso. Seguimos viviendo muchas cosas negativas que deben terminar y se debe convertir en cosas positivas.

Necesitamos que el Estado haga presencia y no solo con fuerza pública (que es muy importante), sino también con oportunidades académicas y laborales, que podamos potenciar el

agro por el cual y en gran medida vivimos los ituanguinos. Que también los talentos lleguen al territorio a potenciar los proyectos e ideas. Que Ituango pueda liderar su propio proyecto turístico. Hay mucho por hacer, pero conflictos que debemos resolver para avanzar

Anexo 6: Isbelia Montoya, profesora de la Institución Educativa Municipal

Entrevista escrita, realizada el 15 de febrero de 2018.

Entrevistador: ¿Cómo percibe usted hoy a Ituango, qué es Ituango hoy?

Profesora: Como un municipio con una gran historia, emprendedor, resistente, costumbrista y capaz de salir adelante, un polo de desarrollo con mucho futuro por la construcción de la hidroeléctrica y el proceso de paz. Así mismo se percibe una incertidumbre y una constante preocupación por los hechos violentos que han estado ocurriendo.

Entrevistador: ¿Cómo define el conflicto social en este municipio?

Profesora: Como un fenómeno que ha venido desestabilizando e interfiriendo notablemente en las aspiraciones del progreso de los Ituanguinos. Se origina en la violencia política, el abandono del estado durante muchas décadas, la llegada y permanencia de grupos al margen de la ley, la falta de empleo para todos, la prostitución, la drogadicción. En resumen, difícil de resolver.

Entrevistador: ¿Cuáles son los principales conflictos sociales de Ituango hoy?

Profesora: La confrontación armada, el microtráfico, la violencia intrafamiliar, el embarazo de adolescentes, pero sobre todo la poca confianza en sí mismos por el temor, el complejo y las secuelas marcadas por el proceso violento que ha golpeado por varios años.

Entrevistador: ¿Alguna vez se ha sentido discriminado o estigmatizado por ser de Ituango?

Profesora: Sí, porque existe un marcado concepto en las personas que residen fuera que el Ituanguino es guerrillero. Estigmatizan por lo acaecido. Es una forma brusca de calificar a la población.

Entrevistador: De los siguientes conflictos, cual o cuales considera más apremiantes o más visibles en Ituango hoy y por qué: Seguridad, Justicia, Empleo, Inclusión y oportunidades, Propiedad de la tierra, Vivienda-educación-salud, Recursos ambientales; si considera otros: cuáles?

Profesora: La Seguridad: Por lo que está pasando ahora con tantas muertes, la Drogadicción: La comercialización, distribución y consumo de alucinógenos; la falta de empleo que genera robos e inseguridad; vivienda, la cantidad de familias que carecen de ella y el alto costo de los alquileres.

Anexo 7: Paola Andrea Gutiérrez Marín, comisaria de familia de Ituango

Entrevista realizada el 23 de enero de 2018.

Entrevistador: Inicialmente comisaria, ¿Cuáles son los principales conflictos sociales de Ituango?

Comisaria: Viéndolo desde el ámbito que manejo en la comisaría de familia, la principal problemática que tiene el Municipio de Ituango es el tema de familia, o sea el abandono que hay por las dinámicas que han venido cambiando, hay un abandono desde el núcleo familiar, el conflicto principal es en la familia.

Entrevistador: ¿Cómo define usted el conflicto social en este Municipio?

Comisaria: Como lo mencionaba ahorita, hay unos cambios en la dinámicas que se han venido presentando, al mejorar las vías de acceso al Municipio vienen nuevas personas, negocios, empresas, también se genera otras fuentes de empleo, entonces esto trae a parte de... entre esos

por ejemplo el proyecto Hidroeléctrico, aparte de que ya había como cierta dinámica en el Municipio ese cambio trae cosas positivas, pero, también trae el consumo de estupefacientes, trae algunos actos ilícitos que no se tenían en el Municipio anteriormente y una ruptura familiar como manifestaba yo ahorita en la primer pregunta

Entrevistador: ¿Cuáles son las principales razones por las que reclama o se queja la comunidad de Ituango?

Comisaria: principalmente en la comisaría de familia, el consumo de estupefacientes en los adolescentes, ese es un tema que ha sido muy delicado, en especial porque anteriormente no se tenía tanta trascendencia en el tema si existía pero no era tan visible, no era tan magnifica; y el otro problema es que al tenerse que desplazar los miembros de la familia para el empleo que es una forma positiva, pues generó una dinámica económica, hay un abandono de estos niños y adolescentes, lo que genera que tengan problemas de comportamiento, emocionales, de consumo, también de couting que se desconocía anteriormente, pero ahora es una práctica que hacen las adolescentes o los adolescentes donde se lesionan y se generan laceraciones en el cuerpo, entonces hemos tenido bastante situación de esas y todos estos entornos están basados en núcleos familiares abandonados.

Entrevistador: ¿Qué estadísticas tiene esta comisaría de familia sobre la evolución de las peticiones, quejas o reclamos de la comunidad ituanguina en los últimos años?

Comisaria: En esta comisaría de familia no se han recibido tanto quejas o reclamos como tal, pero acá los procedimientos que se llevan a cabo son conciliaciones en materia de alimentos, de regulación de visitas y también procesos que se adelantan para el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre esos, demandas que se hacen por parte de la comisaría de familia para que ellos adquieran sus derechos como la afiliación, los alimentos y otros derechos que

puedan verse vulnerados y que desde aquí se puedan restablecer; lo que si se ha visto es un incremento en la forma de actuar desde acá, la demanda ha sido bastante incrementada, o sea la gente acude a la comisaría de familia con esas necesidades y se les ha venido dando respuesta, ha mejorado.

Entrevistador: ¿Cómo cree que ha evolucionado el conflicto en el Municipio luego del acuerdo con el grupo armado FARC, han aparecido otros conflictos, se han exacerbado algunos?

Comisaria: Eso tiene varios puntos de vista; desde la comisaría de familia uno ve un acceso mayor desde la gente que viene de la zona rural, tienen un acceso, tienen una confianza en que este es el sistema que deben utilizar para resolver sus conflictos y para llevar a cabo y adelante solicitar que se vean los derechos de los niños, al tener ellos acceso a nosotros, también nosotros hemos tenido mayor acceso a la zona rural, entonces eso es un cambio positivo bastante grande; culturalmente estaban acostumbrados a que sus procesos se resolvieran en el mismo día o en la misma semana, entonces ha sido complicado que atiendan a que esto tiene unas pautas, tiene unas etapas, sin embargo con los días, con los meses han ido atendiendo a eso, entonces si se considera que ha habido un cambio positivo. De negativo tendría el hecho de que hay una falta todavía del estado, todavía no tenemos como lograr la cobertura completa y ala que ellos estaban acostumbrados de una inmediatez, los recursos hay que saberlos administrar y no alcanzarían para lograrlo como quisiéramos pero esa es una meta que tendría que lograr el estado para poder decir que se logró con éxito el proceso de paz y si han habido comentarios de nuevas formas, pero no hay todavía una prueba vehemente de eso.

Entrevistador: Si considera que hay diferenciación, ¿Qué sectores o grupos poblacionales incrementaron sus reclamos o peticiones a la entidad, mujeres, niños, campesinos, obreros, hombres, familias, grupos religiosos, otros? ¿Cuáles?

Comisaria: En el tema de comisaría de familia encontramos que habitualmente las que consultan son las mujeres, sin embargo, este año y el anterior han acudido también bastante los hombres en el reclamo de sus derechos como padres y a las visitas y la regulación de las mismas, y los menores de edad que ya tienen como más claro cuáles son sus derechos, entonces también acuden como a preguntar, a reclamar los mismos.

Entrevistador: Desde su percepción, ¿Cuáles de los anteriores grupos u otros son ahora los más vulnerables o que más requieren atención y de qué casos específicamente?

Comisaria: En principio diríamos que los niños han sido como los más vulnerables, pero tenemos unas normas muy amplias donde los protegemos derechos y donde tenemos muchas formas de apoyarlos, recursos, vienen instituciones, está el ICBF, está la fiscalía, el juzgado, todos como en pro del restablecimiento y la protección de sus derechos, si bien son más vulnerables, también tienen más apoyo a nivel municipal y nacional, entonces esto haría más vulnerables a las mujeres que si bien es cierto acuden acá porque son víctimas de malos tratos, de violencia intrafamiliar y que hay una norma que las acoge, la protección de las mismas no es tan amplia, por decir, dar una medida de protección para la zona rural es ilógico porque yo no tengo como garantizar esa medida de protección, entonces luego vendría que el sistema de salud sería quienes tendrían que acogerla en un hogar unos días y darle la alimentación y el hospedaje el tiempo que necesitara para su protección, pero esto no se aplica, entonces esto las hace realmente vulnerables las hace que permanezcan en un lugar donde están siendo violentadas.

Entrevistador: ¿Qué papel está cumpliendo la comisaría de familia en la atención a familias, especialmente las que han reclamado por conflictos como desplazamiento que es inherente al conflicto armado?

Comisaria: La comisaría de familia no hace diferencia entre quienes son víctimas y quienes no porque la atención es igual para todos, si hay una mujer que requiere de un acompañamiento es independiente o indiferente el hecho de que sea víctima del conflicto, se tiene en cuenta para la atención porque es una persona mayormente vulnerada y pues la hace más sensible, pero en realidad acá todos tienen el mismo tipo de atención y acompañamiento; y el apoyo a las familias esta desde el equipo psicosocial con el que contamos acá en el Municipio.

Entrevistador: ¿Qué papel está cumpliendo la comisaría de familia en la atención, prevención, diagnósticos o tratamientos si es el caso en los nuevos conflictos que surgen o resurgen de acuerdo con sus estadísticas?

Comisaria: La comisaría de familia tiene un plan de acción para el 2018 que es en el tema de prevención de consumo de estupefacientes que si bien es cierto la ley (no me acuerdo ahorita), hay una norma que especifica cual es el procedimiento para el consumo de estupefacientes y no somos nosotros, es la entidad prestadora de salud, sin embargo, como acuden a nosotros y también tenemos una obligación de prevención, entonces tenemos enfocado el tema de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en las instituciones y pensamos también descentralizarlo un poco y hacerlo al público, trabajar con la familia ya no tanto en escuela de padres porque esto suena un poco aburrido para los papás increíblemente, pero si como talleres donde ellos de forma vivencial participen y comprendan la situación de sus hijos y de la juventud de hoy en día; en diagnósticos en realidad no tenemos un diagnóstico más allá del que se hizo para la política pública que ese si fue un trabajo que no fue de comisaría de familia sino de la mesa de infancia y otras entidades que nos acompañaron, entonces no tenemos un diagnóstico para decir esta es la situación basada en esos indicadores y en estas problemáticas sino de lo que día a día vamos

desempeñándonos y descubriendo aquí, entonces la prevención es parte pero del plan de acción de la comisaría tanto en tema de familia y juventud.

Entrevistador: ¿Qué considera que le hace falta a la comisaría de familia y a la institucionalidad en general en Ituango para ser eficiente, oportuna o para cumplir a plena cabalidad en caso de que los considere con las funciones que la comunidad requiere?

Comisaria: Ese punto es bastante importante porque si bien es cierto que esta la disposición y estamos un equipo completo, la población es muy grande y el territorio es muy extenso para poder llegar a todas las personas que nos requieren y si estamos aquí en la oficina, entonces hace falta en la zona rural y si nos vamos para la zona rural entonces hacen falta aquí en la oficina y la dinámica es muy movida, todo el tiempo hay personas consultando, todo el tiempo hay personas que requieren de la demanda o de la atención del equipo psicosocial, los talleres si se programan al año nos son suficientes o no van a abarcar a toda la población, entonces nos falta digamos un equipo más grande, necesitamos más personas, sin embargo, esto requiere de recursos, entonces si lo que tenemos es este equipo, apoyarnos en las demás instituciones. Nos falta entonces si somos conscientes de que no tenemos la capacidad económica para ampliar el recurso humano, sí deberíamos unificar ese mismo recurso que tenemos en un mismo proyecto y no que se genere como ha venido hasta ahora que cada quien hace su labor, el poquitico que puede hacer, en donde puede hacer y se quedan muchos otros vacíos, si nos uniéramos y uniéramos esos esfuerzos, sería más posible abarcar la mayoría de los problemas que se ven acá.

Referencias

- Adarve, C. (2016). *La recuperación y consolidación de Ituango: un asunto de Estado más allá de la firma de La Habana* (Tesis de maestría). Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.
- Aguirre, R. (26 de febrero de 2018). Combates y muerte reviven el temor de la guerra en Ituango. *El Colombiano*. Recuperado de <http://www.elcolombiano.com/colombia/combates-y-muertes-reviven-el-temor-de-la-guerra-en-ituango-DB8254476>
- Aristizábal, J. (2018). El lento renacer de El Aro después de la masacre. *Semana Rural*. Recuperado de <https://semanarural.com/web/articulo/masacre-de-el-aro-en-antioquia-20-anos-despues-del-horror/413>
- Ávila, A. y Londoño, J. E. (2017). *Seguridad y justicia en tiempos de paz*. Bogotá: Debate.
- Calderón Concha, P. (2009). Teoría de conflictos de Johan Galtung. *Revista paz y conflictos*, (2), 60-81.
- Collier, P. (2000). *Economic causes of civil conflict and their implications for policy*. Washington, DC: World Bank. Recuperado de https://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/economic_causes_of_civilwar.pdf
- Congreso de la República. (22 de diciembre de 1993). Artículo 45. [Transferencia del sector eléctrico]. *Ley general ambiental de Colombia*. [Ley 99 de 1993].
- Coser, L. A. (1970). *Nuevos aportes a la teoría del conflicto social*. Buenos Aires: Amorrort.
- Dahl, R. (1992). *La democracia y sus críticos*. Barcelona: Paidós.
- Dahrendorf, R. (1993). *El conflicto social moderno*. Madrid: Mondadori.
- Duncan, G. (2006). *Los señores de la guerra*. Bogotá: Editorial Planeta.
- El Espectador. (5 de abril de 2018). La Amazonia tienen los mismos derechos que una persona. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-amazonia-colombiana-tiene-los-mismos-derechos-que-una-persona-articulo-748340>
- El Espectador. (6 de abril de 2018). Detalles de la sentencia de la Corte Suprema que le dio derechos a la Amazonia. *El Espectador*. Recuperado de <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/detalles-de-la-sentencia-de-la-corte-suprema-que-le-dio-derechos-la-amazonia-colombiana-articulo-748441>

- Fontaine G. (2004). Enfoques Conceptuales y metodológicos para una sociología de los conflictos ambientales. En M. Cárdenas M. y M. Rodríguez. (Eds.), *Guerra, sociedad y medio ambiente* (pp. 503-533). Bogotá: FES.
- Fundación Paz y Reconciliación (Pares). (2017). *Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo: A un año de la firma del acuerdo de paz*. Recuperado de http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171123092706/Termino_la_guerra.pdf
- Gallo, C. (20 de octubre de 2008). Mapa de Ituango. [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://ituango.blogspot.com/2008/10/mapa-de-ituangohaz-doble-clic-e.html>
- Galtung, Johan (1998) *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución: Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Bilbao: Gernika Gogoratuz.
- Garay, L. J. (Coord.). (2002). *Repensar a Colombia: hacia un nuevo contrato social*. Bogotá: Tercer mundo editores.
- García Marzá, V. D. (2008). Sociedad civil: una concepción radical. *Recerca, Revista de Pensament i anàlisi*, (8), 27-46.
- Homer-Dixon, T. (1991). On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict. *International Security*, 16(2), 76-116.
- Londoño-Toro, B., Güiza, L., y Muñoz-Ávila, L. M. (2012). *Conflictos ambientales en Colombia. Retos y perspectivas desde el enfoque de DD. HH. y la participación ciudadana*. Bogotá: Universidad del Rosario.
- Macías, J. (26 de febrero de 2018). Las nuevas guerras que quitan el sueño en Ituango y Briceño. *El Colombiano*. Recuperado de <http://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/guerra-en-ituango-antioquia-tras-desmovilizacion-de-las-farc-FX8257531>
- Mason, A. (2000). La crisis de seguridad en Colombia: causas y consecuencias internacionales de un estado en vía de fracaso. *Colombia internacional*, (49-50), 82-102.
- Matta, N. (26 de febrero de 2018). Los audios de la batalla entre disidencias de Farc y Urabeños. *El Colombiano*. Recuperado de <http://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/los-audios-de-la-batalla-entre-disidencias-de-las-farc-y-clan-del-golfo-en-ituango-XN8258505>.
- Medina Velásques, C.Y. La seguridad ciudadana en Colombia desde 1980 hasta la actualidad (2013) (Master's thesis, Facultad de Ciencias Sociales).
- Melucci, A. (1994) ¿Qué hay de nuevo en los "nuevos movimientos ambientales"? En E. Laraña y J. Gusfield. (Eds.), *Los Nuevos Movimientos Sociales. De la ideología a la identidad* (pp. 119-150). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Molano, A. (2013). *Dignidad campesina. Entre la realidad y la esperanza*. Bogotá: Ícono Editorial.
- Montoya, A. (15 de diciembre de 2017). El conflicto social en Ituango [Documento inédito]. Aporte personal del historiador.
- Mouffe, C. (2012). An agonistic approach to the future of Europe. *New Literary History*, 43(4), 629-640.
- Mouffe, C. (2016). *La paradoja democrática: el peligro del consenso en la política contemporánea*. Barcelona: Gedisa.
- Municipio de Ituango. (10 de junio de 2017). *Por medio del cual se realiza una modificación técnica del componente general y de inversiones del Plan de Desarrollo del Municipio de Ituango "Todos contamos para el cambio en la construcción de paz y reconciliación 2016-2019"*. [Acuerdo 011]. Recuperado de [http://www.ituango-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019%20\(Reformulado\).pdf](http://www.ituango-antioquia.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionControl/Plan%20de%20Desarrollo%202016%20-%202019%20(Reformulado).pdf)
- Municipio de Ituango. *Plan Municipal de Cultura 2016-2025*. Recuperado de <http://www.ituango-antioquia.gov.co/Paginas/default.aspx>.
- Muradian, R., Martínez-Alier, J. y Correa, H. (2003). International capital versus local population: The Environmental Conflict of the Tambogrande Mining Project, Peru. *Society and Natural Resources*, (16), 775- 792.
- Palacios, M. (2012). *Violencia pública en Colombia, 1958-2010*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Parques Nacionales. (2004). *Plan de manejo Parque Nacional Natural Paramillo (2004- 2011)*. Recuperado de <http://www.parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.0120>
- Patiño, C. (2010). *Guerra y construcción del Estado en Colombia*. Bogotá: Universidad Militar Nueva Granada.
- Pécaut, D. (2001). *Guerra contra la sociedad*. Editorial Planeta Colombiana, Bogotá.
- Pizarro Leongoméz, E. (2015). *Una lectura múltiple y pluralista de la historia. Comisión de historia del conflicto y sus víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia*. Recuperado de <http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/mesadeconversaciones/PDF/una-lectura-multiple-y-pluralista-de-la-historia-1447178719-1460381905.pdf>
- PNUD. (2011). *Colombia rural. Razones para la esperanza*. Recuperado de http://www.co.undp.org/content/dam/colombia/docs/DesarrolloHumano/undp-co-resumen_ejecutivo_indh2011-2011.pdf.

- Salazar, B. (2015). Las metáforas de una guerra perpetua. *Coherencia*, 2(2), 157-160. Recuperado de <http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/coherencia/article/view/3850/3141>
- Sandoval, A. (2007). *Comprendiendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA)*. México D.F.: Equipo Pueblo. Recuperado de <http://www.equipopueblo.org.mx/desca/descargas/comprendiendo.pdf>
- Santandreu, A. y Gudynas, E. (1998). *Ciudadanía en movimiento. Participación ciudadana y conflictos ambientales*. Montevideo: CLAES, FESUR y Ediciones Trilce.
- Sepúlveda, C.V. (2013). La reconquista de Ituango: un reto en seguridad y defensa nacional del Estado colombiano. *Analecta política*, 3(4), 139-160.
- Silva García, G. (2008). La teoría sociológica del conflicto. Un marco teórico necesario. *Prolegómenos*, 11(22), 29-43.
- Stiglitz, J. E. (2015). *La gran brecha: qué hacer con las sociedades desiguales*. Madrid: Taurus.
- Tzifakis, Nicolaos. (2007). Post Conflict Economic Reconstruction. En W. F. Danspeckgruber. (Ed.), *Encyclopedia Princetoniensis: The Princeton Encyclopedia of Self-Determination*. Princeton: Princeton University, Liechtenstein Institute on Self-Determination.
- Uribe de Hincapié, M. T. (1999). Las soberanías en disputa: ¿Conflicto de identidades o de derechos? *Revista Estudios Políticos*, 15, 23-45.
- Valencia, C. (2013). La reconquista de Ituango: un reto en seguridad y defensa nacional del Estado colombiano. *Analecta política*, 3(4), 139-160.
- Verdad Abierta. (8 de abril de 2013). Ituango 30 años en guerra. *Verdad Abierta*. Recuperado de <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/40-masacres/4517-ituango-treinta-anos-de-guerra/>
- Verdad Abierta. (9 de marzo de 2018). En Ituango hay un profundo desencanto con el proceso de paz. *Verdad Abierta*. Recuperado de <https://verdadabierta.com/en-ituango-hay-un-profundo-desencanto-con-el-proceso-de-paz/>
- Walter, M. (2009). Conflictos ambientales, socioambientales, ecológicos distributivos, de contenido ambiental. Reflexionando sobre enfoques y definiciones. *Boletín Ecos*, 6, 1-9.